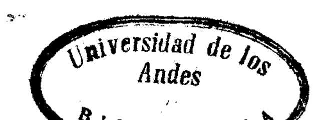
JACQUES BAINVILLE

LA TERCERA REPÚBLICA

TRADUCCIÓN DE

JOSÉ CORTS GRAU

MADRID
CULTURA ESPAÑOLA
1 9 4 0



Gráfica Universal.—Evaristo San Miguel, 8.—Teléf. 34079

AL LECTOR

La presente obra del clarividente académico francés Jacques Bainville, que la editorial «Cultura Española» ofrece hoy al público, estaba en prensa en julio de 1936 al producirse el Alzamiento Nacional.

Era propósito de los editores, en aquel entonces, combatir el falso tópico que la pereza mental y la ignorancia política e histórica habían introducido en importantes sectores que atribuían los males que la República causaba en España al carácter y modo de ser de los españoles, desconociendo que las instituciones republicanas en abstracto eran corruptoras y generadoras forzosas del mal y de la anarquía. ¡Si la República española se pareciese a la francesa! Esta exclamación era repetida por personas de raigambre conservadora, que deslumbradas por el orden externo que apreciaban durante sus temporales estancias en Biarritz o París, ignoraban por completo las interioridades del régimen de la vecina república de allende el Pirineo.

Para ilustrar esa admiración y deshacer erróneas concepciones que favorecían el ambiente de accidentalismo tan dañino a los verdaderos intereses de España y los españoles, se pensó en la conveniencia de dar a conocer en nuestra Patria la breve y jugosa

historia de la Tercera República francesa que Bainville acababa de publicar. Adquiridos los derechos de traducción, traducida la obra por el catedrático universitario D. José Corts, y compuesta tipográficamente al producirse el Alzamiento, han soportado los moldes los treinta meses largos de terror rojo y de intenso bombardeo padecidos en la Imprenta, lo que aconseja a «Cultura Española» rematar la tarea suspendida en julio de 1936 y dar a la luz pública esta obra, aunque su interés práctico haya de momento decrecido.

PROLOGO

¿Cabe escribir la historia de la tercera República como escribiríamos la de una República de la antigüedad? Lo acontecido en Francia desde el 4 de septiembre de 1870 hasta nuestros días, ¿podemos considerarlo con igual criterio que consideraríamos los acontecimientos de Megara o de Selinonta, quinientos años antes de nuestra Era? Pregúntese previamente el autor, nos dirá alguno, si se siente él capaz de esa abstracción.

Intentarla sí la hemos intentado; bien que, naturalmente, sin jactarnos de componer uno de esos relatos que llaman «imparciales». La verdadera imparcialidad consiste en hacerle justicia a cada cual. En cuanto a un relato explicativo, dicho se está que se propone discernir el porqué de los hechos.

Quizá se nos objete lo exiguo de la diferencia entre ambos métodos, puesto que el segundo no es menos subjetivo que el primero; al cabo, no hay historia sin interpretación. Aunque la Francia contemporánea fuera para nosotros un nomen incorporal, *como la antigua Megara, ello no nos excusaría de adoptar un cierto punto de vista para exponer*

el orden de los acontecimientos. De suerte que siempre podrá reprochársele al autor esta elección previa de su punto de vista.

Vaya por delante, pues, la afirmación de que el elegido por nosotros es, a nuestro entender, el puramente naturalista.

La tercera República ha entrado en el año sesenta y seis de su vida. Las dos primeras la hubieron breve. En varios pueblos hemos visto caer también muy presto el régimen republicano por dictaduras de diversa índole. En Francia, a pesar de sus firmes tradiciones monárquicas, la República no sólo ha continuado, sino que ha conseguido guardar las formas originarias. Hasta el presente no la ha acompañado ninguna revolución social. En fin, esta República nos ofrece la muy rara combinación de democracia y libertad, mezcla tan inestable que en otros tiempos se descompuso muy de prisa entre nosotros, y ahora se descompone igual en otros países. Dos generaciones han pasado, y Francia sigue con las mismas instituciones. Cierto que las condiciones sociales han cambiado, pero menos que entre otros pueblos; y en cuanto a las políticas, por ahora apenas han sufrido mudanza. Y seguimos mezclando el régimen republicano y el régimen parlamentario, mezcla que se juzgaba irreconciliable y absurda, tanto que los autores de la Constitución americana han pensado, con toda la escuela, que era preciso optar por uno u otro régimen, y, en efecto, en los Estados Unidos no existe el parlamentarismo, las Cámaras no pueden derribar un Gobierno.

No parece, pues, exagerado afirmar que la tercera República presenta un caso excepcional de conservación. ¿Cómo ha podido ser esto? ¿Cómo ha llegado a ser? ¿Cuáles han sido las causas, cuáles los factores de esta longevidad? ¿A qué o a quién se debe? He ahí las cuestiones que nuestro relato trata de contestar.

Ocioso es decir que este libro no puede ofrecer sino una visión general y un resumen. Demás de que la historia de la tercera República no comienza a ser conocida de veras sino hasta la fecha en que se detiene la gran Historia de la Francia contemporánea, *de Gabriel Hanotaux. Más allá apenas cabe sino el escorzo y verosímilmente hay que afirmar con Juan Dietz, en su primorosa biografía de Julio Ferry: «hasta que no se hayan publicado las referencias de los congresos masónicos, nos seguirá faltando la clave de muchas cosas.»*

Por lo que respecta a la cronología y a los pormenores, será muy útil la consulta de dos obras tan diferentes en su concepción como La tercera República, *de Roberto David, y el estudio de Seignobos en la* Historia de la Francia contemporánea, *de Lavisse.*

Una última observación. De propósito, hemos contado las presidencias a partir del septenio de Mac Mahon, puesto que la de Thiers fué anterior a la Constitución de 1875.

J. B.

I

En el interior del 4 de septiembre

El domingo 4 de septiembre de 1870, una proclama del Consejo de Ministros, presidido por el conde de Palikao, hacía sabedor al pueblo francés del desastre de Sedán. El Emperador se hallaba prisionero. El Imperio iba a hundirse. ¿Qué hacer? ¿Iba a proclamarse la República?

La Cámara había pasado la noche deliberando. Julio Favre, Gambetta y otros veinticinco diputados de la izquierda pedían, con el destronamiento de Luis Napoleón y de su dinastía, que la Asamblea designara una «Comisión de gobierno». En aquel trance ni los mismos republicanos creían que se pudiera salir de la legalidad, y estimaban que, al vacar el Poder, éste debía pasar a la representación nacional salida del sufragio universal, análogamente a como el Cuerpo legislativo lo hubo de recoger en 1814 y en 1815.

Tan común era esta convicción que toda la mañana del 4 de septiembre se la pasaron elaborando un compromiso. A la una y cuarto, cuando se abrió la sesión, Palikao propuso un «Consejo de gobier-

no y de defensa nacional», del que él sería lugarteniente general. Dicho proyecto no hablaba ni del Emperador ni de la Regencia, y llevaba simplemente esta firma: *Eugenia*. La concesión no era leve, pero fué insuficiente.

Thiers se impone, y actúa de mediador entre Palikao y Julio Favre, declarando su preferencia por la moción de aquél. El interés de la unión, afirma, exige que se deje ahora a un lado la cuestión del destronamiento. A ruego de varios diputados de la derecha, los términos «en vista de la vacante del Poder», que figuraban en su texto primitivo, quedan sustituídos por estos otros, muy vagos ya adrede: «en vista de las circunstancias». En razón de estas «circunstancias», Thiers, apoyado por cuarenta y siete de sus colegas, propone una «Comisión de gobierno y de defensa nacional» nombrada por la Cámara; pero con la promesa de convocar una Constituyente así que las «circunstancias» lo permitan. Se le ve a Thiers vacilar ante lo desconocido.

La Asamblea, pues, cuenta con que va a ser ella la que ejerza el Poder, y se cree dueña de la situación. Las Mesas examinan las tres mociones presentadas. Sino que, mientras las van examinando, la multitud, agolpada en la plaza de la Concordia, va invadiendo el Palacio de Borbón tras de los guardias nacionales, y reclama ya el fin del Imperio.

En aquel momento, ¿quién saldrá a recomendar orden, calma, moderación, «silencio solemne»? ¿Quién va a suplicar a los «ciudadanos» que aguarden el resultado de la deliberación que continúa y tengan confianza en sus representantes? Gambetta, que ha subido a la tribuna y parece sordo a los gritos de «viva la República». Gambetta habla, pero los asaltantes no le escuchan. Para apaciguarlos, se decide a declarar por su propia boca que ni Luis Napoleón ni su dinastía volverán a reinar ya sobre Francia. «¿Y la República? ¡Proclamad la República!», vuelven a gritar furiosos. Julio Favre les da esta respuesta ambigua: «No es aquí donde debemos proclamar la República.» Un tal Peyrouton, diputado de la izquierda, insiste en la proclamación fulminante. Julio Favre resiste todavía: «Donde debemos proclamarla es en el Ayuntamiento. Vamos juntos.» Era éste el medio de dejar libre a la Cámara y cortar aquella «profanación de la Asamblea» y evitar que en medio del tumulto se tomasen medidas revolucionarias. Gambetta ve la intención de Julio Favre y se une a él. Los dos, a la cabeza de la multitud, encamínanla al Ayuntamiento.

Thiers y los diputados que permanecen en el Palacio de Borbón deciden entonces restablecer su texto: «en vista de la vacante del Poder». Todavía consideran aquello como un incidente sin gravedad, y se disponen a un acuerdo con los colegas que han marchado al Ayuntamiento. En ese instante se enteran de que acaba de constituirse un Gobierno provisional «por aclamación popular», es decir, bajo la amenaza del motín. Es Julio Favre quien trae la noticia y quien les pide su ratificación. Protestan algunos. Thiers viene a calmarlos, y les aconseja que se inclinen ante el hecho consumado y «se retiren con dignidad». El Cuerpo legislativo ya no existe. Ha llegado la revolución.

Estos episodios del 4 de septiembre muestran cómo ni Thiers, ni Julio Favre, ni el propio Gambetta, sentían gran prisa por instaurar la República. Bien es cierto que en aquel instante Thiers quizá era todavía orleanista. Sea de ello lo que fuere, él se juntaba con los jefes de la izquierda para frenar el movimiento. ¿Por qué? Porque tanto ellos como él dudaban de que Francia se hallase en condiciones de aceptar el régimen republicano.

Unos y otro recordaban que el 8 de mayo, tan sólo cuatro meses antes, un plebiscito había dado al Imperio 7.336.000 «sí» contra 1.560.000 «no». Los fracasos de la política imperial, Méjico, Sadowa, la amenaza de Prusia, no habían alterado el ambiente del país. El *asunto* Baudin, las *Linternas* de Rochefort, todo ello había tenido inmensa resonancia en París, pero apenas trascendió a provincias. En la misma capital, los «no» apenas habían sobrepasado en 50.000 a los «sí». Ahora las «circunstancias», evidentemente, son muy otras: el desastre, la invasión, la quiebra fulminante del Imperio. El Emperador ha entregado su espada al enemigo. La Emperatriz ha salido en un simón de las Tullerías. El Trono está «vacante» de verdad. ¿Ratificará Francia el retorno a una República impuesta por la violencia? Tampoco puede asegurarse. A la verdad, lo que ha habido es una insurrección contra el Cuerpo legislativo, invadido primero y anulado después. Los políticos de la izquierda se hallan temerosos de la guerra civil.

Y no es que piensen en una reacción bonapartista. Con Sedán se ha hundido el prestigio del Segundo Imperio. Su imparcial historiador Pedro de la Gorce observa cómo Napoleón todavía hubiera podido salvar un destello de la gloria imperial: bastaba intentar una salida heroica, y su derrota rememorará la de Waterloo más épica aún si encontrara allí una bella muerte. Pero esto suponía arrastrar 80.000 hombres a esa muerte, y a Napoleón le horrorizó la idea. Tiene razón Pedro de la Gorce. Ese desastre sangriento, fúnebre, neroniano, hubiera alcanzado con el tiempo caracteres sublimes. Napoleón III capituló para salvar vidas humanas; su rendición fué bondad de corazón, resignación fatalista, expiación. Sedán quedó como el nombre del desastre, sin gloria. La «vergonzosa capitulación de Sedán», había de decir Gambetta en su proclama del 9 de octubre. La palabra iba a perpetuarse.

Los republicanos de la víspera, que recibían el Poder el 4 de septiembre, sabían muy bien que nadie se alzaría en defensa del Imperio caído. Y sabían también que la República tenía mala fama, y que las provincias detestaban las revoluciones de París. Los más prudentes de la izquierda desconfiaban de los exaltados, sentían que allí estaba el peligro, y cuidaron inmediatamente de tranquilizar al país. Para salvar siquiera una apariencia de legalidad recalcaron el hecho de que su Gobierno, titulado «de defensa nacional», estaba compuesto por diputados de París; con lo que, en cierto modo, continuaba el Cuerpo legislativo. Por añadidura, eligieron presidente al general Trochu, «soldado, católico y bretón». Y, al mismo tiempo, era llamado a desempeñar la Prefectura de Policía de Kératry, diputado de

la oposición, pero que tenía «la confianza de la burguesía».

He ahí, pues, que la jornada del 4 de septiembre, la primera de la tercera República, viene a ofrecer en sí el panorama general de la historia del régimen. Allí están en germen los problemas que había de resolver, las ideas y los intereses que había de manejar. Sin aquellos republicanos de acción que habían forzado las puertas del Palacio de Borbón y gritado y amenazado tumultuosamente en la plaza del Ayuntamiento, el Cuerpo legislativo del Imperio hubiera continuado siendo el mandatario de Francia. Tanto el alumbramiento como la viabilidad de la República y su continuación, ha necesitado el concurso de los revolucionarios. Pero este concurso la comprometía, al mismo tiempo, ante los sectores pacíficos de la población, y le era preciso igualmente moderarse. Este juego de equilibrio aparece, instintivo, desde el 4 de septiembre, y los años irán convirtiéndolo en ley.

Hay que remontarse más allá para descubrir los trazos originarios de los partidos que iban a asociarse y a combatirse, alternativamente, en el seno de la República. En la izquierda, que formaba el frente de oposición al Imperio, venían a confluir cuatro corrientes, más aún, cuatro grupos muy dispares, pero perfectamente acordes. A partir de este momento, hay que distinguir allí los burgueses, que apenas difieren de los orleanistas y se hallan muy cerca de los hombres del Imperio liberal: tales, Julio Favre, Ernesto Picard, a quien para seguir el ejemplo de Emilio Ollivier quizá sólo le había faltado el tiempo. Junto a éstos, radicales que se inclinaban, en parte, al oportunismo, y cuyo método puede leerse a través de las líneas del programa de Belleville, el célebre programa de Gambetta. Los había todavía «intransigentes», cuyo tipo era Rochefort, y, finalmente, socialistas, puesto que ya se había fundado la Asociación Internacional de Trabajadores. En 1869 Rochefort habíase presentado contra Julio Favre en una de las circunscripciones de París, donde también era candidato el socialista Cantagrel. No habiendo reunido ninguno de los candidatos mayoría absoluta («ballotage»), Julio Favre fué luego elegido con el sobrante de los votos de derecha y con muy pocos de diferencia sobre Rochefort, en cuyo favor se había retirado Cantagrel. Vislúmbranse aquí las formaciones electorales del futuro, los «blocs» y el Cartel.

Y aún hay que ir mucho más lejos para encontrar el origen de otra demarcación. Si orleanistas y republicanos se habían unido, en nombre de las libertades públicas y de las instituciones representativas, para oponerse al Imperio, también se habían juntado republicanos y bonapartistas para combatir la Restauración y la monarquía de Julio. En su más auténtica filiación, en su tradición más pura, el partido republicano procedía de la Convención. En su seno abrazábanse girondinos y jacobinos. El había detestado los tratados de 1815. Según el espíritu de la Revolución francesa, ese partido había de ser, pues, nacionalista y partidario de la guerra, lo cual no le impedía abominar del militarismo y reclamar la abolición de los ejércitos permanentes. Estos elemen-

tos han de volverse a encontrar en la tercera República.

Debido a esta tendencia, muy acusada en él entonces, el partido republicano era el partido de la guerra. ¿No era el mismo que, bajo el Imperio de Napoleón III, había aplaudido las campañas de Crimea y de Italia? Esta reputación de «belicismo» contribuía en mucho a alejar de él los núcleos de población pacíficos, sobre todo los rurales. En sus brazos la tercera República estuvo a punto de perecer por demasiado guerrera.

Por lo que respecta al Imperio, sentimientos encontrados revolvían contra él la mayoría de los que aún lo habían votado en mayo. Sobre él pesaba el rencor perdurable de un país que era conservador, apegado a su tranquilidad, sumiso, por horror a los cambios, a la autoridad establecida, y que de pronto se ve turbado con todas sus consecuencias: no era eso lo que votó en el plebiscito. Había transigido con las otras guerras, cuyo teatro estaba muy lejos; pero ésta, convertida en súbita catástrofe, no podía perdonársela ni a Napoleón ni a su dinastía. El dolor y la humillación de la derrota habíanle dejado un amargo resentimiento. Sobre el Imperio cayó el reproche de haber provocado una guerra para perderla, de haber atraído la tempestad para capitular después. Con todo ello, el partido republicano, cuyo oráculo en el Gobierno provisional era Gambetta, cedía a su propensión natural y convertíase inmediatamente en el partido de la patria en peligro, de la leva en masa, de la «lucha a ultranza», de la «guerra nacional», de la «guerra a muerte».

He aquí la amenaza de impopularidad que pesaba sobre la tercera experiencia de República que hacía Francia después de la Revolución. Thiers lo advertía, y, por lo bajo, llamaba a Gambetta «el loco furioso», calificativo que un poco más tarde le lanzaría desde la tribuna. Era insensato prolongar una resistencia con tropas improvisadas. Y aún había más. Había que estos republicanos, vueltos al 1792, estaban divididos. Los miembros del Gobierno de la Defensa nacional que habían quedado en París no se entendían con la delegación de Tours: tachábanla de timorata y demasiado propicia a las razones de los viejos. A comienzos de octubre les adjuntan a Gambetta como inyección de energía, y ellos mismos, en un París sitiado, peléanse con los que quieren desbordarles. El 31 de octubre fué una «jornada» digna de la Revolución: durante algunas horas, el Gobierno provisional estuvo prisionero de la revuelta, aquella misma revuelta que lo había creado el 4 de septiembre, y en un tris estuvo que la Comuna no lo arrastrara.

La distancia ha ido prestando a estos acontecimientos un carácter heroico. Vióse inmediatamente la incoherencia, la agitación, el absurdo de combatir contra un invasor disciplinado cuando en Francia sólo reinaba el desorden y la confusión. La República había dejado malos recuerdos: dos tentativas seguidas de la convulsión, y rematando ambas en una dictadura impotente para fundar un verdadero Gobierno. Y ésta, que existía desde el 4 de septiembre, no rehabilitaba la institución. ¿Cómo sorprenderse, pues, de que el país, llamado a votar el 8

de febrero de 1871, eligiera una asamblea conservadora? Bien que no lo había sido menos la de 1849, nombrada bajo la impresión de las sangrientas jornadas de julio, y acabó disuelta por el golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte.

Gobierno provisional, leva en masa, guerra a muerte, todo cuanto se eſtaba haciendo durante aquellos cinco meses hurtábase a la opinión de los electores. Ahora se les había planteado una cueſtión, la de paz o la de guerra, y el partido republicano era el de la guerra. Gambetta proteſtaba contra el armisticio: en términos tales que Jorge Sand calificaba de «embriaguez de orgullo» lo que Thiers había calificado de «locura furiosa». El 8 de febrero, el cuerpo electoral escogió la paz. ¿A quién se dirigiría para asegurarla? A los partidos de aquellos regímenes que la habían mantenido siempre, a los monárquicos de la Reſtauración y de julio. Por donde la mayoría de la Asamblea vinieron a integrarla legitimiſtas y orleaniſtas, dos tendencias entre las cuales no diſtinguía demasiado el sufragio universal. Otro rasgo, pues, de semejanza entre eſta Cámara y la de 1849.

Un nombre, sobre todo, había surgido con fuerza excepcional en eſtas elecciones: Adolfo Thiers aparecía elegido por veintiséis departamentos, y era con ello el héroe de una especie de plebiscito. Thiers era el profeta que había acertado, el hombre prudente que había prevenido al Imperio contra los grandes errores. Con sólo escucharle, hubiéranse evitado aquellas públicas desgracias. Y él era todavía quien acababa de aparecer en su vejez serena como la encarnación del buen sentido, oponiéndose a los vanos

arrebatos bélicos. El era la imagen del patriotismo reflexivo que se inclinaba ante lo inevitable, no sin antes obtener del vencedor cuanto había podido arrancarle. Eſte voto múltiple era el gran pedestal: Thiers quedaba designado para hacer la paz y para gobernar el país; Francia iba tras de encontrar un guía y había de escucharle; la forma de gobierno que él declarase la mejor sería la que aceptara la burguesía, identificada con él y preſta a aclamarlo como su ídolo. Pero Thiers sólo aceptaba una dictadura, la de la «persuasión», dictadura al cabo, y lo cierto es que iba a ejercer un poder personal. La primera decisión que tomó la Asamblea, reunida en Burdeos, fué la de nombrarlo Jefe del Poder Ejecutivo, es decir, Jefe del Eſtado.

¿Era republicano Thiers desde aquel momento? Nadie había hablado con mayor dureza de la «vil multitud» de la República condenada «al crimen o a la imbecilidad», de aquella Mariana «buena chica», pero con la mala coſtumbre de enseñar por la ventana lo que no debe enseñarse. Sin embargo, no es cueſtión de gran monta el saber en qué inſtante se convierte Thiers a la idea republicana. Baſta saber que cuando se convirtió lo hizo resueltamente.

Entretanto, y con una Asamblea monárquica, continuaba aquella República de hecho, la que existía desde el 4 de septiembre. ¿Acaso esta Asamblea hubiera podido proclamar un Rey? Para ello era preciso, ante todo, saber cuál, y legitimiſtas y orleanistas formaban dos bandos después de la escisión de 1830, uno de cuyos artífices había sido el propio Thiers. Eſta división había condenado a la Asam-

blea de 1849 a la impotencia y abierto el camino al Imperio. Ahora iba a abrírselo a la República.

Cierto que los acontecimientos cooperaron a ello. En un principio pareció que los mismos republicanos la hacían imposible. Fieles a la consigna de Gambetta, «la guerra a ultranza», y a la de Julio Favre, «ni una pulgada de nueſtro suelo», negábanse a ratificar los preliminares de paz que Thiers acababa de resolver con Bismarck. En aquel entonces, lo que hoy denominamos nacionalismo en el sentido de un patriotismo exagerado, hallábase en la izquierda, y tan lograda era eſta reputación que la Alsacia, salvo excepciones contadísimas, había elegido tan sólo a los de Gambetta con Gambetta mismo, segura de que tales representantes harían resonar su proteſta.

Ciento siete votos hubo contra la paz, y éſtos fueron de los republicanos, incluso los más avanzados, como Luis Blanc, y los más revolucionarios, como Delescluze, Millière y Félix Pyat, que iban a tomar parte en la Comuna. A su lado, en torno de Gambetta y de Rochefort, eſtaban Víctor Hugo, Edgar Quinet, Ranc, Floquet, Brisson, Scheurer-Kestner, Tirard, Clemenceau, en suma, los viejos y los jóvenes, todo cuanto había de pasado y de porvenir en la idea republicana. Gambetta anunciaba el «desquite». Víctor Hugo no se limitaba a profetizar que Francia, antes de proclamar los Eſtados Unidos de Europa, volvería a tomar la Alsacia y la Lorena: «recuperará, decía él, Trèves, Maguncia, Coblenza, Colonia, toda la orilla izquierda del Rhin». Para conocer mejor aquel ambiente, pensemos que eſtos ecos de la Revolución propagandista y conquistadora eran

recibidos por la derecha con «murmullos». Y fué entonces cuando un joven revolucionario, Gastón Crémieux, lanzó contra los ratificadores eſta injuria: «¡Mayoría rural!»

No era necesaria eſta frase, que hizo fortuna, para que hombres tan sagaces como Thiers y Grevy se dieran cuenta de la situación. Si la mayoría del país era rural, ¿cómo no iba a serlo la del Parlamento? Los campesinos acababan de votar en masa por la paz y no aceptarían más que un régimen pacífico. El grito despectivo de Gastón Crémieux vino a abrirles los ojos a los republicanos prudentes. Fué un grito aprovechado. Los otros, más exaltados siempre, tardaron más tiempo en advertir su error.

Si las elecciones de 1871 mandan a Burdeos una mayoría de izquierda y de extrema izquierda, la guerra se hubiera reanudado, y la suerte de la República hubiera quedado pendiente por mucho tiempo. Pero ahora ya era un peligro aquella reaparición en son de desquite y con el geſto marcial de la Convención: por su fidelidad a los principios de 1792, los republicanos habían perdido los votos y seguirían perdiéndolos. Era preciso, pues, virar en redondo.

El 18 de marzo eſtalla en París una revolución. ¿Qué es la Comuna? En su primer momento, una manifeſtación exasperada del patriotismo, una proteſta contra la Asamblea que acaba de suscribir las condiciones impueſtas por el vencedor y cederle Alsacia-Lorena. París se alza contra la humillación de la derrota y contra aquella mayoría monárquica, clerical y rural, que acepta el Tratado de Francfort.

Si algún acontecimiento parecía capaz de dar al

traste con la República, era éste. ¿Cuál era el balance de aquellos seis meses? Tras la obstinación de una lucha sin esperanzas, confusa y anárquica, ahora la guerra civil, la guerra social en presencia del enemigo que ocupaba todavía el suelo francés. El precedente de 1848, cuyas jornadas habían sido, a la verdad, muy menos graves, obligaba a esperar una reacción violenta. Y no fué un milagro, fué la inteligencia y la acción de un hombre, Thiers, la que hizo que la República saliese fortalecida de estas convulsiones de París.

Una acusación se ha lanzado contra Thiers: la de haber dejado, de intento, que la Comuna creciese para mejor aplastarla luego y quedar él sobre el pedestal de aquel peligro conjurado. No parece muy verosímil en él un cálculo semejante, era demasiado arriesgada la partida para jugarla de propósito. Thiers se había vuelto prudente, y no gustaba de apuestas y de aventuras. Aleccionado por la historia y, sobre todo, por los sucesos de 1830, en que había tomado parte, sabía que cuando París se sublevaba, lo primero que había que hacer era no dejarse encerrar. Sus reflexiones eran las de Enrique III cuando abandonó la villa a la Liga después de la jornada de las barricadas, las de Luis XIV cuando, para no exponerse a una nueva Fronda, fijaba su residencia en Versalles. Y desde Versalles fué de donde Thiers, seguro de la provincia, se aprestó a dominar la revolución.

Tras la guerra exterior cerníase una guerra civil en presencia del enemigo. La matanza de los rehenes, las incendiarias, los comuneros prendiendo fuego a los monumentos, este espectáculo que los soldados prusianos contemplaban «sentados en primera fila» produjo en Francia un efecto horroroso. Taine y Renán hubieron de rectificar sus ideas. Amenazaba otro 93. Bordeaban el abismo. En resumen, cundió el miedo.

Y porque habían sentido el miedo, respiraron cuando la Comuna fué vencida. La represión había sido terrible, sin contemplaciones. Las tropas de Versalles habían entrado en París a sangre y fuego. Los jefes del movimiento estaban muertos o huídos, caídos en la lucha Delescluze y Dombrowsky, ejecutados sumariamente Millière y Rigault. Las detenciones en masa continuaban después de la derrota. Los tribunales militares dictaban sus sentencias de muerte. Rossel y Ferré eran fusilados. Rochefort salía deportado a Noumea; miles de culpables y de sospechosos iban a los presidios o a la cárcel; Francia quizá jamás había visto una sedición tan duramente castigada. Ya exterminado, el partido revolucionario dejaba de ser peligroso, y era aquella la prenda de una República sin motines. ¿Qué rey, qué emperador hubiera restablecido el orden con tanta decisión y energía como el hombrecillo de las gafas, el viejo enlevitado a quien la Asamblea confiara el Poder ejecutivo? Después de esta lucha brava, sin vacilaciones, ¿podía alguien sostener todavía que la República era la anarquía? Ningún régimen de autoridad había llegado adonde ella en la defensa social. Aquella acusación de cómplice del desorden quedaba descartada merced a Thiers. Y desde aquel momento ya era más tranquilizadora que alarmante.

Por segunda vez se resolvía su contradicción interna. La Comuna había comenzado a incubarse el 4 de septiembre, y había estado a punto de estallar el 31 de octubre. Después del 28 de mayo de 1871, con los últimos cartuchos disparados en el cementerio del Père-Lachaise por los insurrectos, quedaba deshecha la tradición insurreccional, y deshecha la tradición bélica con el silencio de Gambetta, refugiado en San Sebastián. Ya no espantaba la República: iba tomando un aspecto decente, razonable, «conservador», en suma, el aspecto que le diera la persona de Thiers.

El mismo, tan prevenido contra ella hasta entonces, había mudado enteramente. Algo debió de influir en esa mudanza una cierta satisfacción de sí, una cierta presunción. Poseía Thiers el sentimiento de la historia y saboreaba de lleno el goce de sentirse convertido en el Jefe del Estado francés, sucesor de los Borbones y de los Bonaparte. Era el primero que no debía aquel puesto supremo ni a la herencia del nombre ni a la gloria de las batallas ni a la fuerza de las bayonetas. Subía a aquella especie de trono burgués sencillamente porque desde años atrás él era quien había tenido siempre la razón. Lo cual movíale ahora a creerse infalible.

Mientras luchaba contra la Comuna, había reflexionado. Afirmaba muy alto su confianza, encendía los ánimos, aseguraba el fracaso de la revolución. Sus temores, sin embargo, no eran menos vivos; los acontecimientos afectábanle de veras. La insurrección, trágica en París, podía propagarse. Parecía prender ya en Marsella y en Lyon. Y, entretanto, el enemigo seguía ocupando un territorio que era preciso rescatar a peso de oro, recurriendo a grandes empréstitos. En trance tal, pensó Thiers que era perentorio un Gobierno aceptado por toda la nación, y fué entonces cuando se acordó de una frase que había pronunciado él veinte años antes y en otras circunstancias, una frase que parecía un reto, puesto que de París a Versalles quedaba fusilada: «La República es el régimen que menos nos divide». Con ella no quería significar Thiers que en la República hubiera menos divisiones, sino que no serían tan graves. No temía un alzamiento de la extrema derecha contra la República; en cambio, estaba seguro de que la extrema izquierda, más pronto o más tarde, se alzaría en armas contra la Monarquía. Sentía mucho miedo de los comuneros y muy poco de los «chuanes». En un lapso de cuarenta años habían sucumbido a los motines de la calle tres monarquías: la de la rama primogénita en 1830, la de la más joven, en 1848, y la reciente de Napoleón III. La etiqueta republicana ya hacía desaparecer un pretexto de revolución y conjuraría con ello las posibles convulsiones. El pensamiento de Thiers expresábase en esta metáfora: que la República debía servir para canalizar la Revolución; y cuando, fiel a este sentido, decía que «la República es el régimen que menos nos divide», añadía inmediatamente que había de ser conservadora o nada, es decir, que el país la soportaría pensando que le ahorraba una revolución, pero que la rechazaría en cuanto volviese a su origen primero y se mostrase incapaz de gobernar regularmente.

No eran contradictorias estas dos frases célebres, sino complementarias. Sólo que, al igual de casi todas las frases históricas, hubieron mala interpretación. En cuanto a la primera, no hay dudas; en cuanto a la segunda, no se entendió bien a qué género de conversación aludía Thiers, y que era sencillamente el orden en la calle y el respeto a la propiedad, una concepción simple, burguesa y simplista, práctica y vulgar. Así se explica el poco éxito que iban a tener los conservadores, que, menos materialistas, corrían a preservar primero «el orden moral». Por lo demás, la cuestión está hoy clara. Ya la aclaraba el propio Thiers al designar con qué aliados contaba en la Asamblea y en el país: éstos eran, según su portavoz, los que constituían «un grupo intermedio, numeroso, inteligente, hábil en los negocios, de matiz incierto, casi indiferente respecto a la forma de gobierno, orleanista ocasional». El orleanismo, añadía el mismo confidente, estaba dispuesto a incorporarse a la República, con tal que ésta no fuera sino una Monarquía constitucional bajo otro nombre. La República de Thiers debía adaptarse a la medida de una Francia media, la Francia que otorgaba su «sí» a Napoleón III, porque el Imperio garantizaba a cada cual la libertad de cultivar su campo, el derecho de conservar y de transmitir sus bienes. Largo tiempo hostil al sufragio universal y a la República, Thiers había observado durante el reinado de Napoleón III cuán dócil era la masa electoral mientras viese satisfechos sus intereses rudimentarios. ¿Por qué dudar de que, bajo un régimen republicano, el sufragio universal asegurase la misma estabilidad?

No exagero, pues, al decir, que la tercera República fué concebida por un hombre, que salió de su cerebro, que él fué quien le imprimió la forma que durante largos años ha mantenido. Veamos ahora cómo las cosas iban a cooperar con Thiers para arrastrar a Francia a una concepción que, a pesar de su prestigio personal y su fuerza de persuasión, él no hubiera podido por sí solo imponer. Es indudable que las clases medias, hasta entonces muy desconfiadas respecto de la República, sufrieron la influencia del hombre que mejor las representaba, y pensaron que si Thiers aseguraba que aquel era el régimen mejor o el menos malo o el que aconsejaban «las circunstancias», sus razones tendría para asegurarlo. Era preciso escucharle: un hombre que, como él, había dado tan reiteradas pruebas de clarividencia, no podía errar en un punto de tal importancia. Pero todavía requeríanse ciertas condiciones, las que el propio Thiers había señalado para que la República no derivara hacia la anarquía y acabara en una dictadura análoga a las dos primeras. Estas condiciones, sin embargo, no dependían de Thiers, como tampoco podía depender de él el fracaso de una restauración monárquica.

He aquí, pues, cómo van acusando estos orígenes su parte accidental y fortuita. En el momento inicial, el motín del 4 de septiembre; sin él no había República; el Cuerpo legislativo hubiera mantenido la dirección de los asuntos y hubiera concertado presto la paz para no prolongar ya una lucha inútil; la guerra hubiera terminado probablemente después de Sedán, como la otra después de Waterloo,

o de manera muy análoga. ¿Qué hubiese ocurrido entonces? No es posible conjeturarlo. Por de pronto, no parece probable que Thiers hubiera conservado el Poder durante dos años; en todo caso, no lo hubiera ejercido con el mismo prestigio, porque le hubiera faltado para ello una «guerra a ultranza», un sitio de París, una Comuna, con todas las situaciones e ideologías consiguientes. La Asamblea tampoco hubiera sido, ni con mucho, la del 8 de febrero. Y era ésta, monárquica en su mayoría, la imprescindible para fundar una República duradera, «de términos medios», conforme a la advertencia hecha por Thiers a los republicanos cuando, encarándose con ellos, les había dicho: «Ella será el premio de vuestra sensatez».

II

La Monarquía constitucional bajo otro nombre

El 4 de septiembre de 1870, el régimen republicano se aprovechaba de una revolución vencedora. El 28 de mayo de 1871 aprovechábase de una revolución vencida. La suerte no iba a cortarse aquí. Y no basta decir que la Asamblea nacional vino a instaurar la República, cuando su verdadero propósito era el de restaurar la Monarquía. Precisamente por monárquica, era esa Asamblea la única capaz de elaborar una Constitución que asegurase la vida de la República.

Lo primero era hacer que la Restauración fracasase. Alegando razones de interés público, la necesidad de reorganizar a Francia y librar el territorio de la ocupación extranjera, Thiers había conseguido, tras formidable esfuerzo, descartar la cuestión del régimen; un pacto con la derecha, el pacto de Burdeos, le permitía diferir el problema constitucional hasta haber resuelto las otras cuestiones. Quizá pensaba Thiers que el tiempo y el prestigio que le otor-

gaban los servicios prestados al país valdríanle para que la cuestión ni llegara ya a plantearse.

La Asamblea le escuchaba. Si en algún momento se le resistía, bastaba su amenaza de dimitir para volverla a la docilidad. Y a tal punto llegó esta sumisión, que, habiéndole confiado el Poder ejecutivo, esa Asamblea vino a darse por presidente a un republicano firme y auténtico, aunque prudente. En 1848, Julio Grévy se había opuesto, aunque en vano, a la elección de presidente por el pueblo. Suya era, además, la frase profunda que ahora repetía con mayor ahínco: «No quiero una República que meta miedo».

Era, pues, Grévy el hombre que comprendía el pensamiento de Thiers. Situados los dos en los puestos culminantes, tenían capacidad suficiente para manejar la parte neutra y flotante de la Asamblea, aquel sector a quien lo político apenas importaba con tal de que no hubiera agitaciones ni motines, que siguiesen con regularidad los balances del Banco de Francia y que subiese la renta.

Thiers había acertado en recomendar calma a la izquierda, pero no quisieron oírle. Gambetta recorría Francia pronunciando violentos discursos contra la mayoría reaccionaria. La derecha se lamentaba entre protestas. Al «grupo intermediario» entróle el malestar y la inquietud, y vino a sumarse a la derecha. Julio Grévy tuvo que ceder su poltrona al monárquico Buffet. Días más tarde, en una elección parcial, París elige al radical Barodet, candidato de la izquierda, contra Rémusat, miembro del Gobierno, amigo y candidato de la Presidencia. La Asamblea tuvo

miedo: Barodet le produjo la misma impresión que había producido en 1850, en otra Asamblea, la elección de algunos «montañeses».

Este accidente echaba por tierra muchos cálculos; sobre todo, ponía en entredicho la infalibilidad de Thiers. Su República conservadora tornábase roja, y justificaba el dicho de Juan Jacobo Weiss: aquello era «una majadería». El 24 de mayo de 1873 le falla a Thiers el grupo intermediario, cae, y viene a reemplazarlo el mariscal Mac Mahon. Dibújase entonces a las claras una mayoría propicia a la restauración monárquica y que, por añadidura, hacía posible la reconciliación de ambas ramas, la primogénita y la más joven, separadas desde la revolución de 1830. La «fusión», éste era el nombre que corría, resultaba tanto más fácil cuanto que el conde de Chambord, nieto de Carlos X, no tenía hijos, y su heredero, según el orden de primogenitura, era el conde de París, nieto de Luis Felipe.

No cabía otro rey que el jefe de la Casa de Francia, pero atemperándose a las condiciones puestas por la Asamblea. El admitía una Monarquía constitucional, pero no aceptaba una constitución ya acabada, por consiguiente, impuesta. Bien que sobre este punto no parecía imposible el acuerdo. El conde de Chambord pedía algo menos que Luis XVIII. Este, en 1814, había «otorgado» la Carta por un como acto gracioso de la voluntad Real, lo que debía significar que no la imponía. Sin llegar a este extremo, el conde de Chambord se encastillaba en la idea de hacer prevalecer el principio hereditario, superior al electivo. Si no —objetaba él—, ¿para qué sirvo

yo? No creo que me necesiten para representar el papel de «rey legítimo de la revolución»; y sin mi principio yo no soy más que «un hombre grueso y cojo». Tal parece la interpretación fiel de la actitud del Príncipe, aunque su pensamiento todavía es hoy controvertido, así como también era imprecisa su distinción entre el régimen representativo y el parlamentario.

¿Por qué en vez de exponer claramente sus razones políticas, el conde de Chambord alegó que su honor le impedía renunciar al estandarte blanco? Algunos de sus leales «se echaron a sus plantas», pero no redujeron su obstinación. Sin duda, guardaba él un rendimiento sentimental a aquel color suyo, que era el de la Restauración más bien que el del antiguo régimen, y, sobre todo, le concedía el valor de un símbolo. Pensaba tal vez que esa alegoría hablaba a a la imaginación mejor que todos los discursos. Y con todo ello, levantaba otros sentimientos muy poderosos en favor de la bandera tricolor, la que el duque de Aumale acababa de llamar «bandera querida».

El que iba a ser Enrique V mantúvose en sus trece, y aun se lamentaba de la incomprensión de los propios amigos. Pero el espíritu dominante de la Asamblea era el orleanista, es decir, que la mayoría concebía una realeza conforme al patrón de 1830. Eran monárquicos, pero no lo bastante para aceptar un rey que no les debiese a ellos el Trono. Su odio al Imperio hacíales desconfiar de todo poder personal. Y, por otra parte, quizá sin advertirlo, pesaba sobre ellos la influencia de Thiers, que, apelando a sus instintos conservadores, recordábales sin descanso cómo los regímenes autoritarios, de cien años a entonces, habían acabado en la revolución y en las barricadas. La Asamblea tomó miedo a la guerra civil, a los fusiles, que «se dispararían ellos solos» por la bandera tricolor. Ya después de la carta del 27 de octubre, en la que el conde de Chambord mantenía cuanto había dicho de su emblema, el desacuerdo entre el Príncipe y la Asamblea fué terminante. Por segunda vez la suerte le abría camino a la República.

Esta historia de seis meses aparece en los libros como el fracaso de la Monarquía. Sin embargo, aquella mayoría que se había pronunciado contra Thiers el 24 de mayo todavía no era republicana. Lo que no había podido lograr con el conde de Chambord aguardaba a lograrlo más tarde con el conde de París. Su mismo «orleanismo» le era una razón para aferrarse a la Monarquía, razón ésta que nos parece extraña, pero cuyo alcance ha sido considerable. Partidarios del régimen parlamentario, no lo creían compatible con la República, sino que lo concebían tan sólo con la garantía de un rey. Pensaban ellos que el Parlamento debía apoyarse en el Trono, y el Trono quedar limitado por la Constitución. Si entonces se les anuncia que después de sesenta años de República iba a subsistir un régimen parlamentario, no lo creen. Y es lo cierto que eran ellos mismos quienes iban a preparar el terreno para esa coexistencia duradera, conforme los duques, los grandes burgueses y los grandes propietarios fueron perdiendo su predominio en las asambleas.

¿Qué República hubiera surgido, de haberla hecho los republicanos y no los monárquicos que la hi-

cieron? La doctrina republicana pura postulaba, según el modelo de la Convención, una Asamblea única de la que salen y en la que se absorben todos los poderes, sin jefe de Estado ni Cámara alta, sin freno ni Poder moderador. No es posible decir exactamente qué leyes constitucionales hubieran dado a la República los hombres de la izquierda. Lo que sí sabemos de cierto es que sólo unos hombres de derecha, imbuídos de los principios de la Monarquía combinada con el sistema parlamentario, podían concebir una Constitución como la de 1875.

Fué entonces el nieto de Luis Felipe, el conde de París en persona, quien sentenció: «Si no podemos traer la Monarquía, traigamos lo que más se le aproxime». Y he ahí lo que iba a dotar a la tercera República, en lo posible, de cuanto había faltado a las dos anteriores: equilibrio, consistencia, solidez.

Largo tiempo hubo de vacilar la mayoría antes de organizar un régimen republicano. Por fin, el miedo a algo peor vino a decidirla. Los días pasaban. El poder constituyente de la Asamblea era tanto más impugnado cuanto que no hacía uso de él. Los republicanos reclamaban la disolución, para que fuera el país quien se pronunciase por la forma de su gobierno. Los bonapartistas pedían también esa consulta al pueblo para restablecer la autoridad comprometida por los parlamentarios. O cesarismo o revolución: ésta era la pesadilla de la mayoría. Un miedo igual de ambos peligros la decidió.

En efecto; la disolución de la Asamblea, abandonando a la que siguiese el cuidado de elaborar una Constitución, hubiera dejado el campo libre para

cualesquiera aventuras. Unas elecciones como las de 1876 seguramente hubieran traído una Constituyente muy peligrosa: por donde aquella República, fiel a los principios de la democracia pura, habría abocado a la instabilidad, a la anarquía, a una quiebra y caída tan fulminante como las del 18 de Brumario o del 2 de diciembre. Una Constitución conforme a la doctrina republicana tenía que afirmar por principio la Cámara única. Julio Simón, aunque tan amansado ya en aquel entonces, clamaba que jamás, nunca jamás aceptaría él una segunda Cámara, a menos de traerla el sufragio universal. El propio Julio Grévy, tan prudente él, se había aferrado a sus principios de 1848, y no admitía ni Presidencia ni Senado. Pues bien; Julio Grévy había de suceder al mariscal Mac Mahon, y Julio Simón había de ser senador. Y, al caer en manos de los republicanos, la República iba a encontrarse, por reiterada suerte, con una mansión que había sido dispuesta para un rey constitucional. Las instituciones de que la dotaba la Asamblea nacional eran las de una Monarquía parlamentaria.

Los monárquicos habían afirmado que, de pedirlo una mayoría, ellos harían la restauración, y es lo cierto que, en 1873, hubieran reunido bastantes más votos de los necesarios. Por ironía de la suerte, el 30 de enero de 1875 un voto, uno sólo, bastó para que prevaleciese la legendaria «enmienda Wallon», que reconocía la República y, en breves y sordos términos, la proclamaba como el verdadero régimen de Francia desde aquel momento.

El azar había hecho que la República tuviera un voto. Bien que sin ese voto tampoco hubiese llegado

la Monarquía; por lo menos hubiese habido que reanudar el acuerdo, roto quince meses antes, entre la Asamblea y el conde de Chambord. Ahora ya la una y la otra parte habían tomado demasiado bien sus posiciones. Un peligro se cernía: que la Asamblea se disolviese sin dar un Gobierno al país, con lo cual, convictos de impotencia, poco iba a ganar el prestigio de los conservadores. Y éste fué el motivo principal, junto con el miedo al desorden o a un golpe de fuerza bonapartista, que decidió al «grupo intermediario», el verdadero árbitro de la situación, a formar el bloque con la izquierda. Thiers lograba el desquite. Lo que él había calculado se estaba cumpliendo.

¿Qué larga serie de escrúpulos no hubieron de vencer para llegar hasta allí aquellos monárquicos resignados a fundar la República, una República que se la prometían breve? Y los republicanos, ¿qué de repugnancias no hubieron de sentir al votar la única República que podían admitir los conservadores? Fué menester suplicar a los verdaderos revolucionarios el sacrificio de su doctrina. Quizá los acontecimientos hubieran tomado otro rumbo si Luis Blanc y el grupo de extrema izquierda, aunque reducidísimo después de la represión de la Comuna, se cierran en su negativa y oposición de principio. Pero con todo sentimiento resignáronse a votar. Y así, al cabo, y de entre una maraña de dramas de conciencia, nació la Constitución de la tercera República. Corazones sangrantes a derecha e izquierda. Concebida sin alegría, no era precisamente un hijo del amor. Y he ahí por qué esa República hubo de sacrificar sus más ardientes pasiones. Estaba destinada a caer de golpe en la

democracia directa; pero tuvo la suerte, a pesar suyo, de contar con algunas *barandillas*.

Un Presidente, una Cámara, un Senado: ésta es la Constitución de 1875. Mudemos los nombres, y ésta era la trinidad de la Restauración y de la Monarquía de julio.

El Jefe del Estado, elegido por las dos Asambleas, lo sería durante siete años y sin posible reelección. ¿Por qué siete años? Esta había sido imposición de la mayoría, y un secreto pensar que «de aquí allá, el rey, el asno o yo habremos muerto.........». Abrigaban ellos una segunda intención: el conde de Chambord no podía vivir ya muchos años, y, en desapareciendo que desapareciera él, la Monarquía volvería a ser posible. Y así fué, que el conde de Chambord murió casi dentro del plazo que le fijaron, y el puesto reservado debía entonces quedar libre. No había sino hacer que al mariscal de Mac Mahon sucediera el nieto de Luis Felipe, para quien habían sido ajustados los poderes de la Presidencia, y ya la Monarquía era un hecho. En efecto; todavía hoy, de septenio en septenio, el Presidente de la República sube a ocupar el puesto que estaba destinado al heredero de Luis XIV. De ese propósito era tan sabedora la izquierda, que en 1884, dueña de la mayoría, estampó en las leyes constitucionales la inelegibilidad de los miembros de las familias que hubieran reinado en Francia. Demás de esto, los constituyentes de 1875, prestos a proclamar en su día la restauración, habían dejado la puerta abierta a una revisión que podía pedirla el mismo Presidente de la República. Pues bien; en 1884 decidióse que la forma republi-

cana del Estado era ya un principio incuestionable.

La Presidencia que reemplazó al Trono cuenta todavía con los poderes recibidos en un principio. Bien es cierto que, desde Mac Mahon, ningún presidente fué osado de ejercer el más importante de todos, el derecho de disolver la Cámara baja, previo el acuerdo del Senado. El «derecho de mensaje» apenas ha sido ejercido tampoco. Ni es cierto que el Presidente, como él quiera y cuente con capacidad y prestigio personales, puede influir mucho en la marcha de los negocios públicos: él es quien elige y designa la persona encargada de formar Ministerio, y de esa designación depende casi todo. Sombra de la Realeza, la Presidencia, y esto es importantísimo, mantiene cierta distancia entre el Poder ejecutivo y el legislativo, e impide que el régimen republicano caiga al elegir la Cámara los ministros. No es ésta una barrera muy fuerte. Las democracias que no la tienen hállanse expuestas a un exceso de desorden, pero nada más. En fin, este «primer magistrado», elegido en cierto modo por antigüedad y casi nunca por la opinión pública, a nadie inspira desconfianza. Según la costumbre establecida, sale de las asambleas que lo designan. Si entra en pugna con ellas, el Parlamento puede en cualquier momento retirarle los poderes, caso que ha ocurrido ya dos veces en circunstancias diversas. Para ello basta con una jornada de huelga parlamentaria. Así, pues, el régimen nada tiene que temer de un Jefe de Estado que no es elegido por el pueblo, como, por error de cálculo, habíanlo querido los republicanos de 1848.

Por prepararse una Monarquía constitucional y un Rey bien sujeto al freno, los Constituyentes de 1875 han convertido la Presidencia en algo espléndidamente combinado para dejar a la cabeza de la República un recuerdo de la Monarquía, un vestigio de soberanía. En un régimen de partidos, un hombre, uno sólo, es colocado por encima de esos partidos. Para darnos cuenta de la utilidad de esa función, odiosa a los republicanos puros, tenía que no haberse creado o abolirse: el régimen hubiera lamentado la falta. Por mucho que se haya objetado, y a pesar de los tropiezos que han sobrevenido, la función subsiste, porque ha venido a probar que eran nulos sus inconvenientes, y, aunque leves, ofrecía algunas ventajas sensibles.

Pero la pieza clave maestra de esta Constitución era el Senado. Su misión era controlar y moderar el sufragio universal. Hoy el Senado no es tal como lo crearon las Constituyentes de 1875. Sus poderes se han reducido, y ya no merece el nombre de Cámara Alta. Los sesenta y cinco miembros que él nombraba vitalicios, los «inamovibles», ya no los nombra. El colegio electoral se ha ampliado en favor de las grandes poblaciones. Queda la esencia. El modo de elección, por el que tanto lucharon los republicanos de entonces, no es el mismo que el de la Cámara Baja. El Senado no procede directamente del sufragio universal, sino de un sufragio restringido, en el que París tiene treinta delegados y cada Consejo municipal de aldea, uno. Con todos los retoques sufridos en el año 1884, sigue siendo lo que debía ser en su origen: el «gran Consejo de los municipios de Francia», destinado a perpetuar la supremacía de los «rurales».

¿Son nuestras obras alguna vez lo que nosotros

hubiéramos querido que fueran? Si los autores de la Constitución de 1875 pudiesen ver en lo que ha venido a parar su Senado, no darían crédito a sus ojos. El suyo es un Senado conservador, pero conservador de la República. El elemento campesino es allí el dominante, y el Senado mismo está hecho a imagen de la campiña. La aldea, el burgo, la pequeña villa están allí representados en su concepción material del orden. Su rusticidad es la que viene a amortiguar los movimientos de opinión y la que lo torna casi inaccesible a las corrientes ideológicas bruscas, y muy tardo a los vientos nuevos. Todo en él se reúne para mantenerlo un poco a la zaga del movimiento. La edad para ser elegido es la del hombre maduro, ya curado de los ardores de juventud: cuarenta años. Los electores senatoriales son elegidos ellos también previamente, y, por ende, representan un estado de espíritu ya avanzado o provecto, envejecido. El mandato, en fin, es por nueve años, y la Asamblea se renueva por terceras partes. Todo, pues, se halla dispuesto para que aquello sea un rompeolas. Y así, en sus orígenes, el Senado era de derecha cuando la Cámara ya era de izquierda, y contribuyó con ello a mantener la República en una cierta moderación. Y, a la inversa, cuando la Cámara viró a la derecha, el Senado quedaba a la izquierda todavía para derribar los ministerios o paralizarlos. Desconfiado ante los entusiasmos, adoptando las novedades cuando ya ofrecen cierta madurez, el Senado es toda la provincia, y para él sigue siendo París, por ser la de los cambios, la villa revolucionaria. Raras veces se halla de perfecto acuerdo el Luxemburgo con el Palacio de Borbón, y casi nunca con el Ayuntamiento. Quizá la última razón de su política es pensar lo contrario de lo que piensan los parisienses.

En resumen, la Constitución de 1875 era la menos mala que podía dársele a una República. Más bien que una Constitución, casi era un conjunto de leyes constitucionales sin rigidez, sin solemnidad, sin doctrina. Ofrecían la ventaja de dotar al régimen de órganos aptos para protegerle contra los excesos. Lo cual todavía era una suerte inesperada, tan inesperada que los republicanos acabaron por darse cuenta de su dicha. Votaron a su pesar, ridiculizaron y hasta atacaron aquella Constitución «orleanista», pero luego preocupáronse de guardarla como un bien precioso. Y lo que más temían de ella era precisamente lo que había de permitirles salvar las jornadas de revuelta y las jornadas trágicas y la guerra misma, a la que no creían que el régimen pudiera resistir.

Los constituyentes de 1875 habían vuelto aceptable la República al despojarla de sus rasgos revolucionarios y viable al dotarla de ciertas fuerzas que venían a estar equilibradas. Ellos habían hecho, al cabo, la Constitución que Thiers había concebido y su prestigio recomendado. Hasta aquellas fechas habíase evitado el salto brusco y el trastorno social que ella implicaba. Sus más patentes defectos hallábanse atenuados por aquella transición del «mariscalato», corregidos por medidas de un «justo medio» o cubiertos por honorables fiadores. Toda ella, en fin, estaba dentro del cuadro administrativo que el primer Cónsul había dado a Francia, en aquellas instituciones del año VIII que, desde 1814, habían guardado todos los regímenes. La República recogía aún ese legado. Re-

vestida de tantos colores burgueses, manteníase fiel al voto de Julio Grévy: no daba miedo. Por eso nadie creyó a los hombres de la derecha y se burlaron de su «vano fantasma», cuando anunciaron el peligro del «radicalismo» y quisieron demostrar al país que sus leyes constitucionales, en pasando a manos de los republicanos de verdad, iban a convertirse en la máquina de la revolución. Y la verdad es que esa revolución iba a hacerse de manera insensible: gracias a las circunstancias de nacimiento del régimen y gracias a las precauciones tomadas por los conservadores de la Asamblea nacional, su marcha sería moderada.

III

El 16 de mayo

Calculaba Thiers que en Francia los republicanos no pasarían del millón y medio. Millón y medio eran los que en 1848 se pronunciaban contra Luis Napoleón Bonaparte, y los que el 8 de mayo de 1870 dijeron que «no» al Imperio. Thiers no pensaba que ese número pudiera crecer y comprendía, en cambio, que era muy poco lo que significaba entre nueve millones de electores. A sus ojos, esta minoría representaba los hombres de plan y de acción. Minoría demasiado exigua para imponer rumbos extremos, pero bastante fuerte, a su juicio, para derribar en un momento dado cualquier régimen que no fuese la República. Ya hemos visto que éste era el sentido de su frase sobre «el régimen que menos divide».

Tal era, pues, el efectivo con que la República podía contar. Por confianza que diera el resultado de las elecciones parciales desde 1871, por mucho que la costumbre hubiera logrado, a la izquierda no se le ocultaba que la conquista del país aún estaba por hacer. Apoyada en sus elementos tradicionales, la derecha permanecía fuerte. Dentro del Estado, el Sena-

do y la Presidencia eran suyos. Por lo tanto, había que ir a las elecciones con argumentos capaces de engrosar aquel millón y medio de republicanos de principio con la masa de franceses que no tenían opinión firme. Había que hablar al cuerpo electoral como él quería que le hablasen, y, al propio tiempo, herir a los conservadores en su prestigio, sin espanto tampoco de la población pacífica.

La tarea no era sencilla. Implicaba ya lo que se ha llamado oportunismo. La apelación a los sentimientos democráticos tenía que templarse con razones que tranquilizasen y aun conquistasen los intereses. El acercamiento y colaboración de Gambetta y Thiers iban a hacer el milagro. Demasiado encontrados sus caracteres, no había de serles grato ni fácil el acuerdo; pero, con toda su recíproca antipatía, lo cierto es que en aquel trance se completaban.

Gambetta aportaba su brillantez, su agitación caldeada, eso que levanta a las muchedumbres, la demagogia en el sentido genuino del término. Su instinto le ayudaba cuando les abría la visión del porvenir a las «nuevas capas sociales» de donde el propio Gambetta saliera un día. El sabía halagar a los franceses en su pasión por la igualdad, dirigirse con éxito a la nueva generación, hablar a la juventud. Y, por otro lado, él atronaba con su nota anticlerical, descalificaba como «reacción» a la Francia católica e identificaba la lucha por la República y la lucha contra el «partido clerical». En el fondo, la expresión de Gambetta era ésta: «Ni nobles ni clérigos», consigna que ya había producido sus frutos en 1830, y cuando la Monarquía de julio, y cuando el primero y el segundo Imperio.

Por lo demás, Gambetta guardóse de comprometer la propiedad y la herencia. Su antiguo programa aparecía purgado de cuanto sonase a revolución y pudiese alarmar a la masa propietaria. Ni una palabra que disgustase al burgués y al campesino.

El verbo de Gambetta era avasallador. La aportación de Thiers hubo de ser más útil, y su sagacidad prestóle al partido republicano la doble flecha que había de malherir a la derecha. Thiers, que había madurado sus reflexiones sobre la viabilidad del régimen republicano, poseía el sentido de la polémica y una suma agudeza. Había visto en seguida que una República que representase la revolución y la guerra, estaba condenada al fracaso. Palabras suyas eran que esa República había de ser conservadora o no ser nada, y la paz no es tan sólo accesoria de la conservación. Por eso la «locura furiosa» de Gambetta le había irritado tanto. Ahora la cuestión estribaba en sustraer a los monárquicos el monopolio del orden y de la paz. Esta era la clave del éxito. ¿Cómo obtenerlo? Haciendo que la acusación de provocar el desorden y la guerra viniese a recaer sobre los partidarios de la Monarquía.

En cuanto a lo primero, bastaba con invocar el respeto al régimen establecido, recurso que había ya afianzado el segundo Imperio y, hasta Sedán, absuelto todas las faltas de Napoleón III. La votación de una Constitución republicana creaba un hecho consumado, como lo creara el golpe de Estado del 2 de diciembre. Sostener que los partidos de derecha, esperanzados todavía con restaurar su régimen monárquico, eran ahora los revolucionarios, resultaba fá-

cil; esos partidos proponíanse mudar la forma de gobierno, y ello no podía hacerse sino trastornando las instituciones y dando lugar a convulsiones nuevas. Bastaba, pues, con desenvolver ante el sufragio universal los argumentos que Thiers aducía ya en la Asamblea nacional, e insistir en que solamente la República podía ofrecer al país el reposo y la seguridad.

Mayor ingenio hacía falta para hacer pasar de izquierda a derecha aquella funesta reputación de belicismo, porque si de algo se había acusado a la mayoría era de amar demasiado la paz. Ella era la que había ratificado el armisticio y el Tratado de Francfort, a ejemplo y petición del propio Thiers, de cuya parte estaba la razón. Se le había reprochado hasta la saciedad la inmolación de Alsacia-Lorena. Su honrado patriotismo le movió, de acuerdo con los republicanos, a hacer cuanto fuese necesario para la defensa nacional. Con todo, en 1872 había sido necesaria la insistencia de Thiers para que votara la ley militar estableciendo el servicio por cinco años. Contra la derecha, pues, la imputación de militarismo no servía, era inverosímil y nadie iba a acogerla. Asimismo era imposible coger a los conservadores en falta tratándose de la paz. En la primavera de 1875, la guerra había estado a las puertas. Bismarck estimó que Francia resurgía con demasiada rapidez y trató de destrozarla. El Duque de Decazes, ministro de Negocios extranjeros, se abstuvo de toda provocación. Conjuró el peligro dirigiéndose al Emperador de Rusia y a la Reina Victoria. El mismo Thiers no lo hubiera hecho mejor. Y si algo probaba el incidente era que para impedir la guerra las monarquías extranjeras se unían a los conservadores franceses. De otra parte, Bismarck persistía todavía en considerar a Gambetta como el hombre de la revancha y temía su llegada al poder. Tan discreto fué Decazes, tantas precauciones adoptó para no irritar a Bismarck, tan lejos estuvo el gobierno de que formaba parte de hacer de este episodio un ventajoso reclamo cerca de los electores, pero imprudente para el exterior, que el público apenas supo nada del peligro a que había estado abocado y del servicio que se le había hecho.

Para sostener que la derecha era el partido de la guerra había que inventar algo, o, al menos, forjar alguna apariencia.

En su renuncia a toda idea de desquite, Thiers fué más lejos que nadie. Había sido belicoso hasta su edad madura. Había, en 1866, denunciado los progresos y ambiciones de Prusia y reclamado la intervención de Francia para detenerlos. Después de las victorias prusianas, después de sus rudos contactos con Bismarck pensó que a Francia no le quedaba más actitud que adoptar que la de entenderse con el vencedor, evitando a toda costa un conflicto con la temible potencia que acababa de encumbrarse por nuestra derrota. Andando el tiempo, Thiers hizo prosélitos. Todos los partidarios del acuerdo con Alemania hubieran podido, muy fundadamente, citar a Thiers en apoyo de su programa, y si no lo hicieron, fué porque no se atrevían a confesarlo y porque el mismo Thiers había disimulado el contenido de su pensamiento. Conver-

tido en consejero de los republicanos, el astuto anciano los persuadía de la necesidad de renunciar a la idea de desquite como condición necesaria para el triunfo. No sería temerario suponer que Gambetta hubiera oído las enseñanzas de Thiers. En todo las comprendió. En beneficio de la propaganda de la idea republicana puso sordina a su clarín.

De esta suerte, la izquierda venía a librarse de aquellos recuerdos desastrosos de la leva en masa y de la lucha a ultranza. Pero quedaba aún lo de arrojar sobre la derecha el reproche capital de ser el partido de la guerra. No cabía razonar con las responsabilidades de Napoleón III y de la Emperatriz Eugenia; ninguna Asamblea menos sospechosa de bonapartismo que la Asamblea nacional. Su horror al poder personal era tan grande, que por no soportar un Rey que no fuera su hechura, había renunciado a la Monarquía. Para hacer creer que un Gobierno de derecha ponía la paz en peligro, hubo que encontrar un punto flaco y darle un sesgo ingenioso.

La cuestión romana proveyó al caso. En aquel entonces, el gran asunto de la Iglesia era todavía el poder temporal de los Papas. Mientras se mantuvo en el Trono, Napoleón III protegió a la Santa Sede, poniéndole por límites a la unidad italiana los del Estado pontificio. El propio Thiers conjuraba al Imperio para asegurar la independencia del Papado. Había sido necesario un Sedán para que el Rey de Italia pudiera apoderarse de Roma. Pío IX protestaba a la faz del mundo contra aquel despojo. Pastores y fieles respondían a su vez. Por donde los obispos y los católicos franceses fueron acusados de provoca-

ción a Italia y calificados de sospechosos: querían empujar a Francia a la guerra con el fin de restituirle Roma al Papa en cuanto la derecha volviese al Poder. Por su parte, Bismarck, en lucha entonces con los católicos alemanes, daba a los cuatro vientos, y aun a la misma Francia, sus quejas por los «manejos ultramontanos», dirigidos, según ellos, contra él. El partido republicano podía agitar la amenaza de un doble conflicto con Italia y con Alemania por causa del poder temporal, y lanzar así contra sus adversarios la más mortífera de las imputaciones. La causa de los monárquicos fué gravemente comprometida por la reivindicación del Pontificado, a la que su condición de fieles les asociaba a pesar suyo.

El 30 de enero de 1876, las elecciones senatoriales, aunque marcando un fuerte viraje hacia la izquierda, habían dejado una mayoría de derecha en la primera Cámara, lo cual iba a traer notables consecuencias. El 20 de febrero tocó el turno a las elecciones legislativas. La Asamblea nacional había mantenido el escrutinio por distritos tal como existía ya bajo el Imperio. Esto era todavía un bien para la República: dicho procedimiento quebranta los grandes movimientos de opinión y reduce a fracciones el sufragio universal. Y, en efecto, no hubo dos «bloques» en contraposición violenta. Hasta la presentación de las candidaturas adolecía de cierta confusión. A derecha y a izquierda invocábase el nombre del mariscal de Mac Mahon, como una recomendación útil. Muchos de los candidatos apelaban simplemente al régimen establecido. El propio Gambetta recalcaba el carácter razonable de su programa.

Los republicanos avanzados disputaban los puestos a los republicanos menos ardientes. Hombres de centro derecha venían a competir con los bonapartistas. La atmósfera no era de combate. El Gobierno no se había lanzado a cuerpo descubierto a la batalla, y tan débil fué su intervención, que el presidente del Consejo, Buffet, se quedó sin acta. En cuanto a los partidarios de la República, entre los que se contaban los grandes burgueses orleanistas incorporados a las nuevas instituciones, habían mostrado su moderación, cuando no su timidez. Por todo ello, aunque la victoria de las izquierdas fué completa, la Cámara que salió de estas elecciones no difería muy radicalmente de la anterior; antes pudiera decirse que, por su constitucionalismo, la continuaba. El eje de la mayoría que había votado la Constitución de 1875 desplazábase a expensas de la derecha. En la apariencia al menos, esto era todo.

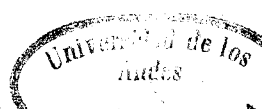
Cabía, pues, pensar en una renovación del papel que jugaba el «grupo intermediario». Para lograr un Gobierno moderado, tranquilizador, razonable, bastaba con reanudar con los sobrevivientes del centro derecha lo que se había hecho con los del centro izquierda, dando de lado ambos extremos. Este hubiera sido el sistema de la concentración, practicado con los conservadores que se resignaban al régimen republicano. El plan estaba tan bien pensado, parecía aquello tan natural, que el mariscal presidente, para formar Ministerio, designó primero al viejo Dufaure, liberal de la generación de Thiers y del tiempo de Luis Felipe, quien mantuvo en su puesto a algunos de los ministros del Gobierno anterior, par-

ticularmente al duque de Decazes, y trajo a otros grandes burgueses como él era, por ejemplo, a León Say, e incluso a republicanos católicos como M. de Marcère.

Las izquierdas avanzadas no podían ver que la victoria de los republicanos hubiese producido un resultado semejante, y era natural que aspirasen a un Gobierno completamente suyo. En aquel momento, sin embargo, no existía una separación radical y neta entre el centro izquierda y el centro derecha. La guerra no asomaba por aquí. Ante el sufragio universal, muchos de los republicanos se habían declarado con insistencia «conservadores», y no parecía absurda la hipótesis de su colaboración con el grupo intermediario. Entreveíanse mayorías de recambio, sin exclusiones, sin abismos infranqueables, una conjunción de centros, en suma.

Entre Thiers y el duque de Broglie, la distancia no era, al cabo, muy grande, y lo mismo que Ferry, cuya influencia comenzaba a pesar, Julio Grévy albergaba fuertes prevenciones contra Gambetta y los radicales.

Cabe preguntarnos qué hubiera ocurrido si la derecha llega a saber aprovechar la situación y observa estrictamente la regla de juego tal como ella la había establecido. Porque, al cabo, los Constituyentes de 1875 eran parlamentarios y habían querido una Cámara elegida por sufragio universal, sin imaginar ya otra; parecía que su deber era hacer buena cara a elecciones adversas, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, donde los conservadores se preparaban a reconquistar la mayoría, apenas derrotados por los liberales.



Lo cual eſtaba también acorde con la política seguida por ellos al dar la conſtitución de una Monarquía bajo el nombre de República, aquella política de mantener las cosas en el equívoco, por lo menos en una cierta ambigüedad. Vuelta a manos de los republicanos, la República podía cometer errores, y entonces quizá las elecciones siguientes devolvieran el Poder a la derecha. Sin embargo, entre la derecha y la izquierda no tardó en eſtallar el conflicto. En vez de unirse los centros, se escindieron. Hombres que parecían deſtinados a colaborar irguiéronse los unos contra los otros. Aquel tono gris en que se habían desarrollado las elecciones trocóse muy preſto, en la Cámara, en una división tajante de colores y de campos. ¿Cómo se había producido esa tempeſtad?

En primer término, la composición del lado derecho diſtaba mucho de ser la misma que en la Asamblea nacional; ya no era, en modo alguno, la imagen de la antigua mayoría. En eſta derecha reducida en número había elementos nuevos, y casi una mitad venían a integrarla bonapartiſtas, adversarios de la República y adversarios violentos. Para darnos cuenta del cambio, recordemos cómo aborrecía el cesarismo la Asamblea nacional. Haſta los temperamentos y el lenguaje eran otros. Los legitimiſtas y orleaniſtas no guardaban contra los republicanos el rencor que mantenían en acecho los de Bonaparte, la «gueuse» (1) no entraba en su vocabulario. En

(1) «Gueuse», pordiosera, miserable. Calificativo con que los desafectos al régimen han venido designando a la República. (N. del T.)

el año 1871, tan sólo tres diputados se habían levantado a pronunciarse en contra de aquel voto que infamaba a Napoleón III. En 1876, los partidarios del Imperio eran setenta y cinco, entre unos ciento cincuenta diputados de derecha. Salvo los realiſtas tradicionales y resueltos, todos cuantos en Francia rechazaban la República habían votado por aquellos que hacían profesión abierta de odiarla. Esta invasión de imperialistas contribuyó en gran parte a poner a la derecha en plan hoſtil y a provocar la jornada del 16 de mayo.

Hijo y nieto de liberales, el duque de Broglie jamás hubiera previſto que pudiera llegar un día en en que él se aliara con Pablo de Cassagnac. Su modo de pensar le aproximaba mucho más a Thiers, a Grévy, a Ferry, y aun cabría decir que al mismo Gambetta. Para hacerlo girar hacia los bonapartistas, fué preciso que surgiera una discrepancia grave con la izquierda sobre un punto infinitamente sensible. Estos hombres de la antigua ariſtocracia no tenían por qué mostrarse más hostiles a las «nuevas capas sociales» anunciadas por Gambetta que a la democracia cesariana. No era éſta para ellos una cuestión de clase, de tono, de superioridad social que mantener. La gran ruptura vino a surgir con la cuestión religiosa.

Desde el punto de viſta hiſtórico, poco importa de qué lado partieran las hoſtilidades. Los católicos eſtimaban que los anticlericales los habían atacado. Eſtos alegaban que debían defenderse contra la Iglesia y contra su espíritu de dominación. A la verdad, la lucha venía de más lejos, de un pasado ya hondo. ¿Dónde terminan, en el orden espiritual, los dere-

chos de la religión, que Gambetta decía respetar? ¿Dónde comienzan los manejos contra la sociedad laica y el Estado republicano, de que él acusaba a la Iglesia? ¿En qué se distingue el católico del clerical? No cabía respuesta a estas cuestiones: enfrentábanse dos espíritus, dos filosofías, dos religiones podríamos decir. Gambetta imputaba al clero el crimen de servirse de las creencias cristianas para traer votos a la derecha. En cambio, encontraba muy natural el captarlos para la izquierda, sirviéndose de aquel mito del progreso que conduciría el mundo a la democracia, y, por la democracia, a la felicidad. Todo lo resumía él en el grito de guerra pedido de prestado a un hombre anónimo, y cuyo alcance y efecto había sabido discernir: «El clericalismo, ¡he ahí el enemigo!». Este enemigo era su rival en el gobierno de las almas. Todas las combinaciones de la política se estrellaron contra este escollo.

Después de Dufaure, el mariscal ensayó con Julio Simón. Era éste un antiguo revolucionario, ahora moderado, adulador y muy compenetrado con la idea de conciliar a la mayoría de la Cámara con Mac Mahon y con el Senado. El era quien, volviéndose a la izquierda, decía: «Yo soy profundamente republicano», y, acto continuo, volvíase a la derecha: «... y profundamente conservador». Fué una tentativa extrema para prolongar la República conservadora de Thiers, tentativa frustrada ante los ataques de los radicales, bajo los cuales la derecha manteníase más inflexible. Apoyada por la pequeña mayoría que aún poseía en el Senado, se dispuso a la defensiva y a la resistencia. El centro, en vez de irse tras ella, se acer-

có hacia los radicales; con que se disiparon los proyectos de conciliación. Por un momento, los políticos de la derecha habían pensado que lo mejor era abrir paso a la experiencia de un Gobierno de izquierda, que viniese a preparar con sus abusos y errores una pronta reacción. Ya luego, los progresos del radicalismo asustaron a los conservadores. Todo amenazaba ruina: el «orden moral», la religión, la sociedad. Las pasiones entraron en batalla. El mariscal de Mac Mahon sentíase obligado no sólo hacia los de la otra Asamblea que le habían elegido, sino hacia Francia. La Constitución le ofrecía unos derechos formales. Cortarles a Gambetta y a los radicales la entrada al ministerio parecióle una obligación de conciencia. Hasta los hombres de centro derecha entendían que era preciso servirse de los medios normales «antes de que todo se perdiera». Contaban todavía con el Poder ejecutivo y con la mayoría del Senado. No restaba sino disolver la Cámara y apelar al sufragio universal.

¿Qué fué el célebre 16 de mayo de 1877? ¿Un atentado a la Constitución? En modo alguno. Ese día, usando de sus poderes constitucionales, el mariscal, en desacuerdo con Julio Simón, obligó al primer ministro a retirarse, y acto seguido encargó al duque de Broglie la formación de un ministerio, al que, por 363 votos contra 158, la Cámara negó su confianza. Entonces, con el asentimiento del Senado, el mariscal decretó la disolución. Los acontecimientos vendrían a demostrar que no era ésta una idea feliz, además de que fué mal concebida, extremadamente ingenua y ligera, por otra parte. Distaba infinito de

ser un acto criminoso, su legalidad era tan patente que los republicanos victoriosos renunciaron a acusar a los ministros del mariscal, y ni aun a éste acusaron. Contentáronse con «entregarlos al fallo de la conciencia nacional».

Aunque la disolución fué un mes más tarde, quedó este nombre del 16 de mayo. ¿Qué fué, en el fondo, dicha disolución? Una operación política ambigua; de inspiración bonapartista, habíanla aceptado y dado curso los liberales, detenidos a medio camino de su programa constitucional. Estos liberales, educados en el odio del 2 de diciembre, se espantaban ante la idea de un golpe de Estado; no habían podido o no se habían atrevido a jugar la carta parlamentaria pura y simple, a esperar un «retorno del péndulo» que les devolviese la mayoría cuando la izquierda se hubiera gastado o desacreditado en el poder. No pensaban, ni por asomos, en apelar a la fuerza. En el fondo, su pensamiento era oscuro. Solamente contenía el arrepentimiento por la Constitución que habían hecho y el reconocimiento de un error en sus cálculos fundados sobre el septenio y la elección presidencial de 1880.

Torpe en sí misma, la empresa estaba de antemano abocada al fracaso. Guardaban la satisfacción de conciencia de decirse que habían respetado las formas al modo como Carlos X, en 1830, se justificaba amparándose en un artículo de la Carta. La política desaconsejaba la operación. No sólo permitió a los republicanos lamentarse de la arbitrariedad, de la violencia y de denunciar a gritos el golpe de Estado, sino que, además, hizo la unión de las izquierdas.

Fué nuevamente una suerte para la República, y si no erramos en la cuenta, el tercer acaso venturoso que, a partir del 4 de septiembre, se resolvía en su favor.

El gran acontecimiento que supuso el 16 de mayo fué que las izquierdas se aliaron y formaron un frente común. Hasta entonces habían fracasado los intentos de unión absoluta. A partir de este día, los 363 republicanos de todos los matices formaban un bloque. Se le vió presidido por Marcère, asistido por Floquet y Luis Blanc. Ya no se distinguía entre revolucionarios y moderados. El *Journal des Débats* y *Le Temps* vibraban al unísono con los órganos más rojos y se utilizaban las mismas armas contra la «reacción». La consigna «no hay enemigos a la izquierda» entraba en vigor. Para la defensa republicana bastó un combate. La gran burguesía, enarbolando el nombre de Thiers, se batió en primera línea. Finalmente fué convenido que ningún candidato de izquierda se presentaría frente a ninguno de los 363, y esta disciplina fué respetada.

Por el contrario, en la derecha, imperialistas, legitimistas, orleanistas y constitucionales macmahonianos se entendían mal. Su coalición era fortuita. En el fondo, más de un parlamentario de la antigua mayoría sentía escrúpulos. El mismo duque de Broglie, que dirige la operación con Fortou, hombre enérgico de temperamento bonapartista, tiene sus inquietudes. El conde de París y el duque de Aumale no ocultan su descontento y su hostilidad. El triunfo, ¿no llevará más derecho al restablecimiento del Imperio que a la monarquía parlamentaria? ¿No vendrá por sus pasos, tras el golpe de Estado

legal, el golpe de Eſtado militar? Eſte equívoco gravita sobre el partido del orden, y le reſta la unidad y el empuje del bando republicano.

Semanas antes de las elecciones murió Thiers. Su muerte sirvió aún a la causa; el cortejo fúnebre marcó la unión de los republicanos. Ya Gambetta, con uno de sus geſtos de hiſtrión, había significado públicamente su reconciliación con el iluſtre anciano el día en que la Cámara disuelta aclamaba al «libertador del territorio». Ahora eſte nombre, respetado por los burgueses, ganaba a los mismos revolucionarios, y más de un comunero tornábase indulgente para con el que había fusilado a la Comuna. Después de muerto, Thiers seguía derramando, como en vida, sus beneficios sobre la República.

Con un adversario tan cándido como Mac Mahon, y otro tan contrario a toda idea de dictadura como el duque de Broglie, ciertamente que la República no corría un gran peligro. La derecha contaba, eso sí, con el preſtigio del Mariscal, con su blanco cartel desde el Imperio, con los prefectos, la adminiſtración, el clero. Hubo lucha, y tanto la hubo que de 363 quedaron 325. Pero en esa lucha el partido republicano se templó. También él puso en juego todas las fuerzas de que disponía, y, necesitado de armas para la batalla, volvió a lanzar con doblada violencia los argumentos que habían dado juego ya el año anterior, y obligó a la derecha, al miniſterio y al propio Mariscal a negar que ellos fueran «el Gobierno de los curas», y, sobre todo, a rebatir la acusación mortal y pérfida de ser el suyo el partido de la guerra, porque eſta vez decíase ya a voces que una victoria del clericalismo llevaría a la guerra con Alemania y con Italia. «Se intimidaba a Francia por la amenaza del extranjero», hubo de decir el duque de Broglie después de su caída. Se alquitaraba, sobre todo, la virtud electoral de la palabra paz.

Para la batalla, en fin, el partido republicano necesitaba sus cuadros, y los poseía. El año anterior habían probado ya su solidez. Era la masonería; y era también el mundo proteſtante. La República, como cualquier otro régimen, no podía subsiſtir sin una eſtructura, sin una sede del pensamiento y de la voluntad, so pena de caer en la dispersión. Hay una tendencia a exagerar el papel de los francmasones, como hay otra a negar su influencia. Entre ambas se encuentra, probablemente, la verdad. Las sociedades secretas no son todopoderosas: eſto resultaría demasiado sencillo. Pero en el desenvolvimiento de la política republicana hay una cierta continuidad, hay programas, planes, consignas, que no se explicarían si todo se hubiera dejado al azar de la inspiración del pueblo y de lo inconsciente.

Entretanto, cuando llegaba a su apogeo la lucha contra la derecha, confundida con la lucha contra la Iglesia, y mientras los proletarios y la clase media y la rica burguesía financiera e induſtrial combatían en el mismo campo, espíritus previsores velaban sobre los deſtinos de la República y pensaban en el mañana. Era preciso que la República saliera victoriosa, pero sin amortajarse en una victoria de un rojo demasiado vivo. Asimismo, no podría explicarse cómo evitó el régimen durante tanto tiempo los errores mortales y corregido sus faltas graves, no

comprenderíamos cómo le salvaba siempre aquel formidable instinto de conservación, si no advirtiéramos en él, desde sus orígenes, una tradición de prudencia: la prudencia de Thiers, la de Grévy, el hombre que había dicho: «Yo no quiero una República que dé miedo». Esa prudencia hacía que Julio Grévy tratara de contener a los radicales y desconfiara siempre de Gambetta. Contra Gambetta también y contra el radicalismo había dirigido el Mariscal su 16 de mayo. Cuando, a la muerte de Thiers, Julio Grévy subió a la presidencia de la Unión republicana, fué aquello una señal muda para el adversario. Grévy iba a continuar representando una República de seguridad, afianzando el orden, descartando como director al «tribuno» que sentía gravitar sobre sí la sospecha y que, a su vez, prometía y cedía al oportunismo: «seremos prudentes». Desde el 4 de septiembre el problema se planteaba, y seguiría planteándose de continuo, en los mismos términos. Era menester dar satisfacción a las aspiraciones de la democracia sin amenazar al país con un trastorno, manejar sentimientos e intereses manteniendo un programa suficientemente republicano y suficientemente conservador.

La tarde del 14 de octubre de 1877, el «orden moral» hubo de reconocer su derrota. La operación quedó frustrada completamente. Todo el esfuerzo de las derechas no había arrebatado a las izquierdas más allá de cincuenta puestos. Y, sin embargo, tres millones y medio de electores habían respondido todavía al llamamiento de las autoridades sociales y del episcopado. Unos cientos de miles de votos habían

decidido la partida. Existía en el país una fuerza de resistencia incontestable contra toda subversión. Las palabras moderadas de los jefes de la democracia no habían logrado disipar aquel espíritu de recelo mantenido por la alianza de todas las izquierdas, hasta la más extrema. Los jefes del partido republicano acabaron por ver que era temerario el acelerarse. La existencia de esta minoría imponente de derecha recomendaba ciertas precauciones. Tal vez el propio Mariscal podía decidirse a dar de verdad el golpe de Estado. Por lo menos se le empujaba a darlo, había generales que le ofrecían su ayuda, y era un general, Rochebouët, el llamado para formar un ministerio de resistencia cuando dimitió el duque de Broglie. Durante algunos días, los republicanos vivieron en continua alarma. Hubo quienes hablaron de oponer la violencia a la violencia. Julio Grévy les hizo ver los horrores de la guerra civil y logró calmarlos. Si el Mariscal hubiera tenido arrestos para pasar el Rubicón, Grévy, y muchos con él, se hubieran inclinado ante la fuerza. Pero, ¿a qué pasarlo? ¿Ni por quién? El conde de Chambord estaba demasiado lejos. El conde de París ni siquiera había aprobado el 16 de mayo. ¿El hijo de Napoleón III? Sedán hacía imposible el Imperio, aun con su joven pretendiente. Y Mac Mahon ni ambicionaba para sí la dictadura, ni, de ambicionarla, tenía ya edad para ejercerla. Bastó que la Cámara se negara a entrar en relación con el ministerio que él había nombrado, para que, al cabo de unos días, el general de Rochebouët se fuese como había venido, como soldado obediente.

La alarma, sin embargo, había sido formidable, y la mayoría republicana determinóse a no abusar de su victoria y a contemporizar. Lo cual fué un cálculo feliz en bien de la República. A pesar del 16 de mayo y de su fracaso, a pesar de sus conatos de resistencia, si no de un golpe de Estado, el Mariscal presidente conservaba su prestigio y seguía apoyándose en el Senado. Si la Cámara entra en conflicto violento con esos dos poderes, ponía en riesgo la obra de 1875, la Constitución establecida con tanto trabajo. El propio Gambetta había prometido ser prudente, y comprendió que aún era preciso aguardar con paciencia. En vez de precipitar las cosas volvió Dufaure, y volvió un ministerio liberal, moderado, conservador, el único que aceptaba el Mariscal. Después de tantos clamores, el 16 de mayo terminaba en una tregua.

Mejor dicho, en una fiesta: la Exposición de 1878. Por parte de las izquierdas, que la habían pedido, fué una felicísima idea de gobierno. Percibióse el retorno de la prosperidad. El comercio estaba floreciente, el lujo y el placer renacían. Esta Exposición diríase que era la de 1867, y estos tiempos los del Imperio, cuando el Imperio era afortunado. La República tomaba el aspecto de un régimen como cualquier otro, normal, que se adaptaba a las necesidades de la sociedad y no violaba costumbres ni principios. Bajo la República de los republicanos se vivía como bajo la República de los conservadores. Los que la habían temido, se habituaban a ella y reconfortábanse con el ejemplo de los grandes burgueses opulentos, de los grandes banqueros e industriales que

se habían incorporado a ella con entusiasmo. Y los que se mantenían mohínos, los «reaccionarios», veíanse en trance de pensar: «¿De qué te quejas? ¿Es esto acaso la revolución? Confiesa que las cosas no van tan mal.» Y éste venía a ser el estado de espíritu que una dama de la aristocracia expresaba con esta fina frase: «No hay duda que soportamos nuestro bien con paciencia.»

IV

Gambetta y Julio Grévy

El paso de la República a manos de los republicanos fué casi imperceptible. La democracia guardaba antecámara. La «administración de la cosa pública» les llevó un año largo, y en ese tiempo no cabía otra cuestión que el vasto plan de ferrocarriles y de empréstitos. Cierto que algunos clamaban contra aquel despilfarro, pero especuladores y banqueros no tenían por qué apenarse. El país quedaba rico, y era laborioso y económico. Las emisiones habíanse cubierto con el mismo éxito que en tiempos de la Asamblea nacional para la liberación del territorio. En cuanto a la solidez de la renta, los suscriptores no albergaban ni sombra de duda. La Bolsa prosperaba. Bien que algunas veces sobrevenía el accidente, el *Krak*; entre ellos, el de la «Unión general» iba a ser muy pronto, la derrota de la banca católica, vencida en un nuevo 16 de mayo. Pero la Hacienda en sí encontrábase bien con la República. Al igual que el ahorro y que los «réditos», se habituaba a pensar que las agitaciones políticas eran superficiales y el radicalismo un vano fantasma, a lo más un dia-

blo con el que cabían ciertos arreglos. Y seguían las burlas contra los aguafiestas, contra los pesimistas que ponían su alarma en aquellos programas de dispendios, en aquel déficit, en aquellas cuentas de miles de millones. En efecto, su error era el querer tener razón demasiado pronto.

Una especie de tregua política hacía que el régimen se mantuviera en un sentido burgués conservador. Por un acuerdo tácito quedó prorrogado el ministerio Dufaure hasta la renovación parcial del Senado. Estas elecciones celebráronse el 5 de enero de 1879, y con ellas desapareció, confirmando las esperanzas de los republicanos, aquella mayoría que la derecha conservaba en dicha Cámara. De nuevo quedaban dos poderes contra uno sólo, ahora el del presidente. Durante la campaña del 16 de mayo, Gambetta había intimado al Mariscal a someterse o a dimitir. No era preciso gritar tan fuerte. Mac Mahon salió con dignidad y llevando consigo la estima, después de haberse negado simplemente a firmar la cesantía de algunos generales, compañeros suyos de armas. Su septenio no estaba del todo concluso. En todo caso, los seis años de su presidencia habían beneficiado a la República, y al cabo fué él uno de los que más contribuyeron a su aclimatación.

Sin embargo, su experimento del 16 de mayo había abierto brecha en la función presidencial. Mac Mahon no había ido más allá de sus poderes; había ejercido los derechos que le otorgaba la Constitución y obrado conforme al pensamiento de sus autores, que querían para el presidente, puesto

en lugar del Rey y hasta que el Rey llegara, una porción considerable de autoridad. Pero Mac Mahon la había empleado contra la izquierda, y el solo nombre de disolución sonaba a faccioso, por lo menos dejó de ser republicano. Los sucesores del Mariscal, hasta el presente, han sufrido esta intimidación, y, de hecho, una de las prerrogativas de la presidencia vino a desaparecer. Subsistía la institución, pero rebajada. La República ya nada tenía que temer del Jefe del Estado, y los demócratas suspicaces podían estar satisfechos. Pero también quedaba sin una parte de los servicios que él podía prestarle, y, aunque de una manera invisible, la Constitución de 1875 quedaba alterada, y debilitado uno de los contrapesos dispuestos por ella frente al poder legislativo. Lo que ella quería evitar, la omnipotencia de la Cámara, encontraría facilidades. A la larga, el régimen iba a sufrir las consecuencias.

El hombre elegido para reemplazar al Mariscal era una garantía para los republicanos. Parecía que la República no había podido hacer una mejor designación. Julio Grévy se había mostrado contrario a una presidencia, que era un vestigio de monarquía, contrario a las tradiciones democráticas, y ya hemos recordado que en 1848, como si hubiera previsto el 2 de diciembre, había intentado poner a la tercera República en guardia contra el peligro de elevar demasiado alto a un individuo. No había que temer, pues, de Julio Grévy ninguna clase de golpe de Estado. Su lealtad republicana estaba por encima de todo recelo; por otra parte, él representaba la moderación, la sensatez, la prudencia burguesa, y, en

muchos de sus rasgos, era el continuador de Thiers. Su nombre de sí ya tranquilizaba: el hombre a quien la República no podía temer y por quien tampoco podía dar miedo. Más tarde renegaron de él, su elección pareció un yerro. Pero al principio todo fué pura satisfacción.

Pues bien; a pesar de las apariencias, de Julio Grévy a Mac Mahon no mediaba tanta distancia. Ni sus sentimientos ni su moral eran los mismos, ni sus actitudes se parecían en modo alguno. En lo que coincidían era en detestar a Gambetta y en su alejamiento de los radicales. Sino que el viejo soldado, brusco e incapaz de disimular, jamás había concedido una audiencia al jefe de la izquierda, mientras que el viejo abogado lo soportaba cubriéndolo de flores. Su propósito era estrellarlo. Julio Grévy pensaba hacer un diez y seis de mayo a su modo, en silencio, sin manifestarse, sin ayuda de ningún Fourtou ni de nadie, y pensaba salir bien del trance.

La elección de Julio Grévy había sido obra del Senado, que, en su nueva mayoría, era centro izquierda, es decir, menos avanzado que la Cámara. La Cámara Alta respondía perfectamente a su definición, y actuaba como freno en la pendiente. En aquel momento representaba el espíritu de Thiers, cuando ya Thiers había desaparecido y quedado atrás. El Senado se había apresurado a presentar la candidatura de Julio Grévy, para impedir que saliera elegido Gambetta. En vano desenvolvía éste los temas de un oportunismo cuyo programa consistía en escalonar las cuestiones para no causar trastorno alguno. Aquello no lograba disipar los recelos y alarma

de los viejos ni llegaba a convencerles de que hubiera evolucionado. Gambetta les había servido para derrotar a la derecha; pero ahora temían que comprometiese esa victoria.

Para la defensa y para el ataque, ellos no habían reconocido enemigos a la izquierda, y se habían aliado con los revolucionarios extremos. Fué luego cuando temieron que la izquierda resultara peligrosa para el régimen al provocar una reacción. La República pertenecía al partido republicano, y los que con mayor solicitud velaban por ella sabían que este partido no tenía más que una tradición de «disciplina negativa y de resistencia», un «pasado de lucha, de oposición, de conspiración», lo que constituía «la flaqueza sociológica». Estas consideraciones hacíalas Littré en 1880, y añadía: dicho «impulso» es el que impide al partido republicano «ponerse al nivel de su misión y comprender en su ánimo que no será dueño de Francia, tal como esa Francia se ofrece en sus condiciones sociales, sino en la medida que sea dueño de sí mismo». Este era el lenguaje de un filósofo positivista. Julio Grévy no hubiera sabido expresarse tan bien, pero lo traducía a la acción.

Gambetta había lanzado ya su pregunta en la Asamblea nacional: «¿Qué República es esa cuyo programa estriba en contener el avance de la democracia?» Un radical, Floquet, advirtió, a su vez, con amargura que los republicanos, en llegando apenas a actuar, sentían miedo de sí mismos y trataban de «ganarse las adhesiones de sus enemigos de la víspera». Floquet no comprendía que la salvación del régimen estaba en no resbalar hacia la democracia pura,

el socialismo y la revolución. Y ésta era la idea que el nuevo presidente tenía ya arraigada en su ánimo. Tras su elección, redactó un mensaje que los ministros de Mac Mahon lo hubieran aprobado. Julio Grévy seguía prometiendo una «política liberal y verdaderamente conservadora». El era conservador a su modo, pero lo era. El Ministerio Dufaure sufrió unos simples retoques. Un protestante notable, Waddington, pasó a ser el jefe. Otro protestante, Freycinet, le sucedería. Tenían suerte todos estos hombres. Formaban una especie de aristocracia. El distrito XVI era su «faubourg Saint-Germain». Con ellos, se estaba a buenas con los Consejos de administración. La única novedad era la atribución del ministerio de Instrucción Pública, el del gobierno de las almas, que se le confiaba a Julio Ferry, burgués él de buenas maneras, asiduo al hotel y a los salones de Mme. Arnaud de l'Ariège, una de las grandes damas de la República. Era Ferry un «legista» moderado en todo, salvo su decisión de «arrebatarles la Francia a los directores católicos».

El método estaba determinado a largo alcance. El clericalismo era algo que se le daba como pasto al partido republicano. Los intereses materiales estaban a salvo: ésta fué la nota del nuevo septenio, la aportación personal de Julio Grévy. Con el castellano de Mont-sous-Vaudrey, el régimen resulta completamente burgués. Estamos en la República del prosaico Chrysale. El idealismo es desdeñado, y allá los fanáticos que discutan entre ellos. La demagogia horroriza. El dinero lo es todo.

Hubo un momento en que Gambetta había esperado la llamada de Mac Mahon, y, por su parte, había dado los primeros pasos. Su discurso de Marsella, en enero de 1878, fué un modelo de moderación. «Yo temo la embriaguez del éxito», decía, añadiendo que el partido republicano debía hacerse ministerial: «Lo dije siempre: yo soy un hombre de gobierno y no de oposición». Mac Mahon no había respondido a estas insinuaciones. Ahora Gambetta encontrábase con otra hostilidad, y seguía en su ostracismo. Era el hombre cuyo concurso sólo se acepta para la batalla. Elegido presidente de la Cámara a guisa de consolación, arrinconado en este vano honor, trataba de forzar el acceso al Poder. Tan pronto abundaba en el criterio de Julio Grévy y reprobaba el espíritu de temeridad y aconsejaba sensatez, como oponía a la República materialista la República ateniense, la idea de un Gobierno superior a los partidos, consagrado a las grandes cuestiones nacionales, a la política exterior, al ejército. Y ahora propugnaba el escrutinio por lista, más apto que el otro, decía él, para elevar los debates políticos.

Esta fértil inventiva, esta movilidad, estas ambiciones, por generosas que algunas fueran, hacíanle sospechoso a los viejos. Se le llegó a acusar de ejercer un «poder oculto», de aspirar a la dictadura, de excitar a la guerra. Lacerado su ánimo, vuelve a la izquierda y levanta su programa: revisión constitucional, restricción de los poderes del Senado, impuesto sobre la renta, rescate de los ferrocariles, todas las «reformas democráticas». Torna a ser el demagogo peligroso, demasiado se advierte.

Haga lo que haga, es el hombre inquietante,

el hombre de quien nada quiere el Mentor que vela en el Elíseo para que la República no caiga en manos imprudentes. En cuanto al clericalismo, «el enemigo», ya no es necesario Gambetta para su destrucción. Este papel se le acaba de confiar a otro: las leyes escolares de Ferry quitan a la Iglesia la enseñanza y privan de su plataforma a quien, después del 16 de mayo, había levantado al elector contra el «Gobierno de los curas». Quedaba desbordado, y ello parecía menguar su sectarismo oficial, en tanto que una violencia fría descargaba contra su rival los resentimientos de la Francia católica.

Tres líneas solamente, introducidas en la ley del año 1879 sobre la enseñanza superior, tres líneas que Grévy y los moderados del Ministerio dejaron pasar, iban a «destrozar el partido republicano» y el país. El artículo 7.°, que privaba a las órdenes religiosas no autorizadas del derecho de enseñar, vino a sonar como una declaración de guerra a los católicos. La manera irónica de Ferry añadía el insulto a la persecución. Su nuevo dilettantismo le hacía atrincherarse tras una Ordenanza de Carlos X; y, siguiendo su ejemplo, el prefecto de policía Andrieux dió la impresión de presidir las expulsiones con toda finura. Denunciado por el Episcopado, combatido en el Senado por Julio Simón, el artículo 7.° produjo una conmoción incomparable, dejó largo rastro y concentró sobre su autor una aversión que muy pronto se convertiría en aplastante impopularidad.

El artículo 7.° se impuso. Los decretos expulsan a los jesuítas de sus casas «como en tiempo de Luis XV», dice todavía Julio Ferry, y sigue

atacando al clericalismo en su propia fuente. La República va a encargarse de formar el espíritu de la juventud francesa. ¿Y qué generaciones puede preparar «la escuela sin Dios»? La derecha agota su elocuencia en defensa de la tradición católica, y un orador pronuncia estas palabras proféticas: «Vais a formar una juventud que no crecerá en nada ni en nadie, ni siquiera en vosotros mismos». Julio Ferry estaba convencido de que la escuela laica elevaría a gran altura la moral de la democracia. En cuanto a Grévy, era indiferente a esas cosas: para él no constituía una preocupación lo espiritual, ni aun tratándose de las «condiciones sociales» de Francia, porque éstas las consideraba él indestructibles. Era un hombre que dejaba cantar a todos los cisnes. Célebre por su destreza en el juego del billar, concebía la política como una serie de habilidades.

Gambetta, amargado y rabioso, tomaba «su punto de apoyo en la izquierda». Julio Grévy midió de golpe el error del tribuno. Aproximábanse las elecciones de 1881, y Gambetta encontró gente más avanzada que él. Candidato por París, combatido ásperamente por Rochefort amnistiado, comprendió que entre los republicanos de acción había menguado su popularidad. En Charonne, en la sala Saint-Blaise, los gritos y los insultos ahogaron su voz, y no pudo lanzarles a aquellos «esclavos ebrios» sino los apóstrofes del demagogo que un día se ve frente a la demagogia. Y aún añadió algunas frases que encerraban tal vez un sentido secreto: «Yo sabré encontraros hasta en el fondo de esas protestas». Imagen ésta que, o no quería decir nada o

bien aludía a una conspiración policíaca dirigida de lejos por adversarios poderosos.

Elegido en París con bastantes dificultades, Gambetta creía seguro el triunfo en la provincia. Esta ha sido la norma de siempre: París ha cambiado ya de moda cuando los departamentos vienen a adoptarla. Las elecciones de 1881 fueron muy republicanas, un poco demasiado por esta vez, a juicio de los moderados. Si la derecha seguía retrocediendo, el centro quedaba afectado y la extrema izquierda avanzaba. Floquet hacía palidecer a Gambetta, y el propio Floquet palidecía ante la intransigencia de Clemenceau. Y he ahí las piezas de la partida que Julio Grévy estaba resuelto a jugar para acabar ya con Gambetta, designado esta vez por el sufragio universal, dado que era su grupo el más numeroso. No se le acusó más que de haber andado tras un plebiscito con aspiraciones de dictador.

Le había llegado la hora. Después de habérsela retardado tanto, había que hacérsela breve.

Julio Ferry, ministro de Instrucción pública en los Gabinetes anteriores, había asumido, en 1880, la presidencia del Consejo, y el 10 de noviembre de 1881 caía «por habérsele dado Túnez a Francia». Esto se dijo, y lo cierto era que las circunstancias le habían llevado a la política colonial, y, por lo tanto, a disponer un plan que Bismarck fomentaba muy divertido con la secreta intención de que en Túnez vinieran a enredarse Francia e Italia. Estos cálculos fueron adivinados por aquellos republicanos que no habían aceptado el Tratado de Francfort ni renunciaban a las provincias perdidas. Entretanto, las ex-

pediciones aventuradas y lejanas alarmaban a la población rural. Ya la caída de Julio Ferry, que fué la primera, no se redujo a un simple accidente. Para el régimen, tan peligroso podía ser el «ferrysmo» como el «gambettismo». Julio Grévy se dió cuenta de ello demasiado tarde.

Toda su preocupación era la de preparar el fracaso del hombre a quien quería hundir. Era preciso que Gambetta sufriera la prueba del Poder. La prueba fué corta. La misma esperanza que se ponía en él provocaría la pronta caída. Este es el episodio que se repetirá cada vez que se anuncie un «gran Ministerio». Por de pronto, los personajes de primera fila negáronle el concurso: ni Ferry ni Freycinet necesitaban de la instigación de Grévy para hacer el vacío en torno a su rival; cónsules ellos, no tenían por qué trabajar por la gloria de otro cónsul. Con lo que el «gran Ministerio» redújose a bien poca cosa: a un reparto de carteras «entre los camaradas»; la frase de Gambetta, que afectaba regocijo, caía de golpe en la trivialidad. La lista que sometió a la aprobación del Presidente le valió un despectivo «¿Todo esto es vuestro Ministerio?» Estaba fallado el pleito. Gambetta intentó salvar siquiera las apariencias, y quiso hacer lo que tantos otros tras él calificarían de «novedad»: dar a su Gobierno un color nacional, llamar por su valía e inteligencia a hombres jóvenes, ajenos a los partidos: Juan-Jacobo Weiss, el escritor que había dicho que la República conservadora era una majadería, fué nombrado director general de Negocios extranjeros; el general de Miribel, a pesar de su fama de reaccionario, fué designado para jefe del

Estado Mayor, y ambos habían de convivir con los «camaradas». No hubo quien tomara en serio aquella combinación, y su autor fué silbado. A fines de febrero de 1882 había hecho mutis, derribado sobre su gran idea: el escrutino por distritos, «espejo a trozos», según su expresión. Todavía en nuestros días se habla de reforma electoral. Estamos donde hace cincuenta años.

El Ministerio de Gambetta había durado diez semanas. El tribuno de palabra tan certera en el ataque, el hombre de quien se decía que tenía, en verdad, «entrañas republicanas», el vencedor del «orden moral» y de Mac Mahon, el «mal enemigo» de los conservadores, quedaba eliminado, y su papel tocaba al fin. Once meses más tarde, el 31 de diciembre de 1882, moría de resultas de un accidente que todavía no está claro. Grévy lloró de un ojo y rió del otro, como, según Daumier, Luis Felipe en el entierro de La Fayette.

Grévy se había apresurado a reemplazar a Gambetta por hombres de negocios: el sutil y prudente Freycinet, acompañado por León Say, financiero hostil a cualesquiera medidas socialistas y que aseguraba que ni la Hacienda pública ni las privadas tenían nada que temer. Esta designación atestiguaba de sí que el pensamiento del Presidente seguía el mismo: el radicalismo era un peligro para la República. El fracaso de Gambetta había diferido los acontecimientos. La República burguesa, segura, protectora del orden social, se consolidaba. Todo cuanto, por algún lado, significara espíritu o religión, la escuela y la iglesia, podía sacrificársele sin peligro, como podía

renunciarse al Egipto o a la Alsacia. Lo perentorio era la propiedad, el dinero. En no afectándolos, en no elevándose más allá de los intereses materiales y de las preocupaciones cotidianas, la República no corría, por el momento, riesgo alguno. Mezquina prudencia en este punto la de Julio Grévy, que exponía el régimen a otros escollos. Pero él se gloriaba de haber conjurado un mal capaz de ocasionar la muerte.

La hostilidad con que había perseguido al luchador del 16 de mayo obedecía aún a otras razones. Hoy puede parecernos Gambetta una víctima de la ingratitud de los republicanos; sentimos la extrañeza de que sus contemporáneos no fueran más sensibles a lo que había en él de «magnánimo» y no le guardaran mayor gratitud por aquel «sursum corda» del día siguiente de Sedán. Ello es que su leyenda aún no estaba entonces perfilada y que su historia no era limpia. Guardaban el recuerdo vivo de su partida en globo durante el sitio de París, pero guardaban también el de su retirada, por no decir el de su fuga, a San Sebastián; y las revelaciones de la encuesta sobre los actos del Gobierno de la Defensa nacional venían a empañar un poco la bella página. En fin, sus contemporáneos eran testigos de sus variaciones y vieron con indiferencia su caída. Luego, el celo piadoso de sus amigos lo han hecho memorable. Desapareció temprano, y ha podido creerse que sin rendir lo que prometía. No gobernó, y por eso han podido atribuírsele dotes y miras de hombre de Estado. Mal definida, su República flotaba como su espíritu, aquel espíritu cuya instabilidad inquietaba a Grévy.

Para el burgués de Mont-sous-Vaudrey, el «tribuno» era demasiado demócrata, y, al mismo tiempo, no era un republicano bastante ortodoxo ni bastante seguro. Tenía sus razones para juzgarlo impulsivo, propicio siempre al extremismo. Partidario de la lucha a ultranza, adversario del Tratado de Francfort, apóstol del desquite, Gambetta es ganado un día por la idea del acercamiento a Alemania y cae en el otro extremo. Da oídos a los intermediarios que le llevaban a negociar secretamente con Bismarck, y cuando es hora de entrevistarse con el «monstruo», en Varzin, muda de opinión. Y así era en todo, dócil a las influencias del momento, más aún a la de su compañera, y versátil con aquella imaginación italiana que le ofrecía una serie de papeles grandiosos que representar, con un temperamento de tribuno y vocación de cónsul. Los republicanos de vieja cepa, campesinos y burgueses, naturalmente, habían de recelar de este personaje inquieto, avasallador, que estaba en todas partes. Moría a los cuarenta y cuatro años. ¿Qué hubiera hecho, de haber vivido más? ¿Qué tono hubiera dado a la República? De él partió el oportunismo político, algunas veces turbio. De él partieron también la Liga de Patriotas, Déroulède, el «boulangismo». Tal vez su origen extranjero hacía que el régimen lo rechazase. Un no sé qué de exorbitante y extraño, cierta *transmarina peregrinitas* acusábase en su manera de concebir y practicar la política, en aquella eficacia de su verbo. «Sin querer, casi sin darse de ello cuenta, torcía las ruedas de la Constitución», ha dicho Fraycinet. Se hizo sospechoso de aspirar a la dictadura, y

ésta no era una calumnia del todo vana. Instintivamente, las gentes del terruño guardábanse de él. En su tiempo, observábase que el duque de Broglie, por su común origen italiano, revelaba, a veces, cierta simpatía hacia su joven adversario. En nuestros días, hay quien le ha descubierto alguna afinidad con Mussolini.

Según sus prudentes guías, la higiene de la República pedía dos cosas. Primera, que la democracia fuese, si no «reembalsada», contenida, lo cual no había cesado de hacerse desde el triunfo de los republicanos. Y segunda, que entonces resistiera a la tentación de entregarse a un hombre. En virtud de ambas normas, había sido descartado Gambetta. Desaparecido él, propusiéronse mantener una línea media, lejos de esas aventuras que traen aparejadas consigo las grandes popularidades, y al abrigo de esas otras sacudidas y reacciones violentas, que son inherentes a la democracia.

V

El error de Julio Ferry

«Una sociedad en que la distinción personal apenas se avalora, en que el talento y el espíritu nada significan oficialmente ni ennoblecen las altas funciones, en que la política degenera en oficio de gentes desarraigadas y de tercer orden, en que las recompensas de la vida vienen a recaer, de ordinario, en los intrigantes, en la vulgaridad y en el charlatanismo ducho en el arte del reclamo, en la truhanería que bordea hábilmente los contornos del Código penal...» He aquí cómo pinta Renán la situación en 1883, una situación que él aceptaba, por considerarla dentro del «desenvolvimiento del espíritu», y a la que otros, menos refinados, iban incorporándose al verla compatible con su bienestar y sus fortunas. Pero había otras necesidades que satisfacer, ciertos idealismos que contentar, y Grévy, por haberlos desestimado, y Ferry, por no haberlos considerado bien, iban a dejar expuesta la República a las crisis contra las cuales pretendían inmunizarla.

La desaparición de Gambetta les quitaba de encima un gran peso. Con él no había muerto el radi-



calismo, pero perdía vigor y estridencia. Ya el oportunismo lo había alterado, y ahora se quedaba sin unidad de doctrina y sin jefe.

En su origen, los dos puntos esenciales del programa radical habían sido, en política exterior, el no dejar que prescribiese nunca el derecho de Francia a las provincias perdidas, y en política interior, la revisión de la Constitución «orleanista» de 1875. Por lo que concernía al desquite, Julio Grévy tenía formada su opinión desde largo tiempo: era una locura pensar en él. Ya en 1871 le había dicho al alsaciano Scheurer-Kestner: «Francia tiene que aceptar el hecho consumado y renunciar a la Alsacia». Habíase hecho cuanto cabía para que el partido republicano dejara ya de ser el partido de la guerra, y esta idea debía llevarse a cabo. En cuanto a las leyes constitucionales, los republicanos prudentes entendían que debían modificarse lo menos posible: sabían ellos muy bien que la revisión era una de esas cuestiones doctrinales que no interesan demasiado a las masas. Por donde, si había que contentar al patriotismo y a la democracia, a la necesidad de actividad y a la de reformas, a la idea nacional y al espíritu de mudanza, todo ello podía lograrse con un poco de ingenio y habilidad, evitando cuanto entrañara riesgos graves. Buscaron, a la vez, sinapismos y concesiones.

Julio Ferry explicaba el alcance de aquella frase suya que indignó a los republicanos de acción: «El peligro está en la izquierda». Protestaba de una mala interpretación de sus palabras: él había acusado tan sólo un peligro momentáneo, dado que el peligro monárquico se había desvanecido ya. La verdad era

que había hecho traición a su pensamiento. Los moderados habían reanudado para su lucha del 16 de mayo la alianza con los intransigentes y los revolucionarios, y ahora esa alianza les pesaba. El propio Ferry parecíale demasiado avanzado a Grévy, que lo aceptó; ahora prefería a Freycinet, menos áspero, o a Duclerc, más tierno. Mientras estuvo en la Presidencia, Grévy apartó del Poder a los radicales estrepitosos. En nombre de éstos, Clemenceau exigía el «máximum de República». Y tenía razón: estaban desde arriba dosificándola.

Hubo, pues, gobiernos animados de un secreto recelo hacia la democracia, cuyos excesos temían por la misma República. Al no poder negárselo todo, procuraban desviar la corriente y concederles aquello que parecía no traer consecuencias graves: por ejemplo, el divorcio, que fué restablecido. Otras veces, acordábase con las exigencias del radicalismo, y después trataban de rescatar parte de sus concesiones. Tal ocurrió en la reforma judicial. Persiguióse a los magistrados hostiles al régimen, sospechosos de reacción o de clericalismo, y, para lograr una depuración del Cuerpo, hasta la inamovilidad dejaron sin efecto. Pero la izquierda pedía más: pedía una magistratura popular conforme a los principios de la Revolución, y obtuvo de la Cámara un voto en pro de la elección de jueces. Algunos meses después, este voto de principio emitido con el consiguiente estrépito, era anulado. Por cierto que sería tarea curiosa el cómputo de las leyes que, de entonces acá, no han logrado jamás pasar de lo que pudiéramos denominar el voto en primera lectura. Los prudentes y moderados aplicában-

se, sin ruido y sin descanso, a eliminar cuanto podía de sí atacar al régimen, exponiendo a la sociedad a desórdenes materiales. Como poco antes Julio Simón, Julio Grévy tenía derecho a decir que él era profundamente republicano y profundamente conservador. Quiso un ministro aludir a la separación de la Iglesia y del Estado, y él le invitó bruscamente a no hablar más de semejante locura. En el Concordato veía Grévy un medio de gobierno acreditado, del que fuera absurdo desarmarse.

Era menester velar por la misma Constitución, y Grévy y Ferry rindieron a la República este servicio eminente. Alterar en sus partes esenciales la obra de 1875, cuya utilidad se descubría todos los días, era, a la larga, discutir el régimen. Por otra parte, era difícil rechazar pura y simplemente la idea de revisión; la izquierda habíala inscrito al frente de su programa, y había sido ésta una de las promesas hechas a la democracia, una de las razones de ser del partido radical. ¿Podía la República mantener una Constitución orleanista, votada con todo el sentimiento por los republicanos, a los que en aquel instante no les era dado conseguir más, y fiaban en la posible revisión, estipulada por Gambetta? Los monárquicos, victoriosos, ¿se hubieran abstenido de retocar unas leyes constitucionales dispuestas de suerte que hicieran posible un día la restauración? Estos argumentos venían a reforzar las objeciones lanzadas contra la Asamblea nacional por los republicanos de principios. Las campañas de la izquierda eran ardientes. Grévy y Ferry comprendieron la imposibilidad de hurtarse a la revisión.

Mal de su grado, hubieron de iniciarla con el fin de encauzarla y mantenerla dentro de ciertos límines, no sacrificando sino lo accesorio y agitando la opinión en torno del nuevo artículo que declaraba inelegibles a los príncipes, y del otro que consagraba como indiscutible en adelante la forma republicana del Gobierno. Sobre todo, lograron evitar el gran peligro: que las dos Cámaras, reunidas en Versalles, actuasen como una Constituyente. En definitiva, los retoques que, bajo su dirección, decidió el Congreso de 1884, dejaron intacto lo principal de las leyes constitucionales. Los viejos aún habían podido vigilar. En vano la extrema izquierda presentó corregidos los puntos fundamentales de su doctrina; fueron rechazados, como lo habían sido en 1875. Supresión del Senado, elección de ambas Cámaras por el mismo sufragio, retirada del derecho de disolución; nada prevaleció de cuanto el partido radical exigía como condición de una democracia sincera y completa. En cuanto a la Presidencia de la República, apenas fué combatida, puesto que no se discutía ya el principio de la institución. Comparado con sus exigencias de primera hora, bien poco fué lo que obtuvieron los revisionistas. La participación de las ciudades en la composición de los colegios senatoriales fué aumentada, sin que el Senado llegase a perder su carácter rural. Unicamente suprimieron los senadores vitalicios. El Congreso decidió que los setenta y cinco que había inamovibles fueran desapareciendo con la muerte, y a cada vacante se asignasen los puestos a los departamentos de mayor densidad de población. Con el nombramiento por designación interior extinguía-

se en la Cámara Alta el último vestigio aristocrático. Más de un republicano lo ha venido a lamentar. Challemel-Lacour lo había dicho: desaparecía un medio de honrar a los mejores, de otorgar representación al mundo de la inteligencia y de mantener en dicha Cámara un núcleo de hombres prestigiosos y un cierto tono. Entre los senadores vitalicios había algunos escritores, sabios y filósofos, designación que no acusaba abusos por parte de los electores. Unicamente cuando fué abolida la inamovilidad, diéronse cuenta de que el Senado iba a convertirse en el vestíbulo de un panteón republicano. Sino que lo advertían un poco tarde en su arrepentimiento. El sufragio restringido, rural, proscribiría no menos que el universal la nobleza del espíritu. Y, en efecto, los senadores fueron, en adelante, saliendo de las Diputaciones provinciales y de los Sindicatos agrícolas, no de las Facultades ni de las Academias ni de las grandes corporaciones del Estado.

El nivel seguía descendiendo, y, a su costa, subsistía lo esencial. Se había franqueado un paso difícil, sin que la República alcanzara su «máximum». Durante algún tiempo, los radicales mantuvieron en su programa la revisión hasta el día que el «bulangismo» la hizo suya para comprometerla. Ya después fué punto abandonado. El riesgo estaba en arruinar la Constitución, por lo menos en quebrantarla o debilitarla. El Congreso de 1884 la había confirmado, al fin. Grévy y Ferry habían seguido por donde aquella Asamblea conservadora, a la que debía su viabilidad la República; habíase evitado la democracia pura, y el radicalismo quedaba aún vencido. Continuaba la lucha entablada desde el 4 de septiembre entre moderados y extremistas, y los moderados obtenían una ventaja de no menor importancia que el servicio que acababan de prestarle al régimen.

El recuerdo de la discrepancia que en 1870 había dividido a los republicanos llevaba a estos espíritus políticos a otra consecuencia. La muerte de Gambetta no había extinguido su animadversión y recelo contra los partidarios del desquite, y, por otra parte, ellos sentían en el país aquella fibra resentida, aquel anhelo de borrar la humillación y reconquistar un poco de gloria. «Ya que no el desquite directo —dice Freycinet—, Francia quería, al menos, desempolvar sus armas, hacer ver que habían conservado su fuerza». La idea de reconquistar la Alsacia y la Lorena era insensata. Pero los otros continentes ofrecían el campo libre; el Asia, el Africa brindaban al orgullo nacional, a la necesidad de movimiento, a la actividad militar, un empleo que no parecía peligroso. La conquista de un imperio colonial fué idea de gobierno.

Lo cual no es decir que fuera una política premeditada, nacida de un cálculo reflexivo, que no lo fué. Luego ya aquella «expansión colonial» convirtióse en sistema, sin provocar las ocasiones, sino aprovechándolas conforme iban presentándose. Las circunstancias habían determinado la intervención en Túnez. Las circunstancias fueron también las que llevaron a Ferry a lo de Tonkín.

Los comienzos pasaron desapercibidos. A pesar de su organización en República, Francia no era consultada. Lanzáronse a conquistar vastos territorios, a fundar colonias y protectorados, como luego harían

la guerra y la paz, como luego concertarían tratados y alianzas, sin preguntarle su parecer al pueblo, sin llevar siquiera a las Cámaras otra discusión que la de los créditos necesarios. *Principio facto a Fabio.* Soldados audaces, creadores de genio, reverdecieron los laureles de la historia colonial. Fué aquello un sostén moral para la nación, pasmada de verse alumbrando tantas energías. Y así vino a fundarse un vasto imperio, hasta que ya no hubo que hacer sino guardarlo. Continuábase en grande la trayectoria de los regímenes monárquicos, aplicados, desde Carlos X y el desembarco de Argel, a rehacer el dominio de ultramar, del que apenas quedaban débiles vestigios a la caída de Napoleón I. Esta fué obra de la tercera República, pero no de la democracia, que nunca hubiera dado sus votos a la empresa. En 1882, la cuestión de si Francia debía intervenir en Egipto, repartiéndose con Inglaterra también los beneficios, fué resuelta negativamente bajo la presión de la opinión pública, traducida por Clemenceau. La misma respuesta hubiera obtenido la cuestión de Túnez, la de Tonkín y cualquier otra sin la iniciativa del Gobierno, que fué posible porque Francia no estaba organizada como democracia integral. La Constitución de 1875 todavía era buena para que el Poder ejecutivo contase con la suficiente independencia y hasta con el suficiente secreto para llevar a cabo algunos de sus planes.

A decir verdad, nadie presumía el desarrollo que iba a tomar una operación destinada en principio a reprimir la piratería en el delta de un río asiático. «No cabe ni pensar en una conquista de Tonkín,

que ciertamente no ofrecería grandes dificultades, pero que sería absolutamente estéril». Así hablaba, equivocándose ya dos veces, Challemel-Lacour, ministro de Negocios extranjeros, un día en que presentaba una petición de créditos. Y fueron sucediéndose los dispendios y los envíos de tropas. Y cundió el malestar: por un lado, el descontento de quienes veían cómo Francia dispersaba sus fuerzas fuera de Europa, tan lejos de la frontera que quedaba abierta; por el otro lado, la inquietud de la población sedentaria y tímida. Aquellas expediciones por tierras desconocidas juzgábanse aventuras demasiado costosas, nuevos Méjicos. Atosigado entre tantas cuestiones, distanciado, tieso, altanero en sus respuestas, Julio Ferry se hacía sospechoso. Lo cual se agravó aún cuando la operación de Tonkín trajo la guerra con la China. Vino la noticia del desastre de Lang-Son, y la indignación desbordóse. Desde Waterlóo, cuenta un testigo, no había habido un pánico semejante. Todo parecía perdido. Ferry estaba ya derribado cuando se supo que las primeras noticias habían exagerado la gravedad de la derrota y que las negociaciones entabladas con China ofrecían ya los preliminares de paz. Y en estas circunstancias singulares entró Francia en posesión de Tonkín y recibió el protectorado del Annam. Sin embargo, el golpe había sido rudo y el nombre de Lang-Son quedaba vivo. Amanecían días críticos para el régimen republicano. La diversión colonial resultábale funesta y le atraía, como a Julio Ferry, el golpe de la impopularidad.

Con todo, si analizamos los sentimientos que hi-

cieron detestar al «tonkinense», descubrimos la razón de que la República escapara al peligro. En la sesión del 30 de marzo de 1885, ¿quién era el que lanzaba el famoso apóstrofe que hizo caer a Ferry? «Nosotros no queremos ya discutir con vos los grandes intereses de la patria. No os conocemos, no queremos conoceros...» Era ésta la voz de Clemenceau, que ya a su tiempo había rechazado el Tratado de Francfort y la cesión de Alsacia y Lorena, y que en Burdeos no soportó ni el contacto con los ratificadores. Como entonces, levantábase ahora a denunciar el abandono de los derechos de la patria, la blasfemia contra cosas que eran sagradas. Advertía él que «la República es la paz», pero quien hablaba por su boca era el desquite. ¿Y quiénes se sumaban a esta filípica ardiente y al voto que derribaba a Ferry? En parte, conservadores y rurales como aquellos de la Asamblea nacional. La Francia campesina no quería guerra ni en Tonkín ni en ninguna parte. Aquí estaba el equívoco.

Ferry, cuando su caída, tuvo que salir de la Cámara por una puerta falsa, para escapar a la cólera. París chillaba, y en plena calle maltrató un día al hombre que descuidó las provincias perdidas y a quien la voz de Clemenceau acusaba de alta traición. En cuanto a los pueblos, miraban a Ferry como a un hombre peligroso que dilapidaba millones y sacrificaba soldados en meras aventuras. Cubierto de oprobio, su nombre era odiado en todas partes. Lo de menos ya era ponerse de acuerdo sobre las razones de tal repulsa, cuando de ella arrancaba el camino de salvación de la República. Ferry había herido y pisoteado, a la vez, todos los sentimientos: para los católicos era el Diocleciano de levita, el perseguidor de maneras glaciales, el anticristo del artículo 7.° y de los decretos que arrojaban a la calle a las siervas de Dios; para los patriotas era el otro impío que sustituía la Alsacia y la Lorena por Tonkín y Madagascar; para los campesinos era el hombre alarmante que decía que Francia debía difundir a lo lejos «sus costumbres, su lengua, sus armas, su bandera, su genio».

En esta confusión transcurrieron las elecciones de octubre de 1885. Sin saber de fijo el porqué, habíase vuelto al modo de escrutinio rechazado cuando Gambetta lo propugnaba, y el voto por listas de departamento había de dar amplitud a todo movimiento de opinión. Además, los republicanos habíanse dividido en adversarios y partidarios de Julio Ferry. Monárquicos y conservadores, por su oposición a la empresa de Tonkín, aparecían de nuevo como los verdaderos pacifistas. Por donde esas elecciones vinieron a hacerse todavía, como las de 1871 y 1877, bajo el signo de la guerra y la paz. Y no era sólo esto. Cuatro años de Gobiernos republicanos un poco más inclinados a la izquierda que los precedentes, habían difundido el descontento y la inquietud, lo cual demuestra que no eran superfluas ni las aprensiones ni las precauciones de Julio Grévy, y que el ir demasiado aprisa o demasiado lejos era arriesgarlo todo. Al pequeño Sedán de Lang-Son, al déficit financiero, a la inestabilidad de los Ministerios, juntábase el exceso de leyes, de reformas, de discursos, que daban que temer a las gentes preocupadas de su tranquilidad, gentes que habían sido atraídas a la Re-

pública invocando el respeto al orden establecido. Ahora el régimen se dejaba juzgar por la experiencia.

La alarma fué viva. En la primera vuelta, la derecha contaba con cincuenta representantes más que los republicanos. Sin Mac Mahon, Broglie y Fourtou, había vuelto otro *16 de mayo*. Como entonces, fué necesaria la unión de todos los republicanos para conjurar el peligro. En la segunda vuelta, el presidente del Consejo, Brisson, sacó el registro de la «incorporación» (*ralliement*) y volvió a imponer la consigna: «No hay enemigos a la izquierda».

Esta coalición llegó a reconquistar la mayoría, y aun a aumentarla un poco, anulando a cuantos monárquicos pudo; pero las cosas distaban mucho de ir como antes. Los franceses habían sido lastimados en sus intereses y en sus costumbres, o heridos en sus sentimientos más nobles. Sin pensarlo, Julio Ferry había puesto el régimen en peligro. Cierto que, en el último trance, los oportunistas y los radicales se habían unido contra el enemigo común, pero luego volvían ya a sus disensiones. Con una derecha de doscientos miembros, la Cámara quedaba dividida en tres grupos enemigos. Y en el país había una masa considerable que había votado por los conservadores y que observaba una actitud crítica. De ella dependía todo, y no era necesario que engrosara mucho para que la República acabara, encontrando el final que temían y trataban de evitarle aquellos guías, cuya perspicacia fallaba por esta vez.

Ferry había contribuído con sus errores. Julio Grévy cometió, por su parte, una falta, o se la hicieron cometer: la de intentar de nuevo la Presidencia el expirar su septenio, y con sus setenta y ocho años a cuestas. Le empujaban los suyos, y los suyos valían bien poco. Con su empaque burgués, Grévy resultaba el prisionero de una familia y de un círculo que Renán definía, sin saberlo, cuando, en el texto que nosotros hemos citado, hablaba de «truhanería que bordea hábilmente las vallas del Código penal». Se incubaba el escándalo en la mansión presidencial. Eran aquellos los tiempos bizarros en que Ferry introducía la moral de Kant en la escuela y Grévy acogía en el Elíseo el culto de Mammon.

El azar obró por su cuenta en otro sentido. Reelegido el 28 de diciembre de 1885, casi aclamado, pues tal había sido el pánico producido por la candidatura de Julio Ferry, siguió en su predilección por Freycinet y le encargó de formar Gobierno. Encontróse con que le faltaba un ministro de la Guerra; entre los militares a quienes se ofreció la cartera, el uno, Saussier, la rehusó por no abandonar sus funciones de generalísimo; el otro, Campenon, objetó su necesidad de descanso, y, para hurtarse a las insistencias, lanzó el nombre del general Boulanger. Freycinet hubo de recordar que en Túnez este general había tenido ciertas rozaduras con las autoridades civiles; pero Campenon excusó a su joven camarada, asegurando que «en el fondo era disciplinado», quizá porque éste le inspiraba una simpatía sincera, quizá por inspiración fortuita. Según propias declaraciones, Freycinet, por la premura de formar su ministerio, aceptó a Boulanger, fiado en la

recomendación de un viejo soldado que había dado al régimen reiteradas pruebas de su fidelidad.

A la verdad, Boulanger gozaba de otro patronazgo. La política le atraía, y este oficial contaba en los bancos de la izquierda con amigos que le tenían por un ardiente republicano. Director de la Infantería, eran muchas sus relaciones, y parece que Freycinet retocó ligeramente su referencia. «Este nombramiento es notorio públicamente que fué sugerido, si no impuesto, por Clemenceau», dice el senador Pablo Strauss, testigo de aquel tiempo. En efecto, el nuevo Ministro de la Guerra comenzó dando a la República prendas de un celo impetuoso.

Los republicanos, inquietos por el éxito de la derecha en las elecciones de 1885, acababan de votar una ley desterrando a los primogénitos de las familias que hubieran reinado en Francia. Sirviółes de pretexto la recepción que el conde de París había dado con motivo del matrimonio de su hija la Princesa Amelia con el futuro Rey de Portugal. Esa misma ley prohibía a los miembros de dichas familias el ingreso en el Ejército, si bien no les retiraba su derecho si poseían ya algún grado. Por su propia autoridad, sin consultar con sus colegas, Boulanger eliminó a los Príncipes de sus respectivos cuerpos. Acusado de abuso de poder, defendióse leyendo en la tribuna la hoja de servicios de Enrique de Orleáns, duque de Aumale, nombrado general de División en 1843, a la edad de veintiún años. Lo que no dijo Boulanger es que esta promoción había sido regular y ajustada a una ley vigente bajo la Monarquía ciudadana. La Cámara no hiló tan delgado, dió su aprobación a

Boulanger y ordenó la publicidad de su discurso. Al día siguiente de este triunfo parlamentario, en la revista del 14 de julio, montado en su alazán, fué aclamado el ministro de la Guerra. Hasta los «chansonniers» contribuían a su popularidad, y se convertía en el ídolo del París patriota y republicano. Clemenceau no lo había abandonado todavía, y Rochefort lo había adoptado.

En sus comienzos, el hombre del desquite, el aspirante a la dictadura subió por habilidades parlamentarias no demasiado finas. A costa de asuntos perdidos, se labraba sus éxitos sin gloria. Los conservadores execraban a este demagogo de uniforme, y en venganza publicaron una carta bastante humilde que él había escrito, seis años antes, a «Monseñor» el duque de Aumale. Con tal motivo hubo un duelo entre Boulanger y un senador monárquico. Por el momento, las posiciones eran todavía las de 1871 y aun las mismas de Fructidor: a la derecha, los pacíficos; a la izquierda, los militaristas y partidarios de la guerra.

Nacido en París, el París de la Comuna contra los rurales y los ratificadores, la popularidad del general republicano del caballo blanco no era inexplicable. Para excusarse de haberlo llevado al Ministerio, Freycinet exagera demasiado la parte que pudo haber de azar en ello. Según él, Bismarck había designado a Boulanger a los patriotas franceses. En enero de 1887, para obtener del Reichstag el voto de los créditos destinados al aumento de las fuerzas alemanas, Bismarck afirmó que Francia se preparaba a atacar a Alemania. Y con el fin de dar verosimilitud a su

afirmación, añadió: «Si el general Boulanger llegase al Poder, ¿qué es lo que podría disuadirle de intentar la guerra?» Estas palabras, según Freycinet, fueron una especie de consagración. Hasta los enemigos nombraban al hombre del desquite. Un argumento oratorio, una hipótesis de circunstancias inflaban la imaginación de los franceses.

Mucho más exacto sería decir que Bismarck hinchaba de propósito cosas que veía por intuición. No puede decirse que las inventara por completo. Quince años después del Tratado de Francfort, Francia sentía perdurable la humillación de la derrota. La voz de quienes habían protestado en 1871 encontraba eco. Comprendíase el efecto de la política de renunciamiento, y la distracción que representaban Tonkín y Madagascar. Sobre todo, quizá se veía claro que la expansión colonial había aislado a Francia, la había enemistado con Inglaterra, a la que por nada había abandonado el Egipto, y con Italia, que se disponía a entrar en Tripe Alianza con los Emperadores de Berlín y de Viena. Entretanto, el acercamiento que la política francesa había intentado con Alemania, permanecía estéril, y las relaciones entre ambos países habían llegado, incluso, a una tensión peligrosa. Viviase bajo la amenaza de la guerra. Bismarck parecía desearla. El abril de 1887 creyóse que iba a estallar. El caso de Pagny-sur-Moselle, que conmovió al país, tenía el carácter de una provocación: el comisario Schnoebelé había sido atraído a una emboscada, perseguido y arrestado en territorio francés. La impresión fué que todo había sido calculado por Bismarck para irritar a Francia. Pero el incidente salvóse a fuerza de sangre fría. El propio Julio Grévy estuvo atento a la redacción de las notas diplomáticas, e incluso medió en ellas su pluma, desempolvando sus dotes de jurista y sus «habilidades de redacción», para defender la causa de Francia sin dar pretextos a su adversario, y a Bismarck se le escapó aquella ocasión de guerra. En aquel trance, Francia se felicitó de haber reelegido a Grévy, infalible en su prudente magisterio.

Se había visto muy de cerca el peligro, y la presencia de un militar en el Gobierno fué una garantía. El pueblo iba habituándose a volver sus ojos a Boulanger como a su jefe. Con agudeza y verdad nota Freycinet: «Su personalidad crecía conforme aumentaban las probabilidades de un conflicto. Pasada la crisis, supo sacar partido de la importancia que esa crisis le había dado».

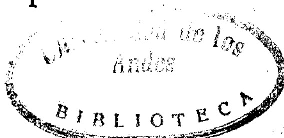
«Inquieto, lastimado, el sentimiento nacional, hubo de tomar la forma que pudo hallar a su alcance, y se fijó en el hombre que encontraba ante sí, exactamente lo mismo que el odio se concentraba contra el otro hombre de Tonkín, convertido en la personificación de cuantos reproches se le hacían al régimen. El «bulangismo» nacía del error de Ferry. Y Clemenceau, por su parte, no había lanzado en vano esa palabra que subleva y lanza a las multitudes: la palabra «traición».

VI

El «bulangismo»

El 1.° de enero de 1887 el Presidente daba una comida en el Elíseo. Uno de los comensales, Eduardo Millaud, a la sazón ministro de Obras públicas, que redactaba un Diario íntimo extremadamente ingenuo, anotó la presencia, allá al extremo de la mesa, de un personaje inmóvil y silencioso «con su barba color de llama y su busto rígido». Este *maniquí* se llamaba Daniel Wilson. Diputado por Indre-et-Loire y yerno de Julio Grévy, estaba destinado a ser, meses más tarde, el protagonista de un escándalo demasiado intempestivo. No podía llegar en peor momento un *asunto* de corrupción que comprometía al propio Jefe de Estado. En ese año, de 1887, todo pareció conjurarse para acabar con la República.

La actitud de Boulanger resultaba ya crítica. La popularidad empujaba al general jacobino, y él se dejaba llevar de ella. Cada uno de los incidentes que Alemania provocaba, porque el de Pagny-sur-Moselle no fué el único, realzaba su figura. Mimado de la izquierda, continuaba en su ministerio, a pesar de que a la caída de Freycinet el Poder había pasado a



Goblet, radical gubernamental, designado por Grévy para evitar un radical extremo. ¿Qué era preferible? ¿Tener a Boulanger dentro o tenerlo fuera? El riesgo parecía el mismo, y aquellas dudas llegaban ya demasiado tarde.

A mediados de mayo es derribado, a su vez, Goblet, y transcurren dos semanas en busca del sucesor. El «caso Boulanger» se agriaba y estaba dividiendo a los republicanos. Los unos, guiados por Rochefort, exigían que el general conservase la cartera de Guerra, y denunciaban como una deshonra que Francia lo sacrificase a Bismarck. Los otros, mantenían la necesidad de este sacrificio, dada la tensión de las relaciones con Alemania. Dió entonces la coincidencia de que Le Flô, embajador en Rusia cuando la alarma de 1875, publicó los documentos que revelaban por vez primera el peligro que el pueblo francés había corrido entonces; vino a saberse hasta qué punto había estado próxima la guerra, cuáles habían sido los proyectos de Bismarck y qué amenaza se cernía sobre Francia. Todavía esto determinó conclusiones contrapuestas: para los partidarios de Boulanger esta era una razón más para mantener al hombre que poseía la confianza del Ejército; para sus adversarios era una razón para descartarlo, a fin de no provocar vanamente a Bismarck.

Y surgía otro debate. Julio Grévy y Rouvier, oportunista complaciente, llamado por aquél para formar Gobierno, recibían por dos lados diferentes las protestas contra el general. Julio Ferry, en su amargada desgracia, coincidía con el barón de Mackau, jefe de las derechas, para llevar al Elíseo el mismo ve-

to. Clemenceau definía bien la situación al decir que, por la interdicción de Bismarck y de Ferry, Boulanger se convertía en la encarnación de la patria, mientras que el ostracismo de los monárquicos, que no perdonaban lo de los Príncipes excluídos, le convertía en la encarnación de la República. Y con todo esto, añadía Clemenceau, Boulanger no era sino un general de golpe de Estado.

Estas discusiones iban prolongándose sin resultado, cuando el 22 de mayo, en una elección parcial del Departamento del Sena, 38.000 votos volcáronse espontáneamente por Boulanger, quien, como militar en activo, no podía ser candidato ni electo. Aquello fué una señal de alarma. Los tres grupos republicanos del Senado, libres entonces de la influencia del radicalismo, hicieron saber a Julio Grévy que ellos no votarían más que un ministerio en el que no figurara Boulanger.

El efecto de estas controversias fué que Rouvier, al dejar fuera al general y enemistarse, por lo tanto, con un sector de la izquierda, tuvo que recurrir a los votos de la derecha para obtener una mayoría en la Cámara. Primero Ferry, y luego Boulanger, levantado por los errores de Ferry y mantenido por los radicales, habían producido tal subversión en la República que, dos años después de estas elecciones de 1885, en las que fué necesaria para salvar el régimen la disciplina de todos los republicanos, el Gobierno veíase en el trance de solicitar el apoyo de los monárquicos. ¿Pero qué? Ante la amenaza de cesarismo, ¿no serían algunos los republicanos de centro izquierda que añorasen la monarquía parlamentaria?

Los acontecimientos, ¿no daban la razón a aquellos orleanistas de la Asamblea nacional que afirmaban que la democracia, por sus oscilaciones incesantes entre la anarquía y la dictadura, es incompatible con cualesquiera instituciones libres? Sea de ello lo que fuere, lo cierto era que, para mantenerse a igual distancia del Ferry comprometedor y del Boulanger peligroso, los republicanos gubernamentales tenían que aceptar el apoyo de los conservadores. Y no es bastante decir que la alianza fué aparente. La alianza estaba hecha. Cuando la extrema izquierda le reprochó sus transacciones con la derecha, Rouvier, a vuelta de infinitos rodeos, respondióles que el suyo era un Gobierno «abierto», y que él no se avenía a tratar como enemigos a aquel lado de la Cámara.

La unión de las fuerzas conservadoras, tantas veces entrevista, aparecía al alcance de la mano. La cuestión religiosa surgió de nuevo para malograrla.

La derecha seguía sacrificándolo todo al servicio de la Iglesia. Los republicanos menos fanáticos, los que miraban solamente por sus negocios, no se atrevieron a afrontar las sospechas de clericalismo. La derecha había puesto a su concurso varias condiciones, entre ellas el que se suavizaran las leyes de Ferry, y, como estaba preparándose una nueva ley de Reclutamiento, la exención del servicio militar a favor de los seminaristas. Intimidado por los radicales, Rouvier no mantuvo sus promesas. Contradictor tan fútil como apasionado, Clemenceau lo azuzaba sin tregua, conminándolo a romper con unos hombres ligados al Papa y al Rey, a romper con Boulanger, el general de golpe de Estado y a romper con

Ferry, el traidor a los grandes intereses de Francia. El gran placer de Clemenceau era el decir a cuantas gentes podían oírle: «Todo ha terminado entre nosotros.» Este «no» rotundo, dirigido a todos en aquel momento crítico, no podía beneficiar más que a una causa, la del militar faccioso. La derecha, desoída en lo que ella consideraba esencial, quedaba relegada a la oposición, y se retiró al amparo de la «Cruz suprimida».

Es incuestionable que la República corrió entonces un grave peligro. Ante el cesarismo que se alzaba, fallábale el concurso de aquellos que, en 1875, habían establecido la institución parlamentaria y habían sido sus verdaderos fundadores al rodearla de garantías de orden, de equilibrio, de estabilidad. Los conservadores habían dado reiteradas pruebas de su repugnancia por las dictaduras; excluídos ahora de la defensa del liberalismo, quedaban vueltos hacia el general, a quien habían odiado más que pudieran odiarle los republicanos más puros. No tardaría Boulanger en hacerles ciertos anticipos a los hombres de derecha: combatido por quienes le habían formado, esta política le parecía la indicada. La República no le había escatimado ningún elemento de éxito, y ahora ella misma era la que le reconciliaba con el adversario y la que anudaba con sus propias manos la coalición.

¿A qué debió su salvación? A la irresolución del general, a su gusto por las habilidades, a la mediocridad de su carácter y de su espíritu, a su falta de imaginación y de ideas. Era aquél un hombre como tantos, que no aman el riesgo y aguardan que la vic-

toria les entre por las puertas. No se había equivocado Campenon al recomendarlo a Freycinet: Boulanger, en el fondo, respetaba la disciplina, los caminos irregulares le causaban una especie de angustia y, al cabo, no era sino un tímido, tan poco dispuesto para ejercer la autoridad que se doblegaba a ella en cuanto se dejaba sentir.

Desde que dejó el ministerio de la Guerra su popularidad había aún aumentado. Un poco tarde, se dieron cuenta de que era más peligroso fuera que dentro; y, para cortar por lo sano, el Gobierno decidió alejarlo de París dándole el mando del 13.° Cuerpo de Ejército en Clermont-Ferrand. El 8 de julio de 1887 una muchedumbre inmensa afluyó a la estación para impedir su partida: allí fueron las escenas de entusiasmo idolátrico, allí los hombres echados sobre los raíles para que el tren no saliera. ¿Y qué hizo entonces Boulanger? Ni por un instante le asaltó la idea de refugiarse en el seno de aquella muchedumbre o de ponerse a la cabeza de todos. Los hubiera llevado adonde hubiera querido; pero, ¿sabía él adónde llevarlos? Aquel Boulanger no fué entonces más que un general, molesto porque no le dejaban marchar a su destino. Un policía perspicaz advirtió su embarazo, le llevó hacia una vía apartada y le hizo montar en una locomotora; Boulanger se había hurtado a las aclamaciones y a la confianza de París, y ni siquiera había tenido la suficiente presencia de ánimo para exigir que se le asegurara una partida digna de su misión.

Aquel día un observador hubiera tenido que deducir, como lo dedujo el policía Luis Lépine, cuya

carrera comenzó por este subterfugio, que al héroe popular faltábale algo que ama la fortuna: audacia. Cuando Ferry lo llamaba desdeñosamente un «Saint-Arnaud de café concierto», aventuraba un epígrama cuyo valor no excedía al de aquellos que habían acribillado a Bonaparte y a su sobrino antes del 18 de Brumario y antes del 2 de diciembre. El café concierto no lo tiene quien quiere. Hubiera sido más exacto resucitando una frase célebre y diciendo: «El temible no es Boulanger, sino el descontento general».

La prueba está en que el «bulangismo» sobrevivió a esta partida tan poco gloriosa. El prestigio de Boulanger resistía a todo, incluso al ridículo. El movimiento lanzado ya no se detendría. No había aparecido aún bajo una forma política, era tan sólo un estado de espíritu, pero poderoso. Lo primero había sido reclamar a un ministro de la Guerra que estaba identificado con el París republicano, y que, hallado por los radicales, había sido arrojado por los oportunistas. Ferry, aun después de proscrito del Gobierno, seguía acumulando sobre sí los odios. Silbaban a cualquiera que tuviese con el «tonkinés» el menor contacto. Pues bien; había un hombre, un militar, que se había opuesto a algunos hombres detestados: eso era todo.

El «bulangismo» se hizo político por culpa de aquel comensal de las barbas de llama que comía silencioso, en un extremo de la mesa de su suegro, el día 1.° de enero. En el mes de octubre de 1887 estalla un «caso», el primero de una serie que será larga: Se ha descubierto un tráfico de condecoracio-

nes, una banda ha puesto a subasta la Legión de Honor. Boulanger hállase tan lejos de ver el desarrollo y las consecuencias del asunto, que acusa al ministerio de haber provocado el escándalo para ser su propia víctima en la persona del general Caffarel, uno de sus protegidos, tristemente mezclado en aquel fraude. Desde los primeros pasos de la encuesta, los agentes equívocos y los aventureros que preparaban la clientela, se atrincheran detrás de un personaje influyente: Daniel Wilson. Y hubo que apercibirse entonces de que el yerno del Presidente de la República vendía no solamente la Legión de Honor, sino plazas y destinos.

¡Que final aquél para Grévy! En la mansión de la prudencia entraba la abyección. Hubo un tiempo en que él no quería presidente para la República. Se le había discernido esta magistratura por no haberla podido confiar a manos más fieles, y aquel hombre se había habituado al sucedáneo de monarquía concebido por las Constituyentes de 1875. Le había tomado gusto a aquello, y lo había pedido de nuevo. Y he aquí que, por medio de la institución que él había declarado funesta para las democracias, él venía a deshonrar la República y a perderla.

Burgués económico y hasta avaro, él no traficaba por su cuenta. El apego al dinero y la demasiada estima por las riquezas, hacíanle poco delicado en sus relaciones, llegando a descubrírsele más tarde algunas indignas, sobre todo la de Cornelio Herz. Había concedido a Wilson la mano de su hija porque Wilson era un rico heredero. Y este era, en parte, el materialismo que ahora expiaba. La vulgaridad de su

reinado acababa en cuenta doméstica, en ropa sucia que ya no podía lavarse en casa.

El café concierto no serviría para elevar a Boulanger a la magistratura suprema, pero sí para lanzar de ella a Grévy. Canciones y *mazarinadas* preceden de cerca a la Fronda. El *asunto* del yerno ofrecía una mezcla de risas y de odios. La corrupción, el provecho y la ratería al abrigo de los mandatos electivos y de los honores oficiales, el contraste entre las virtudes publicadas y las prácticas ocultas, todo ello había de sonar mal y encontrar un terreno en efervescencia. La calle se agitaba, crecía la cólera, y en pro de Boulanger concertáronse dos sentimientos: nada más fácil que presentarlo como sacrificado a Bismarck por los oportunistas y víctima, además, de cuantos habían robado o protegido a los ladrones. El «bulangismo» comenzaba a convertirse en opinión política. Hizo suya la idea de la revisión, y entonces pudo verse cuán peligrosos resultaban los ataques a la Constitución: esos ataques desviábanse en un sentido que no habían previsto los radicales, y lo mismo podían tornar más republicana a la República que perderla. Alimentado por una hostilidad naciente contra los parlamentarios, el «bulangismo» afirmóse como oposición al régimen parlamentario, que sufría, con Wilson, su primer descrédito.

Los verdaderos republicanos sintieron el peligro. Había un sedimento de errores, y Grévy ya no era el buen consejero y seguro guía. En su senilidad parecía entregado a la pasión de destruir lo que tantas veces había salvado. Para apaciguar a París, importaba que saliera del Elíseo lo más pronto posible. En va-

no se le conminaba a abdicar. Indiferente a la cosa pública, se preocupaba muy poco de que, por su culpa, pereciese el régimen. Ya no había Ministerio. La calle era un rumor. Veíase a los supervivientes de la Comuna, a Camelinat, al *general* Eudes, enardecidos por la esperanza de próximos desórdenes. El desbordamiento era general. Y Grévy se obstinaba en no dimitir. Fué menester que la Cámara le diera a entender su resolución de constituirse en sesión permanente hasta que él renunciase a sus poderes. El *soberano* quedó depuesto.

Con todo ello, Grévy fué añorado: «El que personificaba la calma, la sangre fría, la mesura, desaparecía para siempre.» Freycinet se alarmaba por el porvenir, temiendo que, con su viejo presidente, se alejara la tradición de la prudencia. Y los que, como él, celaban por la Constitución, podían afligirse aún más del nuevo ataque que acababa de sufrir la Presidencia. Debilitada después de Mac Mahon, sumábase otra especie de mengua con lo de Grévy; a la herida política sucedía la herida moral. Era lógico preguntarse si sobreviviría a la doble prueba.

Resulta difícil de decir en quién vino a refugiarse, esos días revueltos, el sentido del interés del régimen. Fué aquello el instinto de conservación. No bastaba con tener el espíritu republicano, era menester el discernimiento para evitar que la República se disolviese. Y había que decidir en unas horas la conducta avisada o los errores irremediables. Después de aquella decepción inesperada, casi increíble, de Julio Grévy, ¿qué cabía esperar de la Presidencia? Había motivo para detestarla como una institución funesta. Los radicales se abstuvieron de discutir la Constitución en tan crítico trance. Tratábase de elegir inmediatamente sucesor, y Julio Ferry, con cierta inconsciencia, era uno de los aspirantes. La designación de Ferry, cuyo solo nombre sublevaba a los parisienses, hubiera sido una provocación. Recordóse que él mismo había dicho un día: «Si resistís a las voces de la opinión pública, ateneos a la tendencia de este país a levantar su voz cuando los mandatarios se le hacen sordos.» La voz de la opinión era que Ferry no fuese elegido. Quedó descartada su obstinación y abatidos sus partidarios, no menos ciegos que él.

Era preciso buscar un candidato bastante neutral, bastante desvaído en su personalidad para no irritar a nadie, y que, al propio tiempo, ofreciera ciertas garantías. Descubrieron entonces, entre la nobleza republicana, al nieto de Lázaro Carnot, y, en consideración a su mediocridad, Clemenceau le dió la investidura. Su antepasado resultaba decorativo. El descendiente era frío e incoloro, correcto y formal, de la Escuela Politécnica, condición ésta muy apreciada, provisto de un nombre hereditario, Sadi, cosa bastante original y que excitaba la curiosidad: ¿cómo podía ser persa este Carnot? Y luego faltaban dos años para el centenario de 1789, y un recuerdo a la Revolución surtía su efecto. Todo ello supieron presentarlo bastante bien, ahincando sobre todo en la exclusión de Julio Ferry. Además, la República ponía así a su cabeza a un hombre que ni ofuscaba ni inquietaba, lo cual ya era mucho para

atravesar aquellos días críticos. Ese tercer presidente ha recibido de Anatole France el mote de «Minerva barbuda». Y Minerva era la que había inspirado su elección.

El oportunista Tirard, conocido comerciante de París y el *práctico* de la concentración en la Cámara, fué el primer *visir* que hizo Sadi Carnot. Pero había que ceñirse bien los calzones para la lucha que aguardaba, y no errar tampoco la maniobra. La destitución de Grévy, la elección rápida de su sucesor, no eran, al cabo, sino paliativos de urgencia, que no podían remediar el descontento. El proceso de Wilson mantenía la indignación y reavivaba el asco. La idea de revisión, tanto tiempo explotada por los radicales, tomaba ahora una forma hostil al sistema parlamentario. Los nuevos revisionistas se proclamaban republicanos, entre ellos el propio Boulanger, y Rochefort les servía de fianza. Sin embargo, quizá el «saetero» había vaciado contra el Imperio el carcaj de la libertad, y, al cristalizar en el nombre de un general y exhumar la idea del plebiscito, el *revisionismo* tornaba al cesarismo. Bajo el nombre de República honesta y patriota, lo que pedía era otra República, y la verdad es que no hay ahí mucho donde elegir. Si la nota nacional era la dominante, lo era también la nota autoritaria. Ahora bien; los jefes de esta Fronda eran «intransigentes»: o procedían del radicalismo extremo o procedían, como Déroulède, de Gambetta, el Gambetta del desquite. Y ese era el pecado original del partido republicano: su vieja tradición belicosa, ese clarinazo que lo mismo suena con Augereau en Fructidor que con Bonaparte en Brumario. Y esto era lo que había de deshacer al «bulangismo» el día en que, habiendo precisado ya sus contornos, saliera al encuentro de la masa inmutable de los electores rurales.

En esta espera, el sufragio universal parecía propicio a Boulanger y le daba ánimos. La táctica de sus partidarios era la de presentar al general en las elecciones parciales en departamentos diferentes, pero bien elegidos, y aunque el general no era elegible, cada vez la votación lo proclamaba más alto. Fué entonces cuando los republicanos, desorientados, cometieron un error: aquel movimiento del cuerpo electoral les alarmó, cuando el verdadero peligro de la República estaba en otra parte. Tenían la ventaja de disponer a su gusto de Boulanger, por su condición de militar, y, dejando ver su miedo, dieron el mal paso de exigirle el retiro, es decir, de darle el derecho a quejarse, y al mismo tiempo dejarlo libre. Ya desde entonces, Boulanger podía atraer hacía sí los plebiscitos parciales. Elegido en la Dordoña y en el Norte, en abril de 1888, aquella elección evocaba los éxitos que en Luis Napoleón Bonaparte habían precedido al Imperio. En la Cámara también recordaba la de Napoleón su pobre oratoria; parecía haber perdido su facundia con el ministerio. Los oradores le trataban con altivez, y su programa no contenía, a la verdad, más que una palabra que le habían prestado los radicales después de haber abusado de ella. El recitaba la lección que le habían hecho aprender sus inspiradores, y a todos contestaba lo mismo: que, por confesión de los republicanos más fervientes, la Constitución de 1875 era mala, y era

la responsable de las taras de la República, y era preciso reformarla. Burda era la trampa, pero la izquierda cayó en ella; en su nombre, Pelletan conminó al Gobierno a la revisión y a llevarla él mismo para cortar de una vez las campañas bulangistas. Tirard advirtió lo imprudente de la maniobra y se negó a aquello, y cayó. Carnot encarga entonces a Floquet la formación del Ministerio, Floquet, a quien Grévy había jurado no dar jamás el Poder mientras estuviera él en el Elíseo, y cuyo nombre resultaba una provocación por aquel episodio legendario de su apóstrofe al Emperador de Rusia. Fué un ensayo de conjurar el «bulangismo» por el radicalismo rígido. El proceso se agravaba.

Cuando hoy leemos los recuerdos y las confesiones de los hombres de la época, ya no podemos dudar de que, con un poco de voluntad y energía, Boulanger hubiera sido el dueño de la situación. Pero faltábale la verdadera ambición, quizá la convicción sincera, la confianza en sí mismo y en su estrella. Se hacía una pregunta que ninguno de los dos Bonapartes se había hecho jamás: «¿Qué haré yo cuando sea dictador?» Gustábale seducir, gozaba con la popularidad; pero no se servía de ella, y prolongaba, como otro placer, aquellos esponsales con la masa. Sin embargo, tenía consejeros hábiles. Sus entrenadores, Naquet, Laguerre, Jorge Thiébaud, creábanle las circunstancias, que él no tenía sino cogerlas; ofrecíanle «jornadas» ya confeccionadas del todo; cuando, en la misma Cámara y a consecuencia de un altercado con Floquet, presentó la dimisión de diputado por el Norte para significar su ruptura con los parlamentarios, fué reelegido simultáneamente en tres departamentos. El día de su vuelta al Palacio de Borbón para tornar a su escaño, una multitud entusiasta cubría la Plaza de la Concordia. «Si Boulanger llega a levantarse en su coche, y, sólo con el sombrero, les invita a seguirle, yo quedo barrido, y la Cámara invadida», confiesa el policía Lépine, encargado aquel día del servicio de orden. Pero Boulanger no dió la señal. Con aquella de la estación de Lyon, era ésta la segunda ocasión que perdía.

Nada, empero, descorazonaba a sus partidarios: ni su obstinación en hurtarse a la fortuna, ni el funesto presagio de la estocada que recibió en duelo con Floquet. Mientras, la discordia entraba donde sus adversarios. Tirard había caído por negarse a incluir en el orden del día la revisión radical, pretextando que había que hacer fracasar la revisión plebiscitaria. Floquet trajo un proyecto de reforma constitucional. Este barato colmaba ya los deseos de los bulangistas; se veía bien claro que la prudencia no dirigía aquello.

El régimen aparecía quebrantado, y la caída era probable. Eran diez y ocho años seguidos de República, y se decía que ni la Restauración, ni la Monarquía de julio, ni el segundo Imperio, habían alcanzado este término... No resulta, pues, sorprendente que la derecha, pasando por sobre sus rencores y repugnancias, se aliara en ese momento con Boulanger. Cuando quiso acercarse a los moderados y oportunistas, cuando prestó su ayuda a Rouvier para resistir al general de los jacobinos, fué rechazada. Ahora la República estaba gobernada por Floquet, es

decir, por un radical, al que el mismo Grévy juzgaba peligroso e imposible. Por otra parte, Boulanger hacíales por anticipado ciertas concesiones a los monárquicos y a los Príncipes; a pesar de sus convicciones, a pesar de su hostilidad hacia la dictadura, el conde de París ya no dudó. Todo parecía confirmar que aquel movimiento nacional del que el «bulangismo» no era, al cabo, más que el nombre, derribaría un régimen en el que, hiciesen lo que hiciesen, no tenían cabida los hombres de la derecha. Parecióles absurdo el quedarse fuera, y concertóse la alianza con el general, convertido en el «síndico de los descontentos».

Triste cálculo, porque el *síndico* no estaba a la altura de su misión. El «bulangismo» tenía que desembocar en un golpe de fuerza o perderse. Y Boulanger no era el hombre de los golpes de Estado, y desaprovechó su tercera ocasión, la mejor, la definitiva. Conforme a la táctica establecida por su estado mayor, al producirse una vacante en el Departamento del Sena, presentóse diputado por París. Aquélla era la prueba definitiva: el 27 de enero de 1889, en una jornada de entusiasmos, Boulanger fué elegido por 244.000 votos contra 162.000 que obtuvo el candidato Jacques, presentado por los republicanos con los mismos títulos que presentaron a Carnot; los de su oscuridad, que a nadie ponía en guardia. A Clemenceau, en su desprecio por la humanidad, le fallaba ahora aquello de «votar y hacer votar *por el más necio*».

Aquella noche, Boulanger no tenía más misión que la de apoderarse del Poder. Aquella misma multitud de la estación de Lyon y de la Plaza de la Concordia estaba aún allí para que él se pusiera a la cabeza y se encaminara al Elíseo. Todos los testigos se hallan acordes en este punto. La Liga de los Patriotas rodeaba a su jefe. La resistencia hubiera sido nula. El Gobierno no se defendía, quizá porque no encontraba defensores. Lépine, entonces secretario general de la Prefectura de Policía, viene a certificarlo aún: «La Prefectura de Policía no había tomado medida alguna de precaución ni de protección: ni un guardia en los lugares estratégicos o en espera de órdenes. No pretendo explicar esto; lo atestiguo. Yo circulaba a través de los grupos, desamparado, confuso entre mi impotencia, que nada podía impedir, y la multitud que gritaba en todos los tonos: —¡Al Elíseo!» Freycinet confirma el desamparo del Gobierno del que él formaba parte, el «quebranto de los guardianes del orden público». En el Elíseo esperaban de un momento a otro la aparición de Boulanger. Dícese que un coche ya enganchado estaba presto para el Presidente, a cuyo alrededor habíase improvisado el Consejo. En aquella confusión y alarma, «produjéronse los impulsos más extraordinarios...». Y lo más extraordinario que pasó fué que no pasó nada. En un restaurante de la Plaza de la Magdalena, a dos cientos metros del palacio donde los ministros y el Presidente pensaban ya en abandonar París, el Estado Mayor bulangista conjuraba al elegido para que diera la señal. Y Boulanger, con dulce terquedad, seguía diciendo que no. Cantaba el gallo por tercera vez. Por tercera vez dejaba Boulanger

pasar su hora. Se cansó la fortuna. Ya no se le ofrecería otra ocasión.

Todavía se discuten las razones de aquella inercia. Según unos, y ésta es la hipótesis a que se atenía Barrés, el recuerdo sacrílego del golpe de Estado, los anatemas contra el 2 de diciembre, las estrofas de los «Chatiments» aprendidas en su juventud, todo ello encadenaba a Boulanger. Según otros, era el freno de los acuerdos habidos con el conde de París. Tal vez, sintiéndose republicano, se le hacía recio atentar a la República. Un fondo de disciplina militar, su largo contacto con los medios políticos, sus hábitos ministeriales, quizá, determinaban también su preferencia por los medios legales. La elección le había hecho triunfar dondequiera; ¿por qué no le haría seguir triunfando? Un plebiscito podría desligarle de todo riesgo y de toda promesa. Y siguió confiándose al sufragio popular.

Creyendo elegir el camino más seguro, elegía el más peligroso. Ya que él no actuaba, actuarían contra él.

«Las doce y cinco de la noche: el «bulangismo» va en descenso». En el momento en que Jorge Thiébaud pronunciaba su famosa frase, los ministros, reunidos en el Elíseo, cuyas puertas no venía nadie a derribar, comenzaron a reaccionar. Los más inteligentes de entre ellos, comprendieron que era preciso atacar a un adversario que se entretenía, y quebrantarlo mediante una ofensiva tan rápida como vigorosa. ¿Quería él continuar el juego del sufragio universal? Pues a continuarlo; pero con la ventaja que da la posesión del Poder a los que saben servirse de

ella. Inmediatamente dispusieron allí el plan de batalla. Procesos judiciales contra el general y contra sus principales lugartenientes darían al «bulangismo» un tinte sedicioso. El escrutinio por distrito, restablecido, cortaría de plano las campañas plebliscitarias, y Boulanger quedaba desafiado a hacer triunfar en las circunscripciones rurales a cuatrocientos de sus candidatos o de sus aliados de derecha. Por toda Francia corrió la consigna: el militar faccioso que conspirara con el clero, con los comuneros y con la nobleza, no podía traer más que agitaciones, aventuras, y, sobre todo, la guerra.

Para llevar a cabo esta operación, eran menester políticos sutiles, no doctrinarios, por lo mismo que la República no podía salvarse por la sola virtud de los principios de la democracia. Clemenceau, Ranc, Joffrin, habían fundado el año anterior una Sociedad de los Derechos del hombre para hacer frente a la Liga de Patriotas. Pero aquello nada había impedido, y Floquet y el radicalismo tampoco habían salvado nada. Volviendo a la revisión constitucional para desbaratarle el plan al «bulangismo», se le venía a dar pábulo. Esto lo comprendieron algunos hombres con sentido político, y diez y ocho días después de la elección de Boulanger en París, Floquet caía por su propio proyecto de revisión. Por miedo a las medidas que pudiera tomar el Congreso, hasta la derecha y los bulangistas de la Cámara votaron contra él. Tras de Floquet volvieron los vigilantes de la escuela de Grévy: Tirard, Rouvier, Freycinet. Ellos se encargaron de acabar con el «bulangismo» y sacar la moraleja.

Era ministro del Interior Constans, apreciado por su talento práctico y por su fertilidad de recursos. Los procesos por complot contra la seguridad del Estado formaban parte del plan de defensa de la República, pero muy bien podían reavivar la agitación. Constans tuvo la habilidad de prevenir cuidadosamente a Boulanger de su arresto inminente, y Boulanger se apresuró a pasar la frontera, declarando que no reconocía como jueces a sus adversarios. Rochefort y Dillon, acusados con él, salieron asimismo de Francia. El Tribunal Supremo los declaró rebeldes, y allí quedó roto el encanto. Boulanger, condenado en rebeldía a la deportación en una fortaleza, ya no era más que un conspirador huído. La sentencia fué dictada el 14 de agosto de 1889. A fines de julio, las elecciones cantonales habían marcado el declive del «partido nacional». Y a fines de septiembre fueron las elecciones legislativas. Por un exceso de precaución quedó suprimido uno de los derechos del sufragio universal más caros a los demócratas: el de las candidaturas múltiples que, en 1871, habían proclamado a Thiers diputado por veintiséis departamentos. Las elecciones se ajustaron a los cálculos de los republicanos del Gobierno. Boulanger salió diputado por el distrito XVIII de París, pero su condena anulaba el acta. Y en toda Francia triunfaron tan sólo treinta y ocho bulangistas. Y Ferry, el principal autor de la sacudida que acababa de sufrir la República, era derrotado.

Las mismas razones que habían hecho fracasar el 16 de mayo habían salvado ahora el régimen. El espectro de la guerra había producido el efec-

to previsto. El descontento era un río de doble corriente: la más violenta empujaba a la otra hacia el orden establecido y hacia los que no ofrecían alarma alguna. En 1885, la masa, tímida e indecisa, había votado a la derecha, llevados de la misma inquietud. Lo que entonces habían hecho las empresas coloniales y los excesos del radicalismo, ahora lo hacía a favor de los republicanos aquel general del desquite, y, sobre todo, la agitación bulangista de París.

La muerte de Boulanger, un suicidio sobre una tumba amada en el cementerio de su destierro, fué el epílogo. La canción de café concierto se trocaba en romanza. Aquel fervor parisién decayó. Pero también en la política es verdad lo de que nada se pierde. El «bulangismo» estaba vencido; pero, a lo largo de los acontecimientos, aparecía destinado a ejercer una influencia entonces todavía incalculable.

VII

Panamá

Uno a uno, los tutores del régimen habían ido desapareciendo de escena, sin que pereciese su tradición. Todavía se pudieron encontrar hombres que la recogieran.

El mal paso de que acababa de salir con vida la República, concentró la atención de su Consejo de vigilancia. Francia había estado envuelta en un movimiento y allí estaba removido una gran parte del cuerpo electoral. Todo ello tendría su porqué. Cuanto más probada la mediocridad del general que había excitado el fervor del pueblo, más probada la profunda raigambre del movimiento aquél, que llegó a tener caracteres de fiebre. Todo hacía temer que, de subsistir las causas, el acceso se reproduciría en cuanto las circunstancias fueran propicias. Y ya habían tenido bastante con la noche del 27 de enero.

Lejos de abandonarse a la satisfacción de la victoria, y quizá sin pararse tampoco a medir su ámbito, los republicanos capaces de reflexionar estaban preocupados por una observación: la tercera parte de los franceses se negaba a aceptar el régimen. Las elec-

ciones que acababan de poner término al «bulangismo» habían mandado todavía a la Cámara ciento setenta y dos diputados monárquicos, a los que faltaba añadir unos cuarenta de los «revisionistas». Este era el nombre que tomaban ahora los partidarios del general, apropiándose la idea de los radicales para darle el sentido de una apelación al pueblo. Frente a estos adversarios de las instituciones, la Cámara de 1889 contaba tan sólo con trescientos sesenta y seis republicanos de verdad, tres más que aquella de 1877, disuelta por Mac-Mahon. Esta comparación aritmética, sin duda, resultaba azarosa, y hacía pensar que en doce años había sido nulo el progreso. Por añadidura, la continuidad de una fuerte oposición de derecha, frente a una extensa izquierda demasiado agitada, provocaba la inestabilidad de los Gobiernos. En esas condiciones, el régimen parlamentario se ejercía con dificultad, y sólo daba lugar a más agudas críticas.

Y no era esto todo. El «bulangismo» había determinado una nueva estructura de los partidos conforme a las cuestiones esenciales. La derecha, hasta aquel momento, no era específicamente nacional. Los republicanos la acusaban incluso de subordinar los intereses de Francia a los de la Iglesia, y el ultramontanismo era uno de los reproches que había de sufrir. Honradamente patriota, no se distinguía por un celo particular respecto de las cosas militares en una época en que nadie escatimaba los créditos, en que los gambettistas eran los más asiduos y fervientes en la Comisión del Ejército. Aunque de manera poco visible todavía, la alianza de la derecha con los bulangistas había mudado posiciones. Ahora los republicanos recelaban de los hombres de sable y charreteras, y revivían los rencores del 2 de diciembre con este odio al militarismo, que muchos de ellos profesaban ya bajo el Imperio; demás de que no habían combatido ellos en vano al hombre y a la idea del desquite con toda clase de argumentos, incluso el del ridículo. De ahí a denigrar el patriotismo no había gran trecho; y mientras, los monárquicos pasábanse al lado de la bandera cuyo color impidió un día la restauración. Día vendría en que la derecha sería tachada de chauvinismo, cosa que los ratificadores de 1871 no hubieran podido imaginar. En el ínterin, había sus temores de que el sentimiento nacional, después de haber levantado y consagrado a Boulanger, se convirtiera en la corriente restauradora de la Monarquía. Era incontestable que la República se había librado del «bulangismo», diciendo que exponía al país a la guerra mientras que ella garantizaba la paz. Bien se había visto que el patriotismo irritado tenía más fuerza que todos los resortes electorales.

En el mes de febrero de 1890, un incidente puso de manifiesto el cambio que se había producido. El joven duque de Orleans, hijo del conde de París, logra entrar en Francia sin ser reconocido; se presenta en la oficina de reclutamiento y pide que se le sortee con los de su quinta. He ahí una manera original e intrépida de traducir la evolución de la derecha. Al cabo, ¿quién había hecho la ley que desterraba a los Príncipes y los condenaba a la incapacidad política? Todos los franceses estaban sometidos a la servidumbre militar, menos dos familias. Pues

bien; el que podía ser el heredero del Trono renunciaba a una excepción que más de uno habría envidiado. El rebelde, el desertor tenían derecho a decir: «No todos podemos ser descendientes de una familia que haya reinado en Francia...» El duque de Orleáns planteaba un caso peliagudo.

Constans, el hombre hábil, hubiera querido liquidar rápidamente el asunto, y que el descendiente de Enrique IV, deseoso de comer el rancho, después de una condena de pura forma, fuese devuelto a la frontera. Pero los otros ministros no compartieron su parecer, y menos aún que ellos el Presidente Carnot, quien pronunció esta frase extraña: que él no toleraba que se cazara sobre sus tierras, como si hubiera reinado por derecho de herencia. Sin embargo, el presunto soldado delincuente fué indultado después de algunos meses de prisión. No había parecido oportuno el castigar duramente a quien quería ser soldado, cuando el que desertaba lo conducían entre dos gendarmes. En definitiva, un anhelo juvenil que confirmaba a las cabezas reflexivas del partido republicano en su idea de que no era bueno descuidar las exigencias del patriotismo ni abandonar a los adversarios del régimen la defensa de la idea nacional.

Las amenazas de Alemania habían engendrado el «bulangismo»; el análisis más somero no deja lugar a dudas, como también era incuestionable el verdadero sentido de aquella apelación al desquite, un grito, al cabo, de la ansiedad. Lo que aparecía como bravata no era sino una forma de la alarma pública. Boulanger había hecho algo más que caracolear sobre su caballo blanco, pintar de tres colores las garitas y, como

decía Barrés, «levantar el airón del soldado»; su verdadero título de popularidad eran la melinita y el fusil Lebel, algo que respondía a la necesidad de que el país se supiera guardado y la nación defendida.

El aislamiento de Francia agudizaba esta inquietud y este deseo de protección. Las empresas de Ferry habían irritado por el temor de que, después de distraer nuestras fuerzas aún nos crearían nuevos enemigos. No hacía mucho tiempo que Clemenceau, para que se renunciara a intervenir en Egipto, había alegado el peligro de un conflicto en Oriente, que dejaría a Francia a la discreción de Alemania. Túnez nos enfrentaba con Italia, y las otras conquistas le hacían sombra a Inglaterra. El torpe estado de las relaciones exteriores aparecía aún en los orígenes del «bulangismo». Francia no contaba con mayor número de amigos que en 1870, cuando Thiers recorría Europa y llamaba en vano a las puertas de las Cancillerías. En Alemania, el advenimiento de un joven Emperador ansioso de destacar, sin que ni él ni nadie supieran cómo, aumentaba el vértigo. De ahí la conclusión de que para apaciguar los espíritus y poner a la República al abrigo del cesarismo, había que reforzar el Ejército, asegurar la defensa nacional y, en cuanto fuera posible, disipar mediante alianzas la angustia de aquella soledad.

Lo peor para el régimen hubiera sido que nadie se hubiera dado cuenta de la situación ni hubiera hecho por salvarla. Dos cosas se hicieron: lo primero, ocuparse del Ejército, con cierta ostentación. Y no es que las Cámaras, desde la de 1871, pusieran mala voluntad en este sentido, sino que les faltaba compe-

tencia. Precisaba un organizador, y fué hallado: Freycinet. Colaborador de Gambetta, había visto de cerca la leva en masa. Sin que ello fuera abjurar de todas sus ilusiones, él no creía que la defensa nacional pudiera improvisarse, y se consagró a prepararla con el concurso de los jefes militares. Hubo la suficiente prudencia para darle tiempo a su labor; por feliz excepción, basada en una necesidad política bien comprendida, Freycinet permaneció durante casi cinco años en el ministerio de la Guerra. Cuando salió, la ley que fijaba en los cuarenta y cinco años la edad límite en que podían ser llamados a filas los franceses estaba en vigor, las formaciones de reserva estaban prestas, las tropas provistas de fusiles Lebel, los arsenales repletos, el alto mando organizado. Esto junto con otras medidas y reformas que afirmaban la intención de poner a Francia en disposición de hacer frente a Alemania. Sin duda, la obra tenía sus defectos, los mismos defectos que aquel plan de obras públicas en el que, diez años antes, Freycinet había sacrificado tanto al efectismo de los números. Tampoco la nueva organización del Ejército descuidaba este efectismo, que contribuía a dar una impresión general que era la exacta. La República había concedido, pues, a los asuntos militares el interés que le había hecho confiarse a Boulanger.

Hizo más todavía. Dispuso un calmante para las ansias del país. La Liga de Patriotas pedía la alianza con Rusia. El apóstol de la idea era Pablo Déroulède. Ya hacía dos años que el Gobierno ruso buscaba el contacto, y se apresuraron en cierto modo a responderle. Aprovecharon algunas ocasiones de mostrarse

gratos al Zar. Durante aquellas maniobras, que eran una demostración de fuerza militar, Freycinet, presidente del Consejo y ministro de la Guerra, anunció, mediante una alusión comprendida inmediatamente, que Francia, por fin, tenía una amistad. El Acuerdo del 27 de agosto, que precedió a la alianza formal, había concertado la *entente* con el Emperador Alejandro, cosa ya presentida desde la visita de una escuadra francesa a Cronstadt. Francia ya no estaba sola. El 10 de septiembre de 1891, en el banquete en Vaudeuvre, ante los agregados militares extranjeros, Freycinet pronunció estas palabras: «Situación nueva». El Ejército, asociado al éxito de la diplomacia, recibía felicitaciones. El generalísimo Saussier daba las gracias al Gobierno de la República. ¿Qué podía pedir más el patriotismo? Algunos días más tarde, el Presidente Carnot pasaba una de esas revistas de gran espectáculo en que no se escatima nada, y hasta con los consiguientes vítores al «organizador de la victoria». París ya no tenía necesidad de aclamar al general del alazán. Sin él, lejos de él, el «bulangismo» triunfaba en lo que tenía de nacional. No cabía decir que había sido un movimiento vano. Un ejército «perfeccionado y fortificado», una alianza con un Emperador tenido por poderoso y un pueblo cuyo número daba la ilusión de una fuerza invencible: he ahí sus resultados. Hubiérase dicho que ya a su jefe no le quedaba sino el envolverse en este *sic vos non vobis*... Trece días después de la revista de Vitry-le-François, resonaban las descargas de Ixelles.

Y a la hora en que en Vandeuvre se proclamaba la *nueva situación,* Julio Grévy acababa de morir. Su

segunda muerte. Olvidábase ahora el lamentable final de su presidencia, el escándalo, la expulsión, para acordarse de los servicios que había prestado. Después de Thiers, él era quien, por su «práctica», había *aclimitado* el régimen republicano. Entonces fué el recordar «esta dirección que él imprimía en torno suyo, sin que, por así decirlo, se advirtiera». Este era el modelo para aquella conducta del justo medio que él había trazado.

Sadi Carnot entraba perfectamente en la idea de una República correcta, administrativa y politécnica, como lo era él mismo. Para los Carnot, hacía casi cien años que habían pasado ya las revoluciones. Cuando, en el mes de marzo de 1890, encargaba a Freycinet del Gobierno, era la voz de Grévy la que parecía oírse; el programa de ese Gobierno anunciaba todavía una República «amplia, abierta, tolerante y pacífica». Aquello era así como la tierra prometida. Mezclando el presente y el futuro, Freycinet decía: «Va a ser el estado definitivo y el término deseado de todas estas luchas».

El análisis de la situación daba siempre el mismo resultado: ¿cómo mantener la vía media del oportunismo entre una derecha irreconciliable y una extrema izquierda exigente y sobreexcitada por la aparición del socialismo? Sin los republicanos más avanzados, nada podía hacerse. Y el problema seguía lo mismo: si se les concedía demasiado, disgustábase al país, que quería un régimen tranquilo; si se les rehusaba todo, perdíase el apoyo de los verdaderos republicanos, republicanos de acción sin los cuales la República dejaba de existir. Hablando del

grupo de extrema izquierda, Freycinet definía el método: «De continuo estábamos bajo la penosa obligación de encauzarlo sin ceder a su empuje». Y estos ejercicios de equilibrio terminaban siempre de la misma manera: la derecha, árbitro de la situación, se coaligaba por un día con los radicales y derribaban los Ministerios oportunistas. ¿Conclusión? La que planteaba Freycinet como un problema de mecánica: «La estabilidad no podía ser más que el fruto de la eliminación progresiva de los monárquicos del Parlamento».

Esta eliminación, ¿se haría ella sola con el tiempo y con el cambio de ideas? No era probable, y, en todo caso, el proceso podía ser lento. Puesto que la derecha no desaparecía, lo obvio era dividirla y disolverla, separando el elemento monárquico del religioso. Tampoco era esta la primera vez que se pensaba en atraer a los católicos. En 1871, como en 1848, ya había habido católicos republicanos. La dificultad estribaba en la cuestión religiosa en sí, y no sólo del lado clerical, sino del anticlerical. Había que encauzar también a la misma Iglesia, «sin ceder a ella», y, sobre todo, sin que los radicales pudieran acusar de traición. Después de la prueba del «bulangismo», se imponía la operación del *ralliement,* pero era extremadamente delicada.

Como en el Acuerdo con Rusia, la noticia surgió de repente. El 12 de noviembre de 1890, el cardenal Lavigerie pronunciaba en Argel un discurso en el que recomendaba «la adhesión sin reservas mentales a la forma de gobierno». No era verosímil que el cardenal emplease tales términos sin el permiso de

una autoridad superior a la suya, ni que León XIII prescribiera a los católicos franceses la aceptación del régimen republicano sin ciertas conversaciones previas con el Gobierno de la República. En efecto; el cardenal Lavigerie, encargado de la gestión por el Papa, se había entrevistado con Carnot y con los principales ministros, manteniendo, además, correspondencia con Constans y dándole cuenta de las disposiciones de la Santa Sede. Desde Roma escribía él que allí reconocían «la necesidad de una adhesión explícita del Episcopado francés a la forma republicana»; pero pedían en compensación que se impidiera «toda manifestación irritante para la Iglesia». Jacobo Piou, uno de los más destacados entre los *incorporados,* celebra los buenos procedimientos empleados por León XIII con el Gobierno de la República durante el período precedente al discurso de Argel, y destaca los servicios diplomáticos que el Pontífice se apresuró a prestar al acercamiento entre Francia y Rusia, añadiendo que las relaciones del Presidente del Consejo con el Nuncio «se hicieron frecuentes» y que Freycinet observó frente al Papa una actitud «llena de deferencia». Según el parecer de León XIII, la vía constitucional era la única «que podía librar a la Iglesia de muy duras pruebas». No parece temerario encontrar en esta frase el mismo acento de las palabras que debían pronunciar hombres tan diestros y tan agudos como Freycinet y Constans.

De cualquier lado que partiera la iniciativa, ello fué que los republicanos comenzaron desde ese momento a pensar en atraerse a un sector de los conservadores. Una política semejante contaba con mayores dificultades en la Cámara que en el Vaticano. El partido radical continuaba con sus suspicacias y exigencias, propugnando medidas de rigor e intimidación a todo Ministerio que pareciese contemporizar con el clericalismo. Instado a «continuar la lucha del Poder civil, con el Poder clerical», Freycinet hubo de ceder, y fué, incluso, derribado por una coalición de moderados y de la derecha, por haber propuesto, a instigación de los radicales, una nueva ley contra las congregaciones. De donde se infería que para llegar a practicar una verdadera política de acercamiento con los católicos y con la derecha en general, habría de imponerse la necesidad.

Los atentados anarquistas de 1892 fueron como la advertencia de que el estado moral del país no era bueno. Ravachol, que hacía saltar las casas con dinamita, convirtióse en el Atila, en el azote y espanto de la sociedad. Este revolucionario salvaje subió a la guillotina cantando que para ser feliz había que colgar a los propietarios. No era esto lo que habían querido. Los primeros momentos fueron de tal emoción, que el presidente del Consejo, entonces Emilio Loubet, se abatió hasta el punto de decir: «Estamos recogiendo el fruto de siembras perniciosas; hace ya algunos años que todo se ha dejado decir y todo se ha dejado hacer». Pero ejercieron su rigor contra la anarquía material solamente.

El mismo presidente del Consejo no supo ejercerlo contra otro mal, y hasta se esforzaba por disimularlo. Tras el escándalo de Wilson, todos los días amenazaba un escándalo nuevo. La venalidad había cundido. El Parlamento estaba ya infectado. Demasiado

confirmadas aparecían ya aquellas palabras de Renán, que la política habíase convertido en el oficio de las gentes sin arraigo, gentes de tercer orden. Tan próximo aún el «bulangismo», cuando implacables adversarios habían aparecido en escena en expiación de tantas taras y tantos vicios, era menester mayor ánimo y, quizá, mayor fuerza para destacar la verdad, que la fuerza y ánimo que acusaban los Gobiernos. Confióse en llevarlo secreto. Las tentativas de asfixia, procedentes del temor a denigrar el régimen y descubrir a ciertos partidarios y castigar a los amigos, temor que, en sí, era ya un signo de debilidad, hicieron que el escándalo de Panamá, en vez de estallar con furia, actuara como un veneno lento. Ya no era tanto el interés de salvar a los camaradas, sentimiento que en política suele ser efímero, como el temor a una luz capaz de descubrir todo el destrozo de la corrupción. Nada querían ya saber, porque sabían ya demasiado y temían revelar más todavía.

El *caso* de Panamá reunía todas las condiciones propias para inflamar la cólera. Para que se convirtiera en un *asunto* de Estado, tratado de ocultar en seguida por razones de Estado, había sido menester una circunstancia dispuesta por la ley misma como una tentación para el legislador.

Pocos hombres en Francia más gloriosos que Fernando de Lesseps, perforador de istmos. Cristóbal Colón había descubierto un mundo; Lesseps había cambiado la configuración de la Tierra. Y, como el otro, enriquecía a quienes creían en su palabra y en su estrella. Hacía diez años que el canal de Suez estaba abierto a la navegación. Después de algunos de incertidumbre, el creador había acabado por vencer todos los obstáculos, y la empresa era próspera. Cuando fundó una nueva sociedad para el canal de Panamá, excitó a un tiempo la imaginación y el espíritu de lucro. Vióse entonces el poder ilusionante del genio. Pero Lesseps había perdido de vista las dificultades y los números; era de aquellos para quienes el dinero es un medio y no un fin. Tenía fe en su idea y se dirigió al ahorro, para quien el dinero sí es una realidad; sus promesas eran sinceras, pero, en apariencia al menos, quiméricas. A sus ojos, lo esencial era la obra que iba a realizar.

Allí no había por dónde quebrantar al Estado: la sociedad de Panamá era una empresa privada; en caso de quiebra, sólo sus administradores eran los responsables ante la justicia si quedaba probada su falta de probidad. Pero los empréstitos se sucedían, aumentaban sin cesar los dispendios, y para encontrar capitales la sociedad recurrió a un medio que ya había empleado la Compañía del Canal de Suez: la emisión de un empréstito con lotes. Y he ahí cómo el Parlamento se halló mezclado en el asunto: la ley pedía que, por el interés general y para proteger el ahorro, este género de empréstito necesitara la autorización de las Cámaras. El ahorro tenía aún que temer de sus protectores.

Lo grave del caso era que la Cámara, al principio, no era propicia al empréstito. El crédito de la Compañía se agotaba con sus recursos. La autorización del Parlamento equivalía a recomendar la empresa. Y el Parlamento dudaba entre el temor de provocar la ruina de una gran Empresa francesa, con lo que ani-

quilaba los enormes capitales ya desembolsados, y la responsabilidad de mover a nuevos suscriptores a invertir su dinero. Aquí vino la intervención de los agentes corruptores, el pago de informes favorables, la compra de votos, con lo que el empréstito fué autorizado y se hizo la emisión. Junio de 1888. Siete meses más tarde, la Compañía debía presentar su balance: en total, mil cuatrocientos millones perdidos aportados por ochocientos cincuenta mil suscriptores.

Es decir, ochocientos cincuenta mil descontentos decididos a todo, y coincidiendo aquellos sucesos con la fiebre más aguda del «bulangismo»: la suspensión de pagos del Panamá fué muy poco posterior a la elección de Boulanger en París. ¡Qué exceso de efervescencia, si llega a estallar entonces el escándalo! Pero pudieron prolongar el silencio: durante cuatro años, ejerciendo su presión sobre la Justicia, los gobiernos paralizaron los procesos que demandaban los accionistas lesionados. Más tarde, algunos ministros quedarían convictos de haberse beneficiado también ellos con el dinero de la Compañía arruinada. Los otros sabían o sospechaban que eran numerosos los parlamentarios comprometidos. El día en que el caso se ventilara ante los tribunales, era fatal que aparecerían en toda su desnudez y extensión los hechos, y el escándalo era tanto más temible cuanto que, salvo rarísimas excepciones, los vendidos pertenecían al partido republicano. En la derecha, a pesar de todas las pesquisas, sólo podía inculparse a Dugué de la Fauconnerie,y, más tarde, entre los amigos de Boulanger, a Naquet. Era menester darse cuenta: los culpables y los sospechosos hallábanse entre los oportu-

nistas y los radicales. En el momento de auge del «bulangismo», la ocasión era magnífica para presentar el *caso* al descubierto y atacar el sistema y el personal parlamentario; la gran ocasión, cuando el «bulangismo» era derrotado en las elecciones de 1889, para una venganza fulminante, revelando la vergüenza del Parlamento. La táctica fué dejar que corriese la prescripción hasta 1893, y el pretexto para distraer los procesos, el no deshonrar a Fernando de Lesseps, una de las glorias de Francia. He ahí los elementos de un drama cuyos últimos hilos jamás han podido descubrirse.

Sí sabemos lo bastante para comprender la perseverancia con que los republicanos de gobierno rechazaban la claridad. En el comienzo se habían encontrado con un guardasellos, Ricard, hombre presuntuoso y amigo del reclamo, empeñado en seguir los procesos sin reservas; se desembarazaron de él. Algunos radicales tomaron también el partido de la virtud; logróse calmar sus ardores. Uno tras otro, fueron cuatro los Gobiernos dedicados a ahogar el asunto de Panamá, sabedores desde el principio de que el Parlamento estaba muy comprometido, y que pocos hombres escaparían. Casi ninguno.

Se ha calculado que, de los mil cuatrocientos millones suscritos por el ahorro, apenas la mitad se había gastado en trabajos para el canal; el resto había sido para gastos de publicidad, corrupción y *chantages*. Un *Pactolo* había corrido, y, poco a poco, todos habían ido bebiendo. Por fin, fueron instruídos los procesos contra Lesseps y los administradores; el Gobierno, impelido por la oposición, no podía ya de-

morarlos. La emoción fué enorme cuando, el 20 de noviembre de 1892, cundió la noticia de la muerte del banquero Jacobo de Reinach, depositario de los fondos de publicidad del Panamá, y el que, sin duda, compraba los votos. Si se trataba de un suicidio, era bien claro que el gran corruptor se acusaba, como era claro también que su muerte desembarazaba a los sospechosos. Gobierno, magistratura, policía, todos se concertaban para aquello pasara como una muerte natural. Pero era exigir ya demasiado de la credulidad pública. La exhumación del barón, demandada para disipar el misterio, todavía fué retardada por la Cámara. Aunque se habían violado las normas judiciales para salvar al Parlamento, el centro y la izquierda comenzaban a comprender que una protección demasiado visible, y aceptada con demasiada complacencia, les acusaba de infamia. No solamente había desaparecido Reinach, sino que se había llevado a la tumba sus secretos. Sus papeles no habían sido hallados, y sus allegados, sobre todo su yerno y sobrino José, activo policía encumbrado por el oportunismo, habían tenido tiempo para destruirlos. El barón sacado de su sudario, enterradores y legistas inclinados sobre aquellos restos; tal fué la escena del cementerio, un drama clandestino y pútrido. El cadáver permaneció mudo.

En este silencio, cargado de sospechas, un hombre tuvo la audacia de levantar su voz. Julio Delahaye, subido a la tribuna, produjo el efecto de un rayo al afirmar que más de cien parlamentarios se habían vendido. Pruebas, él no las poseía; así lo confesó más tarde. Pero la Compañía del Panamá

le había dicho que no tuviese miedo a actuar de acusador. Sobre todo, le empujaba su instinto; el odio no siempre es ciego. Aquel católico saboreaba su venganza, como la estaban ejerciendo los fieles de Boulanger. Muchas cosas se pagaron aquel día. Delahaye no estaba en condiciones de citar un solo nombre; pero su denuncia determinó la encuesta, porque los culpables temían acusarse al rechazarla, y a los otros importábales manifestar su inocencia.

Brisson, que gozaba de una reputación de integérrimo, presidió la Comisión de encuesta. Godofredo Cavaignac intervino con la impetuosidad republicana de los días heroicos. Tras laboriosos esfuerzos, fueron sacrificados algunos de los inculpados para apaciguar a la prensa y al pueblo. Se intentó cuanto fué posible para salvar a los otros. Dos de los sobornadores, Cornelio Herz y Artón, estaban cargados de no menos secretos que Reinach: ¡qué temblor doquier si ellos llegaban a hablar! Pues bien; el primero, refugiado en Inglaterra, allí murió después de lentos y vanos procedimientos de extradición; la búsqueda del segundo a través de Europa, fué una comedia de los policías en connivencia con el fugitivo. Simulóse hasta el fin la investigación de la verdad. La verdad que no querían saber.

Y no querían porque ello equivalía a descubrir algo más que quiénes habían vendido su voto y recibido en su propia mano el dinero del Panamá. Al fin, fué condenado uno solo de los diputados, Baïhaut, el único que, por inconcebible torpeza, confesó. Algunos habían recibido sumas para su empleo: Rouvier, Alberto Grévy, hermano de Julio (la fami-

lia continuaba con su excesivo amor al dinero), Arène y otros, colocados a mayor o menor altura. Luego los que habían recibido subvenciones indirectas a títulos diversos: tal el caso de Clemenceau, íntimo de Cornelio Herz, y que no pudo disculparse de haber mediado por cuenta de Reinach cerca del chantajista. Clemenceau estaba obligado por los fondos librados a favor de su periódico *La Justicia*. Los había, en fin, que habían participado con un provecho menos personal todavía, pero que, igualmente, habían realizado su chantaje con la Compañía: éstos eran los presidentes del Consejo, Floquet y el mismo Freycinet. Notorio como era que la Compañía contaba con un enorme presupuesto de publicidad, los jefes del Gobierno habían llamado a su caja de una manera que no permitía el negarse, bien para alimentar la prensa republicana, bien para pagar a periódicos extranjeros, bien para sufragar gastos electorales. En su defensa, Rouvier osó decir a sus amigos que le abandonaban: «Si yo no hubiera recurrido a los medios que se me reprochan, quizá no estuvierais vosotros en esos bancos.»

Oportunistas y radicales, unos y otros venían a contar con el mismo número de acusados y sospechosos. A cada paso surgían listas nuevas. Lo que los Gobiernos temían saber era tal vez mucho más de lo que sabían. Unos tras otros, todos intervinieron para desviar la acción de la justicia, con la esperanza de evitar el descalabro que amenazaba al régimen por entero. Aquello era un atentado a la moralidad, más grave aún que los mismos hechos de la corrupción.

Los encubridores y protectores de los vendidos fueron, a su vez, desprestigiados.

A juzgar por el resultado, no cabe decir que hayan sido vanos sus esfuerzos. Por mucho que nos asquee, es preciso convenir que este disimulo prolongado, estas intervenciones en los procesos judiciales, estas maniobras y cohechos desviaron la gran tempestad que amenazaba. Los Gobiernos «panamistas» miraban, sin duda, a algunos de los principios sobre los que descansa la sociedad y el Estado. La magistratura se envilecía en el servilismo. Se envilecían las costumbres políticas con la impunidad asegurada a los culpables. Se había rechazado toda depuración. Lo cual vino también a pagarse de otro modo. Lo cierto es que se descartó el peligro temido, y que el caso Panamá, apasionante y dramático en la Cámara y en los Tribunales, no agitó de veras la calle. «Panamista» era una injuria más cruel que «tonkinés», y, sin embargo, el escándalo de Panamá no excitó tan ardiente indignación como el de Wilson. Y es que aquellas sabias lentitudes puestas en los procesos, aquel empleo de artificios procesales, la absolución de los acusados que no habían podido sustraerse al enjuiciamiento por un «no ha lugar» todas aquellas habilidades de un perpetuo aplazamiento para *mañana,* habían impedido una explosión de la opinión pública. De cuando en cuando se exponían algunas víctimas, para salvarlas más tarde. Durante cierto tiempo, Loubet, Ribot, Freycinet, los principales autores de la obra, sufrieron en su reputación y en su carrera los efectos. Pero veían salvado lo esen-

cial. Lejos de derribar el régimen, Panamá no le causó en la apariencia daño alguno.

Bien es cierto que la indignidad no llegaba hasta las alturas como en tiempos de Grévy. No atentaba a la Presidencia. Incólume en su probidad, libre de toda sospecha, Sadi Carnot guardaba, al menos, incontaminado el Elíseo. A lo más, podría reprochársele de absolver a los ministros protectores del fraude. Verdad también que la cólera y el desprecio no se encontraban, como en tiempos de Ferry, con otro sentimiento: el «bulangismo» se había formado en la confluencia de la honradez indignada y del patriotismo inquieto. Ahora las circunstancias eran otras: el patriotismo estaba satisfecho con la alianza rusa, en nombre de esta alianza sagrada el Gobierno paralizaba las cuestiones, intimidaba en las encuestas, lograba el silencio dando a entender que el asunto de Panamá envolvía secretos diplomáticos que, por el bien de Francia, no debían ser conocidos ni levantados ciertos velos. Así resultaba útil el rumor que el embajador de Rusia, Mohrenheim, era uno de los X... en la lista de Reinach.

No se produjeron las violencias, pero los republicanos no por ello quedaron menos afectados y encogidos. Muchos de ellos habían quedado anulados, los unos para siempre, los otros para largo tiempo. El régimen, por su propia conservación, necesitaba demostrar su capacidad para producir hombres nuevos, y la consecuencia directa del Panamá fué un rejuvenecimiento del personal. El caso en sí jamás fué ni completamente acabado ni dilucidado tampoco. La Justicia siguió actuando durante algunos años toda-

vía, y durante meses simularon la búsqueda de Artón. El 21 de mayo de 1893 el proceso había terminado en la Audiencia con la absolución de todos los acusados, a excepción de Carlos de Lesseps, retenido como principal agente, Baïhaut, testaferro que había confesado, y el comparsa Blondin. Estaba salvado el momento más difícil, y los consagrados a la tarea de ahogar el asunto podían ya retirarse. Nueve días después del veredicto era derribado el ministerio Ribot. Era menester gente nueva, intacta, y fué encargado del Gobierno Carlos Dupuy, figura que el escándalo había respetado. Rodeóse de colaboradores incontaminados como él, que jamás habían participado del Poder casi ninguno. Entre ellos estaba alguien llamado a ocupar un puesto relevante en la historia de la República: se llamaba Raimundo Poincaré. El caso Panamá había servido para promover una nueva generación.

Esto no era todo. Había que saber en qué sentido se iba a gobernar. Carlos Dupuy era largo de ambición y corto de ideas. Al principio se mantuvo en la línea ordinaria de los Gobiernos de centro izquierda, tomando posiciones contra la derecha, y excluyendo incluso a los incorporados a la República. Lo cual era un error táctico cuando faltaban pocos meses para las elecciones, y hubo quien se lo hizo advertir; Constans, dotado de espíritu político y gobernante nato fué el primero que, en Toulouse, osó hablar de «paz religiosa», de «reconciliación en la República y por la República». Constans se ofrecía a reunir las fuerzas moderadas. Y entretanto, dos jefes radicales, Goblet y Lockroy, recomendaban a

su partido la alianza con los socialistas, que comenzaban a ganar terreno. Entreveíanse los bloques y los «cartels» futuros, Goblet y Lockroy eran los precursores; Constans también.

Carlos Dupuy había escuchado el discurso de Tolosa, y su espíritu se abrió. Constans, inteligente y hábil, le pareció un rival peligroso. Un mes más tarde se encontró con un París en efervescencia, tumultos en el Barrio Latino, cierre de la Bolsa de Trabajo, que hizo temer una difusión del desorden. Por miedo a que otros actuaran por él, dice amargamente Brisson, Dupuy mostró su autoridad. En la Cámara fué la derecha la que aprobó aquellas medidas, y él aceptó su ayuda, a pesar de la protesta de su colaborador Peytral. He ahí el prólogo del período que se iniciaba, una consigna electoral tan nueva como los hombres que acababan de ser llamados.

En ciertos aspectos, las elecciones de agosto-septiembre de 1893 ofrecieron sus sorpresas. Dijérase que aquel formidable caso de corrupción había pasado por el país sin dejar huellas. Panamistas convictos eran reelegidos; Daniel Wilson, como lavado por el pecado de los otros, volvía a su escaño, mientras Julio Delahaye, el acusador, perdía el suyo; Clemenceau era lanzado de la Cámara, denigrado por su departamento, el Var republicano. Los fieles a Boulanger le acentuaban su resentimiento, y, por su relación con Cornelio Herz, lo presentaban como a sueldo del extranjero, como un agente de Inglaterra. Ni la falsedad probada de ciertos documentos acusadores presentados contra él logró vencer la impopularidad; nadie salía del Panamá más

desprestigiado que Clemenceau. El hombre temido poco antes por «su espada, su pistola y su lengua», estaba caído. Para volver a alzarse le había de ser necesaria una revolución. Con él perdía el radicalismo a su animador; para eso había servido el panamismo, para reducir por mucho tiempo a la impotencia al partido radical o, mejor dicho, para hacerle mudar de gesto.

Estas elecciones ofrecían todavía un carácter singular: la enorme masa de abstenciones. Los votantes apenas habían pasado de la mitad de los electores, como si el pueblo no hubiera sabido en qué sentido decidir su soberanía. A nadie aprovechaba en sí aquella desgana. En fin, desdichada para la Iglesia, que no recibía las satisfacciones esperadas, la operación del «ralliement» era un éxito para la República, dividía a los conservadores sin atraerles un voto. Alberto de Mun, Jacobo Piou, los más notables entre los nuevos adictos, ni siquiera habían podido volver a su escaño. Por su parte, los monárquicos, mal pagados en su larga consagración a la causa religiosa, habían sufrido graves defecciones, lo cual no impedía que siguiesen con su reputación de clericales. Ni para ellos ni para los revisionistas servía de nada la idea nacional cuando la República daba señales de su celo militar y la alianza rusa manifestábase en himnos y cánticos. Lo que Freycinet había buscado estaba logrado ya. La República podía licenciar a su servidor, que todavía se había consagrado a ella dejando que lo del Panamá salpicara su blancura. Aquellas salpicaduras no serían inútiles.

VIII

A la vista del puerto

El «final deseado» parecía ya un hecho. En la Cámara había más de trescientos republicanos gubernamentales que constituían de por sí solos mayoría. La derecha entera, incluso los nuevos adictos al régimen, tratados irónicamente de resignados, no eran más de un centenar de diputados. La oposición de los monárquicos cesaba de ser un obstáculo serio al juego del parlamentarismo, y ni la derecha disgregada ni Clemenceau, víctima del ostracismo, podían encontrarse ya en sus coaliciones. Quedaba libre el puesto para una República moderada en todo, una República sin doctrina, administrativa, como la Monarquía de Julio y el Segundo Imperio. Este era el puerto. No restaba, al parecer, sino mecerse en aquellas aguas.

El mismo asunto del Panamá había producido un efecto sedante. Los partidos aparecían decapitados, lo que, en gran parte, contribuía al encalmamiento. Entre los antiguos jefes oportunistas, los que habían vuelto, ya no osaban alzar la voz pensando en sus taras, graves o leves. Sin duda, la autoridad de los

gobiernos moderados había sufrido cierta mengua. Y hasta el radicalismo, privado él también, y por la misma causa, de sus cabezas principales y compuesto de oscuros provincianos, había perdido su audacia. La oposición de extrema izquierda pasaba a los socialistas, todavía pocos, a pesar de su triunfo, para ejercer una influencia que resultase peligrosa, pero bastantes para que el terror que sembraban y la reprobación de su sistema constituyesen un medio de Gobierno.

El atractivo de Rusia favorecía la tarea. El 17 de octubre de 1893 París recibió al almirante Avellan con un entusiasmo delirante. La muchedumbre que lo aclamaba era la misma que había formado el cortejo de Boulanger. Si era posible sustituir uno por otro dos sentimientos, he allí el gran ejemplo. Aquello seguía significando todavía un puerto de salvación.

Con la reunión de la Cámara mostróse un signo de los tiempos: fué elegido presidente Casimiro Périer, gran figura del orleanismo, incorporado a la República. Nieto del ministro de Luis Felipe, que, siendo legitimista, había aceptado la Monarquía de Julio para servir al orden mediante la «resistencia»; Casimiro Périer era el representante de esa alta burguesía que significaba la fianza del régimen a los ojos de la otra burguesía, el representante de esa aristocracia de los Consejos de administración, en los que encarna el respeto y la confianza de los portadores de valores mobiliarios. Casimiro Périer era, pues, lo que se dice una buena firma, inaccesible al cheque corruptor. Había habido ya una República de gentes

bien. Con Casimiro Périer surgía la República de gentes *muy bien*.

Bajo la mirada de este gran señor, Carlos Dupuy, respirando el aire de los tiempos, leyó un programa de Gobierno de una moderación exquisita: reprobaba la revisión constitucional, la separación de la Iglesia y del Estado, el impuesto sobre la renta, el colectivismo, y contentábase con algunas cláusulas formales sobre el laicismo. Era, en fin, el perfecto republicano conservador, según el gusto de Julio Grévy. «Lo que vosotros prentendéis es detener la marcha de la historia», le apostrofó Jaurés, recién convertido al socialismo y que se preparaba para convertirse también en el orador del partido. Dupuy no detenía nada; era el continuador de un método que iba cortando con treguas y modorras la marcha de la democracia.

Aquel día Jaurés pronunció otra palabra, que recordaba de un modo extraño la profecía de los católicos vencidos por Julio Ferry: «Vosotros, decía a los republicanos del justo medio, habéis venido a interrumpir la vieja cantilena que mecía y adormecía la miseria humana, y he ahí que la miseria humana se ha despertado gritando... Y hoy aparecéis espantados ante vuestra propia obra.» No estaba él seguro tampoco de que el centro izquierda estuviera bajo tal espanto; él creía, como Grévy, que las condiciones sociales de Francia eran indestructibles, y quince años de Gobierno de los republicanos fomentaban esta confianza, puesto que se concretaban, al fin, en una Cámara tan templada.

Dupuy decía con jovialidad que él sabía cam-

biar de hombro su fusil. Sólo que, en su conservadurismo de ahora, había olvidado que tenía tres radicales en su ministerio. Estos presentaron su dimisión, cayó el Gabinete, y Casimiro Périer fué encargado de formar otro. Aquello iba de bueno en mejor. Los nuevos ministros se llamaban el general Mercier, Jonnart, un gran burgués, y Spuller, fiel a la memoria de Gambetta, pero no a la antigua consigna de su jefe, puesto que se había ya medio pasado al clericalismo, es decir, al «enemigo».

Todo marchaba según los deseos de una sociedad para quien la República, un régimen como otro cualquiera, no pasaba de ser la etiqueta de un Gobierno eternamente semejante a sí mismo. La aparición de los anarquistas sólo servía para afirmar el deseo de vivir y la voluntad de defenderse, por parte de una sociedad acomodada, en su apacible posesión. El día en que Vaillant lanzó una bomba en medio de la Cámara reunida, Carlos Dupuy, que la presidía, tuvo esta frase calificada de sublime: «Continúa la sesión». Y era verdad. Todo continuaba como desde aquel tiempo en que Thiers reprimía la Comuna. Vaillant y Emilio Henry fueron a la guillotina, y dejaron tras ellos unas leyes de represión.

El año 1894 fué el año en que la República conservadora se expandió. Los anarquistas se dedicaban a la «propaganda por la acción», y su efecto fué la propaganda contraria. Entreabrían un abismo de perdición, y hubo que buscar áncoras. Confusamente, vino el preguntarse si no se habría descuidado demasiado la cooperación de las fuerzas espirituales. Ya Carlos Dupuy había hablado de «paz religiosa».

Ahora el ministro de Instrucción pública, el propuesto para el gobierno de las almas, iba más lejos. Spuller era originario de Baden; ¡cuántas veces se le lanzó el reproche! De esa Alemania católica guardaba, quizá, como un recuerdo patrio, cierta ternura por la Iglesia. El 3 de marzo un diputado de la derecha se lamentaba de que un alcalde había prohibido los emblemas religiosos en los entierros. Spuller respondió que el Estado era laico, pero tolerante y conciliador; e incluso se atrevió a anunciar un «nuevo espíritu». La palabra recorrió toda Francia, indignando a los unos y esperanzando a los otros e hizo época. Entrevióse una era nueva, una República que ya no hacía la guerra a las creencias, que aceptaba a la Iglesia a su lado. El «nuevo espíritu» de Spuller era una réplica a la «vieja canción» de Jaurés, y parecía el triunfo de la política del «ralliement». ¡Cuánto trecho desde aquellos tiempos en que los crucifijos, arrancados de las escuelas, se los llevaban en carretas! Julio Ferry había muerto el año anterior, aislado de las viejas pasiones y apaciguado él mismo. ¿Quién sabe si él hubiera aceptado también el «nuevo espíritu»?

El conservadurismo había llegado a un extremo que, en ocasiones, la derecha lo juzgó excesivo. La frase de Spuller, a pesar de las imprecaciones de los viejos radicales, no derribó el ministerio. Fué Jonnart quien motivó la caída, porque, ministro de Obras públicas, negó a los ferroviarios del Estado el derecho a sindicarse. Presentóse en el orden del día la tesis contraria por parte de un monárquico, y el ministerio de Casimiro Périer quedó en minoría. El Pre-

sidente del Consejo abandonó el salón de sesiones, según la costumbre, pero «con un apresuramiento que todo el mundo advirtió». El Poder le tentaba, él se hurtaba al Poder, y seguía el Poder brindándole su acceso.

Tal era la penuria de hombres después de lo del Panamá, el gran devorador de republicanos, que Carlos Dupuy volvió todavía. Ninguno de los antiguos jefes estaba presentable: no tenían más remedio que rehacer en el silencio su virginidad. Los nuevos, los jóvenes, eran considerados poco maduros para el Gobierno. Una especie de razón de Estado, regla de prudencia muy saludable, prefería para la dirección del ministerio a personajes encanecidos en la cartera. Thiers y Grévy, los grandes tutores, ¿no habían aparecido cargados de años? Los riesgos del régimen popular eran así contenidos por la experiencia, la democracia reprimida por la gerontocracia.

La marcha ordinaria, en fin, continuaba en condiciones perfectamente confortables cuando, el 24 de junio de 1894, fué asesinado Sadi Carnot. Rompiendo con las costumbres sedentarias y con la parsimonia de Julio Grévy, que apenas salía de su palacio convertido en su Escorial, el Presidente gustaba de recorrer Francia, y, al mostrarse de esta suerte, daba cierta popularidad a la función y a la persona. Aquel día, en Lyon, fué apuñalado por el anarquista italiano Caserio, vengador de Vaillant. Y he aquí que, gritando «¡Viva la Revolución!», asesinaba Caserio al nieto de un célebre revolucionario regicida y miembro, en 1793, de aquel Comité de Salud pública, de donde partió la orden de destruir Lyon. Ningún ex-

ponente más claro que este de la diferencia de los tiempos y del cambio que con ellos había experimentado la República. Dos horas antes del crimen, Sadi Carnot traducía el nuevo espíritu al decir: «¡Ya no hay partidos!» Murió asistido con los auxilios de la Iglesia y con la bendición del Primado de las Galias; un Cardenal, en Notre-Dame, pronunció la oración fúnebre de un mártir del orden.

Sadi Carnot había sido elegido por su nombre, por su antepasado. Por otro antepasado, por un nombre que había sido el símbolo de la «resistencia», fué elegido luego Casimiro Périer. Ninguna designación más acorde con las nuevas maneras: puesto que se andaba en una especie de orleanismo, era natural que ocupara la magistratura suprema el descendiente de un ministro de Luis Felipe. Así, a veinte años de distancia, el pensamiento de Thiers seguía imperante, y aun superado. Thiers calculaba que el grupo intermediario, «orleanista ocasional», al incorporarse a la República, ayudaría a fundar «la Monarquía constitucional» bajo otro nombre; y el grupo intermediario había confirmado esta conjetura. Necesario para la fundación del sistema, convirtióse en el árbitro del mismo. Aún era menester asentarlo.

Aplicado por segunda vez ya el principio hereditario a la elección presidencial, en ambas dió resultados extraños. En Sadi Carnot la tradición revolucionaria se había pulido, suavizado, reducido a las proporciones de un 1789 para ingenieros, con su conmemoración en la Galería de máquinas de la Exposición universal. En Casimiro Périer el sentido de la autoridad, tan marcado en su altivo abuelo, degene-

raba en susceptibilidades y en cóleras. No estaba él hecho para «resistir».

Una vez elegido había declarado en su Mensaje a las Cámaras: «Yo cumpliré mi deber de no dejar que se desconozcan ni que prescriban los derechos que me confiere la Constitución.» Era, pues, de esperar una Presidencia activa, autoritaria, acrecida en su función. Las izquierdas tuvieron miedo de verdad, y no fueron ellas solamente las que se asustaron. Tal vez fué la acción de la masonería la que se hizo sentir sobre los republicanos, hasta entonces menos exaltados; quizá sea este uno de los puntos en que conviene aplicar la observación de Juan Dietz: «La historia interior de nuestro régimen seguirá siendo difícil de escribir mientras no se hayan publicado las referencias oficiales de los Congresos masónicos.» Lo cierto es que hombres que nada tenían de extremistas comenzaron a temer la reacción; y lo que no había podido hacer el «nuevo espíritu», lo hizo el miedo de una renuncia al espíritu republicano. Exactamente como en otro tiempo, muy luego del 9 de Thermidor, el llamamiento al «genio de la Revolución» provocaba la recaída en el jacobinismo. El asesinato de Carnot había determinado a Carlos Dupuy a proponer medidas severas contra la anarquía. Se vió en peligro la libertad individual, la libertad de prensa: la esencia misma de la República. Radicales y socialistas combatían estas leyes de excepción, que calificaban de «criminales». Algunos grupos medios uniéronse a ellos; quizá éstos eran los más sinceros en su actitud, ya por ser ellos liberales al antiguo modo, ya por aquella idea de que no había que romper jamás

completamente con la izquierda. De aquel momento data la orientación de un cierto número de republicanos hacia la que ellos consideraban la verdadera República. La grieta no era aún muy grande; pero pronto se agrandaría.

Ante esta oposición imprevista, Carlos Dupuy debió suavizar las «leyes criminales». Fueron votadas, pero la extrema izquierda sintió llegado el momento de extender su ventaja. En la Cámara, los jefes socialistas, Julio Guesde, Jaurés, Alejandro Millerand, a falta de cosa mejor, teorizaban, y sus discursos venían a parar, invariablemente, en proposiciones que reprobaban el colectivismo y glorificaban la propiedad individual. Durante este tiempo los polemistas tomaban por blanco a Casimiro Périer.

Los partidos no lo consiguen todo, como ellos creen, atacando a las personas, y esta vez pudo demostrarse el aserto. Contra el gran capitalista, principal accionista de las minas de Anzin, el castellano de Pont-Sur-Seine, excitábase, quizá aún más que el furor del proletariado, el despecho de la democracia. Sobre todo, que la víctima, demasiado sensible y demasiado bien educada, no soportaba ni la invectiva ni la caricatura. La copa estaba ya desbordante cuando el más furibundo de los insultantes, Gérault-Richard, que penaba en prisión por ultrajes al Jefe del Estado, fué elegido diputado por París. Eran los primeros días del año 1895. Tres semanas antes Burdeau, presidente de la Cámara, había muerto con una reputación todavía intacta; Panamá no debía afectarle sino en la tumba. Le reemplazó Brisson, candidato de los radicales, que triunfó de Méline,

candidato de los moderados. El 14 de enero, el ministerio Dupuy, quebrantado por este fracaso, caía con motivo de los acuerdos sobre ferrocarriles, vieja querella que, desde 1883, servía para intentar acusaciones malsanas. Al día siguiente Casimiro Périer presentaba su dimisión y exponía los motivos en un mensaje, desenmascarando las ficciones constitucionales que privaban a la Presidencia de «medios de acción y de control». Más tarde añadió que el Presidente no era más que un maestro de ceremonias.

La institución andaba en desgracia. Contaba ya con la retirada respetable de Mac-Mahon, la salida forzada de Grévy, el asesinato de Carnot. Y el cuarto Presidente dejaba el Elíseo dando un portazo y lamentándose de su obligada impotencia y de una falta general de consideraciones, tan por parte del público como por parte de los ministros, desdeñosos de tenerle al corriente de los asuntos. Lo que no se preguntaba Casimiro Périer es si él poseía, de suyo, aquella autoridad imprescindible para ejercer tales poderes; su mal humor le hacía arrojar sobre la función desdichada el ridículo y el descrédito. El mismo brindaba razones para su abolición, y, sin embargo, los radicales tampoco esta vez pidieron que se suprimiese. Prefirieron arrebatarla para uno de ellos.

¿Manifestaba Casimiro Périer todas sus razones? ¿No las tenía también personales? Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que su partida debilitaba el dominio de los moderados. El se había lamentado de la ociosidad de éstos. Los que lo habían elegido se lamentaban de su deserción. Y el partido radical volvía a encontrarse con una ocasión inesperada, y empujaba a Brisson hacia la Presidencia. Para descartarlo fueron necesarios todos los votos de la derecha, que se volcaron a favor de Félix Faure, hombre de segunda fila, pero una bella persona, ministro varias veces, sin demasiada autoridad, y conocido comerciante de El Havre. La República de las gentes *muy bien* había causado decepciones. Volvióse a la República de las gentes *bien*.

Para la perfecta comprensión de estos tiempos, que preparaban otros, es menester recordar los temores de aquella burguesía a una especie de lobo cerval, que se llamaba Alejandro Millerand. Otro socialista, todavía lobezno, recomendaba la huelga general, cuyo principio, debido a una proposición suya, había adoptado el Congreso de los Sindicatos en septiembre de 1894. Arístides Briand era el nombre de este agitador. El uno y el otro tenían ante ellos un porvenir bastante diferente del que anunciaban. Entretanto, Clemenceau permanecía bajo la interdicción que le había excluído de las Cámaras, y, privado de la tribuna, tenía que contentarse con el periódico. En fin, el 22 de diciembre de 1894, un oficial de artillería, en comisión en el Estado Mayor del Ejército, el capitán Alfredo Dreyfus, era condenado, como traidor, a la deportación perpetua en una fortaleza. La indignación fué inmensa. Clemenceau sentía que el crimen no hubiera determinado la pena de muerte. En la Cámara un diputado sostuvo que debía ser fusilado el traidor. Se llamaba este diputado Juan Jaurés. Sobre toda la superficie de la tierra no existe en aquel momento un hombre lo bas-

tante sagaz para adivinar que del caso Dreyfus va a surgir una revolución.

Y, sin embargo, los tres años siguientes iban a demoſtrar que, para arrebatar el Poder a los moderados y arrancar la República a las delicias de la conservación y traerla hacia unas aguas más republicanas, sería precisa una gran conmoción, como ya lo había sido para amniſtiar a los complicados en lo del Panamá.

Resulta ya monótono observar cómo, desde Thiers y Mac-Mahon, todo Presidente, al tomar posesión, del cargo, empleaba los mismos términos y hacía idénticas promesas. Félix Faure, también Félix Faure, anunciaba «la conciliación y la pacificación». Y añadía: «la juſticia social para preparar la concordia general... el desenvolvimiento continuado del bieneſtar material y moral». Eran las consabidas palabras de siempre, que las gentes guſtaban de oír. La evocación de las comodidades de la vida, extendidas sin límites y sin descanso, era una cosa agradable, y el presidente del Consejo, designado por Félix Faure, respondía a eſte concepto del soberano bien. La dificultad, dada la penuria de hombres, había estado en dar un sucesor a Carlos Dupuy. Fué preciso recurrir a Alejandro Ribot, ligeramente atacado de panamismo, en el sentido de haber empleado su auſteridad en acallarlo. Siquiera eſte gran parlamentario era un financiero clásico y conservador, además de que estaba afianzado por algo que le aseguraba la inmunidad: su nombre figuraba entre las primeras manifestaciones de amiſtad con Rusia. Ahora, con Gabriel Hanotaux en el miniſterio de Negocios Extranjeros,

podía ya pronunciar la palabra «alianza». Tener un aliado, un verdadero, un grande aliado, era un reconfortante al que Francia no iba a renunciar.

No tardarían en revelarse las dificultades prácticas de eſta alianza, a menudo contraproducente, aunque el público no lo advirtiera. Concebida como una garantía contra Alemania, eſtaba llevando a ciertos contactos con ella, contactos cuyos inconvenientes ya se habían experimentado. Así, por ejemplo, para no separarse de Rusia, Francia tuvo que enviar navíos a la inauguración del canal de Kiel, obra pagada por ella con la indemnización de guerra de 1871. La aliada Rusia convertíase en la intermediaria de una alianza con el Emperador alemán, que entonces meditaba una federación continental contra Inglaterra. No era éſta la única complicación ni la única decepción que iba a traer la alianza con Rusia. Por entonces, sin embargo, no advirtieron otra.

Un ferrocarril, un insignificante ferrocarril, el del Sur, que suscitó el escándalo, motivó la caída de eſte miniſterio moderado. La mayoría se doblaba, y andaban todos desalentados buscándole jefes. Se impuso el relevo y hacer la viſta gorda a los radicales. Dos años después de unas elecciones, que habían dado la mayoría a los republicanos gubernamentales, éſta era la situación.

El intermedio fué breve. El partido radical ya no era sino la sombra de sí mismo, y tenía menos ideas todavía que cabezas. El «bulangismo» le había arrebatado la idea de la revisión; había renunciado ya a sus proteſtas contra el Tratado de Francfort; y, a su izquierda, el socialismo hacíale tam-

bién grave competencia. Ya no le quedaba sino un anticlericalismo más estrecho y más rústico que el de los otros republicanos. Necesitaba, pues, rejuvenecerse y aparecer audaz sin asustar demasiado tampoco. León Bourgeois, el hombre ameno de quien hubo de echar mano Félix Faure, tenía cuanto era menester para dar la ilusión del movimiento, como Casimiro Périer había dado la de resistencia.

El «socialismo prudente y práctico» que anunciaba un miembro de su Gabinete, tenía ante sí un porvenir mejor del que él mismo imaginaba. Aquello era la traducción del «bienestar material y moral», y era también el comienzo de un sistema. Un socialismo prudente que no atentaba a la propiedad, un socialismo práctico que iba a distribuir el bienestar por el canal de las subvenciones, puestos, pensiones, retiros, este socialismo poseería una eminente virtud electoral. Merced a él el partido radical recobraba una razón de ser y seguía su vocación. Es una idea muy popular la de que, guardados por algunos ricos, existen vastos tesoros de los que bastaría sacar una pequeña parte para que todo el mundo fuera feliz. De ahí derivaba el impuesto sobre la renta, concebido como un medio de establecer la justicia fiscal y de que las grandes fortunas contribuyeran al alivio de los más desheredados. Lo único extraño era una cosa: que hubiera hecho falta veinte años de República para que apareciese la idea esencialmente democrática de un reparto de las riquezas por mediación del Estado.

Unos veinte años hacía también que los buenos genios de la República velaban para detenerla en esta

pendiente, temerosos de que pereciera por las finanzas. Todavía transcurrirían otros veinte años, una guerra sería menester, para que el impuesto sobre la renta entrase en vigor. Sin embargo, con el ministerio Bourgeois la Cámara comenzó a adoptar el principio. El ministro de Hacienda que lo hizo adoptar se llamaba Pablo Doumer, y pasaba entonces por un frenético. Su peligrosa ley quedó ahogada en germen. Lo inexplicable es que después de la victoria de los moderados en las elecciones precedentes un voto semejante prosperase, de no haber tenido todas las Cámaras su estado llano, su contingente de «ministeriales» que siguen a todo Gobierno a ojos cerrados.

En su aversión por el impuesto sobre la renta, la clase media demostraba una gran clarividencia. Tocar a un sistema fiscal que había dado resultado durante siglos era una aventura. El Senado, conservador de la cosa pública, se conmovió, y negó su confianza al ministerio radical. Era aquél el Senado del oportunismo, la ciudadela de la prudencia, el consejo de los ancianos fieles a su misión, refractario a toda temeridad.

Conforme a la doctrina hasta entonces constante, el partido radical no podía reconocer el poder de derribar un Gobierno sino a los mandatarios del sufragio universal. León Bourgeois, invocando a Gambetta, sostuvo que las atribuciones de las dos Cámaras eran distintas, que el Senado poseía el derecho de disolución y, mediante el Alto Tribunal, el derecho de juzgar; que el equilibrio quedaba destruído en provecho de una sola Cámara si a sus derechos pe-

culiares, el del sufragio restringido, le añadía los de la Cámara. Durante más de tres meses el ministerio radical se negó a tener en cuenta aquel voto hostil que los senadores le reiteraban. Hubo sus conatos de agitación contra un Senado reaccionario. Y pudo verse también que el país seguía indiferente a los debates constitucionales. El 21 de abril de 1896 el Senado adoptó una medida enérgica: rechazó una petición de créditos destinados a la expedición de Madagascar. Era necesario o llevar el conflicto hasta el fin reuniendo un Congreso para revisar o para interpretar la Constitución, o inclinarse y ceder. En efecto, León Bourgeois se inclinó y cedió.

La fecha era dos veces importante; en primer término, consagraba el abandono de la revisión. El partido radical no denunció ya, sino por pura fórmula, la obra de 1875. Con un Senado tan poderoso como la Cámara Baja, la Constitución reanudaba un contrato de cerca de cuarenta años. Inmediatamente de la caída de León Bourgeois, los moderados se rehicieron; pero habiendo perdido una parte de su grupo, el que se pasó a la izquierda, ya no podían mantenerse sino con el apoyo de la derecha sin defecciones, íntegramente. Tornábase a una política de conservación reforzada. «Sois y continuaréis siendo los protegidos de la derecha», le gritó a Julio Méline el terrible Millerand. Julio Méline acusó dulcemente el golpe, mostrando por su propio pasado el porvenir de más de uno de sus censores.

Era él un viejo republicano, que incluso había puesto un pie en la Comuna, aunque, sin duda, se

había apresurado a retirarlo. Para sus electores de los Vosgos continuaba siendo un republicano de cepa, un «bleu», mientras en París pasaba por reaccionario. En el fondo, Méline era un rural. Con él la agricultura, salvada por sus leyes de protección, gobernó a Francia. Cuanto puede hacerse por el trigo y por el heno, él lo hizo. La República conservadora ya no parecía un «disparate» ni una quimera. Cuando Nicolás II vino a Francia, recibido como un salvador, por aquel brillo deslumbrador de la alianza rusa, el Zar de los mujiks pudo creer que el Estado francés había encontrado su forma definitiva en la apoteosis del propietario campesino.

Las izquierdas se desgañitaban gritando: «Méline, pan caro», y, en vano, se hacían chistes sobre el hombre de los zuecos. El Gobierno moderado, apoyado por una derecha complaciente, duró dos años, y pareció desafiar al tiempo. ¿Qué hubo de surgir para que también les llegara su hora a quienes habían rechazado todo exceso, toda violencia, todo compromiso? Nada menos que una revolución; y como la masa de los intereses estaba satisfecha, una revolución que solamente podía originarse de un combate ideológico. En un combate de este tipo una República de rurales había de encontrarse inerme.

El 16 de noviembre de 1897 los periódicos publicaban el texto de una carta dirigida al ministro de la Guerra: Mateo Dreyfus, hermano del condenado en 1894, denunciaba en ella al comandante Es-

terhazy como autor de la traición. Iba a abrirse el asunto judicial más vasto, más dramático, más fecundo en acontecimientos que se haya jamás visto. Iba a mudar la faz de las cosas, y fueron muy pocos los hombres que entonces lo sospecharon.

IX

La «revolución dreyfusiana»

Con su dulce obstinación, Julio Méline repetía: «No hay tal asunto Dreyfus». Como que hubo dos: uno judicial y otro político; uno en los tribunales y otro en la opinión. Y otro todavía, el más terrible, en las ideas y en los anónimos, que amenazó con hundir cielo y tierra al convertir a Dreyfus en «un símbolo». Sobre este doble paso de lo temporal a lo espiritual y de lo espiritual a lo temporal, Barrés y Péguy muéstranse de acuerdo, como asimismo para juzgar que Méline, muy atento al curso de los mercados, no comprendía absolutamente nada de cuanto ocurría. Este excelente agrónomo no sabía que había comenzado a molestar de veras. Fué aquel un fenómeno reiteradamente observado entre los franceses: estaban cansados de aquella honda mediocridad, de aquella existencia vegetativa, de aquellas virtudes completamente vulgares. El tráfico de granos y de ganados andaba próspero, ciertamente; pero, ¿qué alimento era aquél para las sensibilidades y para las inteligencias? Cultivábase un patriotismo decente, pero tiempo ha que se había renegado del idealis-

mo del desquite. Era repetido el nombre de República y era empujada hacia atrás la democracia. Las jornadas parecían huecas. Las minorías selectas hablaban de actuar, y sentían la necesidad de la acción como una comezón de luchar por cualquier causa. «Por todos lados, decía Péguy, asomaba la crisis.» Merced al caso Dreyfus la crisis fué una convulsión.

En su insistencia de que no había asunto Dreyfus, Méline era razonable, demasiado razonable también en aquel punto. El se atenía al respeto de la cosa juzgada, que es una de las condiciones del orden público, y lo colocaba en el mismo rango que el respeto a la ley y a los contratos, sin el cual nadie está seguro. Pero no se trataba ahora solamente de ese principio general. Si era atacada la sentencia de Dreyfus, fatalmente iba a repercutir el ataque sobre la institución militar, puesto que aquellos jueces vestían uniforme. Imputábaseles una infracción de derecho, y de ahí surgían consecuencias que no se hubieran producido con magistrados civiles. Desde un principio pusiéronse en juego los grandes intereses de la Nación y del Estado. Dos concepciones abiertamente contrarias iban a chocar apasionadamente. Esto es lo que ni Méline ni su fría máxima fueron capaces de presentir.

Delegado en hombres falibles, el poder de juzgar a otros hombres pone en la balanza lo justo y lo injusto. El error judicial conmueve más que el error del médico que encierra a un ser vivo en el sepulcro. Nada agita a la humanidad como un gran proceso: un gran proceso hay en los orígenes del Cristianismo; otro, el de Sócrates, en los orígenes

de la filosofía. Era seguro el remover los espíritus con la mera afirmación de que, víctima de un prejuicio de raza, un inocente estaba sufriendo una pena inmerecida. Y en añadiendo, por una suposición no menos gratuita, que el Tribunal militar había obedecido al espíritu de casta y había abusado de un doble poder, el que le daban sus atribuciones judiciales y el que él se tomaba por su rango, despertábase inmediato el odio instintivo a la disciplina y al jefe, suscitábase la anarquía y se provocaba, por reacción, la defensa de la autoridad.

El caso Dreyfus hubiera podido quedar como causa célebre o como enigma de la historia. Pero creció, convirtióse en conflicto político, y cortó en dos la Francia. Las fuerzas intelectuales y los nombres más célebres tomaron parte en la batalla; y la batalla, después de haber despertado en quienes invocaban la justicia y la verdad una pasión verdaderamente confesional, tomó las proporciones de una guerra de religión. Cómo todo ciudadano francés pasó a ser «dreyfusard», o «dreyfusiste» o «dreyfusien», matices análogos a las variaciones de las iglesias protestantes; cómo un partido se apoderó de este «movimiento religioso» para hacer la que Jorge Sorel ha llamado «revolución dreyfusiana», hasta llegar a esa «bancarrota fraudulenta del dreyfusismo, a esa caída en la demagogia, que Péguy maldecía en nombre de su «mística» primitiva, es algo cuya explicación exigiría un largo relato. Ahora ya apenas nos es dado conocer los hechos en su exactitud, los motivos que prolongaron su resonancia, el fondo de esta querella interminable, las razones que mantuvieron a os-

curas la verdad, dejando el problema siempre abierto.

El asunto Dreyfus ha durado doce años. Seis volúmenes ha necesitado José Reinach para contarlo; el sencillo resumen de Dutrait-Crozon tiene setecientas páginas. Jamás se han visto acumulados tantos incidentes, episodios, procesos injertados en procesos, desbordamientos dramáticos, en tanto que, bien como actores, bien como testigos, intervenían militares, abogados, magistrados, peritos, espías, ministros, diplomáticos, escritores, criados y hasta un antiguo jefe del Estado; entre todos, cerca de un millar de personas. Llegó a tal grado la complejidad que, en broma, ya se hablaba de bachilleres, licenciados y doctores en *dreyfusiología*. Ya no se decía «affaire Dreyfus», sino el «Affaire», el grande, único asunto que pudo lanzar a los franceses unos contra otros y durante años dominarles el ánimo. Para comprender su extraordinario empuje, es indispensable recordar las circunstancias que lo hicieron nacer, crecer, y que se le enroscaron hasta tal punto que, no pudiendo ya resolverlo, hubo que cortarlo, como en Turquía, donde, según Montesquieu, la manera de resolver las disputas poco importa con tal de que terminen.

Remontándonos a los orígenes del asunto Dreyfus, lo advertimos insertado en aquella parte de nuestro relato en la que hemos visto a los republicanos atareados en la organización del Ejército. Habían creado un instrumento militar capaz de hacer frente a Alemania. Era natural que Alemania se inquietase, y que tratara de conocer los planes del Estado Mayor francés y el secreto de los armamentos. A

partir del día en que Freycinet emprendió su obra, se desarrolló el espionaje. Dos traidores habían sido ya descubiertos y condenados: Boutonnet, archivero de la sección técnica de artillería, y Greiner, empleado en las oficinas de Marina. En el ministerio de la Guerra el Servicio de informaciones estaba al acecho. Estaba seguro de que el agregado militar alemán Schwartzkoppen, en combinación con el agregado militar italiano Panizzardi, había montado una agencia de espionaje en la Embajada alemana.

En la Embajada de Alemania había también una sirvienta, la señora Bastian, que recogía los papeles que encontraba en los cestos, los ocultaba bajo su vestido y los hacía llegar al ministerio de la Guerra, sin conocer siquiera qué clase de papeles eran aquellos, puesto que no sabía leer. Así las cosas, en la segunda quincena de septiembre de 1894, llegó al Servicio de informaciones una carta rota y estrujada, cuyo autor anunciaba el envío de documentos relativos a la defensa nacional, y que se denominó la «minuta». Aquel pedazo de papel había de soliviantar a Francia entera. No salieron más plagas de la caja de Pandora que del cesto de Schwartzkoppen.

Importa observar, en primer término, que la autenticidad de la célebre minuta no era discutida; constituía el cuerpo de un delito en torno al cual se han batido las gentes durante doce años sin ponerlo en duda; y, en efecto, no era discutible. Pero este documento procedía de un robo cometido en la Embajada de Alemania, lo cual era natural que crease graves complicaciones. Por esta razón, el general Saussier y el ministro de Negocios extranjeros, Ha-

notaux, entendían que no debían hacerse pesquisas. Prevaleció en el Gobierno el parecer contrario, por creer que la impunidad daba alas a la traición, y que lo importante era hacer un escarmiento. Demás de esto, Guillermo II protestaba de que su agregado militar fuera acusado por la prensa francesa, y exigía una nota que descartase la responsabilidad del embajador. En realidad, la sustracción de documentos del dominio inviolable de un representante diplomático bastaba por sí para originar un incidente grave. En el Elíseo hubo una noche histórica bajo el temor de que Alemania declarase la guerra a Francia, circunstancia esta que, mejor que ninguna, probaba la autenticidad del documento.

Las sospechas no se concentraban de pronto sobre persona determinada. Era patente que el remitente de la minuta participaba en la vida del Estado Mayor, y debía de ser un oficial de artillería. La enumeración de las piezas que se le anunciaban a Schwartzkoppen llevó ya a dirigir las pesquisas hacia los que se hallaban en comisión de Estado Mayor, y que necesariamente pasaban por todas las oficinas. Hasta que, procediendo por eliminación, el parecido de letras acusó al capitán Alfredo Dreyfus. El cual fué condenado por un Consejo de guerra, sin que hubiera habido delito flagrante, sin confesiones ni acusaciones categóricas ante el juez instructor o el Tribunal. Su abogado lo había presentado como inocente. Las explicaciones confidenciales que dió Dreyfus cuando su degradación fueron desmentidas por los hechos posteriores.

Lo primero fué sostener que Dreyfus había sido

condenado después de la comunicación de unas piezas secretas, y por ser judío. Sus jueces aparecieron sospechosos de haber cedido a las intimaciones de un periódico antisemita. Pero aquel Tribunal no se había constituído a sí mismo: era el Gobierno de 1894 quien lo había nombrado, y suya era, por consiguiente, la falta originaria. El error, cuando consideramos los trastornos que Francia había de sufrir con tal motivo, fué el recurrir a un juicio, lo que forzosamente entregaba el caso a la controversia; hubiera sido más prudente vigilar a Dreyfus hasta cogerle *in fraganti*; y aún más hábil, aunque menos honesto, deshacerse de él sin dejar huellas: un Estado Mayor menos escrupuloso lo hubiera enviado a una de esas colonias de donde ya no se regresa nunca.

Desde el día siguiente al proceso de 1894, sus hermanos y su familia, después de haberle defendido, asumieron la misión de declarar su inocencia. Celosos, tenaces, dueños de relaciones y de recursos, interesaron a varias personas en la causa de su pariente. Algunos corazones sensibles o generosos fueron conmovidos por la afirmación de que se había cometido una iniquidad. Otros hubo (tal el caso ejemplar de Péguy) que de la reparación de esta iniquidad hacían cuestión de conciencia y de honor para los franceses. Para cortar de raíz esta agitación naciente fué por lo que Méline invocaba el principio de cosa juzgada. Para revisar el juicio de 1894 era necesario que se produjera un hecho nuevo; en espera de hallarlo, alegaban que Dreyfus, inocente, había sufrido condena injusta y por medios ilícitos, si bien fueron tantas las contradicciones que entenebrecie-

ron el proceso, que partidarios tan ardientes de su inocencia como Jaurés y Trarieux llegaban a admitir la comunicación de las piezas secretas en un proceso por traición. Pero añadíase que habían sido comunicadas de mala fe, y ello inducía a generalizar. Cundieron los ataques a los Consejos de guerra, a los oficiales, a su lealtad, a su jerarquía, al Ejército mismo, sagrado para la mayoría de los franceses. El asunto salía inmediatamente de los límites judiciales, y se dibujaban ya dos bandos. El de los partidarios de la inocencia fué objeto al principio de una extremada impopularidad, circunstancia ésta que no era desfavorable a la causa de Dreyfus: requería cierto coraje para enrolarse en ella; pero tenía, en cambio, el atractivo de la originalidad, del desafío a la opinión del vulgo, incluso del sacrificio. Los primeros «dreyfusard» llamábanse con orgullo los intelectuales. Más tarde hubieron de laborar para distinguirse de los trabajadores de la hora undécima, de la multitud que invadía su capilla cuando ya no había en ella sino provechos que captar.

Los espíritus entraban en movimiento. Pero el asunto estaba en el mismo lugar que antes. Un inocente puede ser condenado; pero desde el momento que hay un crimen, precisa que alguien lo haya cometido, y la pieza de acusación subsistía. Si el autor de la minuta no era Dreyfus, ¿quién era? Mateo Dreyfus denunciaba al comandante de infantería Esterhazy, hombre abrumado de deudas y deshonrado, cuya culpabilidad era admitida por el nuevo jefe del servicio de informaciones, el comandante, más tarde teniente coronel, Picquart. De aquí habían de sur-

gir nuevas complicaciones, porque Picquart fué acusado, a su vez, de maniobras y de falsificaciones por las que fué procesado, mientras él acusaba a sus colegas de cohecho y falsedad. Presentóse denuncia contra Esterhazy, y compareció ante el Consejo de guerra. Allí se declaró inocente, y aunque todo en él fuera equívoco, les fallaron las pruebas a los denunciantes y la encuesta no reveló nada. El comisario del Gobierno retiró la acusación, y Esterhazy fué absuelto entre los aplausos temerarios del público. Creyóse que era éste el final del asunto. Y el asunto entonces comenzaba.

La verdadera señal de entrada en campaña dióla un periódico fundado para mantener la causa de Dreyfus y dirigido por Clemenceau. El 13 de mayo del año 1898, dos días después de la absolución de Esterhazy, *L'Aurore* publicaba, bajo el título «Yo acuso», un violento alegato firmado por Emilio Zola. Con precisión ha dicho Anatole France que aquél era «un acto revolucionario de una potencia incomparable». Zola acusaba a los jefes y a los jueces militares de haber voluntariamente perdido a un inocente y disculpado a sabiendas a un culpable. Fué, a su vez, procesado ante la Audiencia por difamación e injurias, y condenado. La excitación se exacerbó por ambos bandos, y se tomaron posiciones. Se había pasado ya el punto crítico en que fuera posible proceder a una demostración capaz de convencer a ambas partes.

Descartado Esterhazy, entrábase ya en una situación extraña. Prescribe la ley que un acusado que cuente con un veredicto de inculpabilidad a su favor, ya no puede nunca ser procesado ni inquietado

por aquel crimen, aunque esa culpabilidad fuera cien veces demostrada, aunque plenamente se confesara autor. Después de ser absuelto, Esterhazy dió a entender, no sin reticencias ni precauciones al principio, y luego de una manera cada vez más clara, que era él quien había escrito la minuta. Libre de riesgo y de sanción, estas confesiones resultaban sospechosas. Los contrarios a Dreyfus negaban que Esterhazy hubiera estado en condiciones de procurarse los documentos anunciados en la minuta. Ahora bien; un hombre con las taras suyas, ¿no podía haber cargado con la culpabilidad para servir a tercero? Si era capaz de traición, era también muy capaz de ponerse en lugar de un traidor. Con lo que el misterio no se disipaba, y la cuestión hallaba un alimento nuevo. Los partidarios de Dreyfus, aunque apoyándose y dando por firmes las confesiones de Esterhazy, creían necesario apoyarlas en los testimonios de los peritos calígrafos, y éstos no resultaban más infalibles que los que reconocían la mano de Dreyfus en el documento acusador. Sea de ello lo que fuere, aun dando que también Esterhazy hubiera sido absuelto injustamente, su caso no podía ya ser objeto de un juicio contradictorio, lo único que podía disipar dudas y oscuridades. Por su parte, en cambio, Dreyfus, condenado, debía ser juzgado de nuevo si aparecía algún hecho que pudiera establecer su inocencia. El asunto resultaba inextricable. Por donde provocaba de una parte y de otra violencias crecientes y se transformaba en instrumento de guerra civil, lo cual hacía decir a Carlos Maurras que si Dreyfus era inocente había que nombrarlo a él mariscal de Francia

y fusilar a una docena de sus principales defensores. Los que se sentían descartados por el nuevo rumbo del régimen, los que aspiraban a volver a las ideas verdaderamente republicanas, los anarquistas de temperamento o de profesión iban poniéndose poco a poco del lado de Dreyfus. Los primeros campeones de su inocencia habían estado solitarios. Interesados por su causa o desinteresados, ellos habían sufrido por ella, no sin exponerse a la reprobación pública. Sus filas, sembradas de claros, se llenaron, y, por fin, afluyeron a ellas en masa. El asunto Dreyfus se había convertido en asunto político, que permitiría a los radicales reconquistar el Poder y a los socialistas deslizarse entre los radicales.

La alianza de los moderados y de la derecha había dado al Ministerio Méline su larga duración. En el mes de mayo de 1898 celebráronse elecciones generales, y el resultado no pareció aportar nada nuevo; esta Cámara apenas difería de la precedente, y sobre el conjunto del país aquel caso no producía más efecto que el de Panamá. Todo transcurría como si la política fuera una cosa y la elección otra. Inmediatamente, empero, pudo verse lo que había cambiado la situación: Méline se hallaba seguro de volver a encontrarse con su mayoría, y he ahí que desde la primera interpelación fué abandonado por algunos de los suyos, con motivo de una proposición presentada por los radicales obligando al Ministerio a no aceptar los votos de la derecha. Aunque sobre este texto mismo que él aceptaba, Méline hubiera triunfado todavía, halló a su mayoría demasiado mermada y presentó la dimisión. Era el primer éxito de

la izquierda. Y un éxito también para los partidarios de Dreyfus. Con Méline terminaba también la República conservadora, y el principio de cosa juzgada caía con ella. En adelante, el partido de Dreyfus tuvo al Gobierno a su favor en vez de tenerlo en contra. La situación estaba trocada.

Brisson, viejo hombre de izquierda llegado a presidente del Consejo, inclinábase ya a la revisión. Radical como él, ardiente patriota, sincero en sus convicciones, el ministro de la Guerra era Godofredo Cavaignac, gran prestigio republicano que también había abogado por la claridad en el asunto del Panamá. Si alguna prueba surgía de la inocencia de Dreyfus, si se apreciaban huellas de irregularidad en el proceso, era incuestionable que Godofredo Cavaignac diría la verdad, fuese la que fuese. En efecto, él estudió el expediente y sacó en conclusión la certeza de que Dreyfus era culpable, y lo afirmó en la Cámara, leyendo en la tribuna varias piezas, una de las cuales, procedente del agregado militar italiano Panizzardi, resultaba del todo concluyente para el condenado. La causa de la revisión parecía perdida en el momento mismo en que se creyó ganada.

Esto ocurría el 7 de julio de 1898. Cinco semanas más tarde, el oficial encargado por el ministro del estudio del asunto, capitán Cuignet, descubría que la carta de Panizzardi era apócrifa. El teniente coronel Henry, de la oficina de informaciones, confesó que él la había fabricado dos años después del proceso de Dreyfus, al comenzar la campaña de revisión, a fin de poder mostrar un documento neto, preciso, un resumen de prueba que dispensara de toda

otra explicación. El negaba que el suyo fuese propiamente un delito de falsificación. Detenido como lo había estado el coronel Picquart, su adversario, acusado de falsificación, el coronel Henry fué conducido a Mont Valérien, donde al día siguiente, 11 de agosto, se suicidó, dándose un tajo en la garganta.

El partido de Dreyfus triunfaba y proclamaba que la inocencia del condenado estaba demostrada. El nuevo hecho necesario para la revisión había surgido, y Brisson daba prisas para que se emprendiera inmediatamente. El 3 de septiembre, Godofredo Cavaignac presentó la dimisión, declarándose disconforme con el presidente del Consejo e insistiendo en afirmar la culpabilidad de Dreyfus.

¿Iba esta vez a acabarse el asunto? A la verdad, aunque el descubrimiento de la falsificación de Henry agitaba al público, hasta entonces persuadido en su mayoría de la regularidad del proceso, se arrojaban ciertas dudas sobre la sinceridad o sobre la clarividencia del Estado Mayor, ninguna relación tenía con el proceso de 1894, puesto que el tal documento apócrifo era posterior al juicio, y nada había podido influir en la condena. Demás de esto, el capitán Cuignet, que había descubierto la falsificación, dando con ello un testimonio de su perspicacia y de su buena fe, afirmaba la autenticidad de las otras piezas. De nuevo ofrecióse una situación extraña. La falsificación producía un inmenso efecto a favor de la tesis de la inocencia. Su valor judicial era nulo, tanto que ninguno de los dos acuerdos de revisión pudo ni citarlo siquiera. El asunto se exasperaba, pero no se detenía.

Brisson había reemplazado a Cavaignac por el general Chanoine, que el 26 de octubre, a causa de un incidente provocado por Déroulède, presentó su dimisión desde la tribuna, afirmando que él no tenía sobre Dreyfus otra opinión que la de sus predecesores. Brisson afectó tratar a Chanoine como general faccioso, e hizo votar una proposición afirmando la supremacía del Poder civil, expresión ésta que anunciaba la «defensa republicana». Pero en la misma sesión, a pesar de la oposición del Gobierno, fué votada una moción invitando a éste a reprimir los ataques contra el Ejército. El Gobierno, entonces, se retiró.

El miedo explica siempre muchas más cosas de las que uno puede imaginar. Si las izquierdas comenzaban a temer en serio a los nacionalistas, el fondo de la Cámara permanecía moderado y se asustaba de la campaña de los partidarios de Dreyfus, campaña que, dados los aliados que encontraba, adquiría ya un carácter revolucionario. En un principio, el partido de la rehabilitación no sabía en qué apoyarse. La familia de Dreyfus se había dirigido primeramente a los mismos militares, y algunos encontró que acogieron su petición, y el primero el coronel Picquard, cosa que, por lo demás, no hizo sino agravar el nervosismo. Era lógico que, con el desarrollo del asunto, fueran solicitadas todo género de influencias. Refiere José Reinach que los jefes de las organizaciones católicas fueron abordados; los defensores de Dreyfus les hicieron notar que, de no contar con las fuerzas religiosas, veríanse forzados a solicitar la ayuda de los anticlericales y de los socialistas, lo cual arrastraría muy lejos del «nuevo espíritu». Era la antigua

frase: «Si no puedo atraer a los dioses, pondré en movimiento a los infiernos», traducida en términos lapidarios por la amenaza de un «vuelco». Si estas insinuaciones fueron hechas a los católicos, lo cual es muy verosímil, compréndese también que éstos no iban a decidirse a entrar en una aventura ni a separarse de un Gobierno que en tiempos de Méline dábales tan pocos motivos de queja que incluso pareció posible el advenimiento de una «República clerical». Demás de que asociar a la Iglesia a una empresa que, por la fuerza de las cosas, estaba dirigida contra los jefes del Ejército, hubiera reavivado los viejos reproches del ultramontanismo, y parecía una soberana imprudencia. Apenas cabía ni detener en ello el pensamiento.

Al partido de Dreyfus había de serle más fácil alistar a los elementos avanzados. Los que José Reinach llama «agitadores profesionales» debían responder muy de grado. Y otros, todavía «menos puros», no dejaron tampoco de sumarse a éstos. Todos cuantos tenían algún interés en el desorden, todos cuantos andaban tras un desquite, tomaron partido por Dreyfus. Los socialistas, con Jaurés, entraron allí en masa. Clemenceau les había precedido, guiado por todos sus instintos, los de republicano enemigo de las jerarquías, los de desterrado en su patria que anhelaba volver a escena. Un caso arrumbaba otro: el dreyfusismo purificaba del panamismo. Un periodista influyente de la izquierda, Ranc, que, desde los orígenes del régimen, daba sus orientaciones a la vieja Unión republicana, fué quien primero comprendió la oportunidad que se ofrecía de acabar con el predo-

minio de los moderados. José Reinach dice aún que el asunto Dreyfus «lanzó al socialismo revolucionario» a hombres muy lejanos a él hasta entonces. Fué, en efecto, un proyectil. La justicia y la verdad que algunos idealistas creían servir desinteresadamente habían derivado hacia pasiones menos nobles y hacia otros fines. Fué explotada, sobre todo, la fatiga que el país comenzaba a sentir por el esfuerzo que se le había exigido para la defensa nacional. El tiempo del fervor patriótico y de las batallas escolares, en que el maestro de la República tenía la misión de enseñar que «en todo ciudadano debe haber un soldado», aquel tiempo entusiasta había pasado a la Historia. El antimilitarismo nacía precisamente de aquel servicio, para todos igual, que enviaba al cuartel entremezclados a los que nada sufrían, o, si sufrían, no sabían decirlo, junto a los que, escritores, profesores, intelectuales de todo género, soportaban aquello muy mal y sabían expresar sus quejas. Ya Renan había dicho que él no hubiera podido ser soldado y que, de serlo, hubiera luego tenido que desertar o suicidarse. El antimilitarismo manifestábase ya en la literatura. Sólo esperaba la ocasión para propagarse a la política.

Los moderados, que constituían la mayoría de la Cámara, dábanse cuenta de estas circunstancias y apreciaban las consecuencias de tal agitación. Carlos Dupuy, llamado al Gobierno, pudo ver el peligro tanto más claro cuanto que en el momento mismo en que asumía el Poder, producíase en el exterior una complicación grave; constituído el 3 de noviembre de 1898 su Ministerio, se encontraba ya al día siguiente ante un caso comprometido: una expedición que había

partido del Congo en el mes de julio, mandada por el capitán Marchand, llegaba a Fachoda, en el Nilo, después de una travesía épica por el continente africano. Aquello era el resultado de la política colonial, reiterada después de la alianza rusa. Fachoda planteaba de nuevo la cuestión de Egipto. Kitchener conminó a los franceses a retirarse. Marchand nada quiso hacer hasta haber recibido una orden del Gobierno. Empeñarse en mantener allí el pabellón francés era la guerra segura. Ya la flota inglesa se disponía a zarpar. El Gobierno cedió y ordenó retirarse a Marchand.

Este incidente sacudió aún más los nervios. El Ejército era atacado en la persona de sus jefes en el momento en que era más viva la necesidad de unión y de confianza. El partido de Dreyfus, cuyos polemistas, Clemenceau el primero, ridiculizaban e insultaban diariamente a los militares, fué denominado el partido del extranjero, dado que la prensa de fuera, casi unánime, habíase declarado, para colmo, por la tesis de la inocencia. El oro inglés —la vieja caballería de San Jorge— fué acusado de proveer de fondos al «sindicato» de Dreyfus, El propio Freycinet, vuelto al Ministerio de la Guerra, fué quien dió lugar a esta acusación con unas indicaciones que, más tarde, vino a atenuar. El sentimiento nacional sintióse provocado; una especie de «bulangismo» sin Boulanger comenzó a insinuarse. A la Liga de los Derechos del Hombre oponíanse la Liga de la Patria francesa y la Liga de Patriotas. Marcábanse perfectamente «dos grandes bandos por Francia», como en los tiempos de las guerras de religión.

Como en otro tiempo el canciller de L'Hôpital entre los protestantes y los católicos, Carlos Dupuy procuraba mantener en el fiel de la balanza entre los partidos y no descontentar a ninguno. La Sala de lo criminal en el Tribunal Supremo, que entendía ahora en la demanda de revisión, daba señales de su parcialidad a favor de los padrinos de Dreyfus. Dupuy, para calmar los espíritus, hizo votar una «ley de Inhibición» que obligaba a que la sentencia se dictara con todas las Salas reunidas. A guisa de compensación, el teniente coronel Picquart, ídolo de los Dreyfus, fué sustraído a sus jueces naturales y recusado el Consejo de guerra por presunción de enemistad grave. Tampoco esta medida pacificó nada. El único resultado fué que las acusaciones intentadas contra Picquart jamás fueron esclarecidas, en tanto que se le reprochaba de haberse sustraído al juicio.

En este punto las cosas, repentinamente, el 16 de febrero de 1899, murió Félix Faure. El quinto *reinado* venía a interrumpirse también por un accidente, y esta muerte veníales tan mal a los unos y tan bien a los otros, que muchos se resistieron a creerla natural. Félix Faure era enemigo notorio de la causa de Dreyfus. Su bella prestancia, lo cuidado de su persona, atraían. El era quien había dado a la República conservadora el carácter que le convenía, una especie de *mac-mahonado* burgués con relaciones principescas. Este presidente hubiera muy a gusto pasado sus revistas a caballo, y para los militares tenía sus atenciones. Cuarenta y ocho horas después de su muerte fué reemplazado y Méline, candidato, estaba de antemano vencido. El Congreso de Versalles lo pospuso a Emilio Loubet, refugiado desde lo del Panamá en los honores senatoriales, y elegido ahora por las izquierdas, aunque albergaba sentimientos conservadores.

Al nombrar a Loubet, por designación de Clemenceau, la mayoría de ambas Cámaras había decidido ya una política: se había inclinado por el partido de Dreyfus, por la defensa republicana y por la izquierda. El nacionalismo, nuevo nombre del «bulangismo» le inquietaba; las Ligas le parecían un peligro, y Loubet, por su pasado oportunista y panamista, un hombre seguro.

París recibió esta elección como una injuria y un reto. El nuevo Presidente entró en el Elíseo a los gritos de «¡Panamá!». Fácil era comprender que iba a comenzar un período y una política nueva. Pablo Déroulède intentó oponerse por la fuerza; en las primeras horas de la tarde del 23 de febrero, después de las exequias de Félix Faure, creyendo contar con la cooperación del Ejército y de la calle, fué a una tentativa romántica de golpe de Estado. Cogiendo por las bridas al caballo del general Roget, que iba a la cabeza de las tropas que habían asistido a los funerales, quiso convencer a este jefe, particularmente odiado por los de Dreyfus, para marchar sobre el Elíseo. El general se negó, y él mismo hizo detener a Déroulède, absuelto tres meses después por el Jurado.

En esta breve aventura, la actitud de los militares había sido perfectamente correcta. Cuando, poco después, el comandante Marchand regresó a Francia, tampoco él se prestó a aclamaciones. No había tal nuevo Boulanger, y, sin embargo, los republica-

nos se alarmaban con las mismas razones que le daban al nacionalismo para agitarse. El 3 de junio, el Tribunal de casación ordenó la revisión del proceso Dreyfus por motivos en los que para nada entraba la falsificación de Henry. Dicho Tribunal no contaba sino con la comunicación a los jueces de 1894 de un documento secreto, «considerado» como inaplicable al condenado, y con la atribución de la minuta a «otro oficial». Ese mismo día, Esterhazy, que seguía refugiado en Inglaterra, se declaraba verdadero autor de aquélla, bien que dando unas explicaciones contradictorias y aun absurdas: era indudable que él había escrito el documento, pero «por orden», y el verdadero culpable era Dreyfus. Entretanto, éste, sacado de su detención en la isla del Diablo, debía comparecer ante un nuevo Consejo de guerra, reunido en Rennes.

Para los partidarios de Dreyfus, el fallo del Tribunal era un éxito que les valió muchas adhesiones más. El mismo Dupuy se pasó a su bando con una precipitación que a nadie inspiró confianza y que exacerbó la agitación de París. El 4 de junio, abucheado en las carreras de Auteuil, el Presidente Loubet fué agredido por uno de los asistentes, el barón de Christiani, cuyo título nobiliario hizo lanzar la voz de un complot de la aristocracia. Ocho días más tarde era derribado Carlos Dupuy; parecía demasiado blanda su mano, y el régimen se creyó en peligro. Fué designado Waldeck-Rousseau para formar un Gobierno de defensa republicana.

Waldeck-Rousseau, que gustaba de llamarse republicano conservador, había entrado en la política

en tiempos de Gambetta y de Ferry, cuando las impresiones del 16 de mayo estaban aún vivas. Mantenía dos principios: primero, que el clericalismo era el enemigo; segundo, que, para resistir a ese clericalismo, era indispensable, en caso de urgencia, la unión de los republicanos, sin excluir a los más avanzados. El atribuía una influencia enorme a las Congregaciones, sobre todo a los asuncionistas, a pesar de su docilidad a las instrucciones de León XIII y de su propaganda a favor del «ralliement». Por lo que podemos juzgar a esta distancia, él se había formado una imagen siniestra de los monjes conjurados, conspirando para llenar de alumnos suyos al Ejército, para fanatizar el cuerpo de oficiales y apoderarse así del Estado. Violentándose en sus costumbres de perfecto burgués, buscó el apoyo de los revolucionarios, que no le pareció superfluo para luchar contra semejante hidra. El hombre más clarividente de su Ministerio fué Alejandro Millerand, terror de la burguesía, bien que a su lado, en esta composición extraña, figuraba para disipar temores el general de Gallifet, fusilador de la Comuna.

Waldeck-Rousseau murió suplicando a sus amigos que atestiguasen cómo él jamás había sido socialista ni radical siquiera. Sí era el hombre destinado a sacar la República de su moderación. Con él y por el asunto Dreyfus volvíase a los años de combate en que el régimen seguía un rumbo verdaderamente republicano. Todo cuanto se había hecho después para templar la democracia, contener sus excesos y atenuar sus peligros, se daba de lado. Para hacer aceptar este retorno a 1880, precisaba también un hombre cuyo

género de vida, cuyas relaciones y maneras fuesen una garantía de paz. Grandes burgueses como él siguiéronle en aquel sentimiento que, cuando el diez y seis de mayo, había amasado la unión de los republicanos todos. Sino que las circunstancias eran ya muy otras, aunque de momento no se percataran de ello. El asunto Dreyfus entregaba el poder a la izquierda y se lo daba en condiciones tales como jamás lo había tenido. Abría de par en par las puertas a ese «radicalismo» que Grévy había sofocado. Era una verdadera revolución.

Con esto, la agitación subsistía. Permanecía como un principio y cuando Waldeck-Rousseau vino para terminar con ella, puede decirse que todo se conjuró para prolongarla. El Consejo de guerra de Rennes debía dictar sentencia definitiva ante la cual los dos bandos deberían de inclinarse. Este era el medio de encontrar la luz que se buscaba en los combates políticos. Por un lado, se acusaba a Dreyfus, y por su parte, Esterhazy decía: «Yo soy quien ha escrito la minuta». Parece hoy evidente que confrontar las posibles culpabilidades, carear inclusive a los dos supuestos autores hubiera resuelto el problema, ya que éste consistía en escoger entre dos culpables. Esterhazy fué citado como testigo. Refugiado en Londres, se abstuvo de comparecer. No sabemos por qué extraño y tácito acuerdo las dos partes consintieron la ausencia. Ante la propuesta del representante del Ministerio público de no suspender la vista, el abogado de Dreyfus declaró que no tenía nada que alegar y sin más protestas por su parte, el Consejo decidió que la declaración de Esterhazy no era indispensable para

el esclarecimiento de la verdad. De esta manera se revisaba el proceso de un hombre que proclamaba su inocencia afirmando no haber escrito el documento famoso del que otro se declaraba autor, revisión cuya causa principal era esa, y el defensor del primer sentenciado no insistía para oír al *confitentem reum* como si esta confesión no mereciera tenerse en cuenta, como si no hubiera sido sincera, como si no hubiera existido. He ahí lo que a distancia nos parece prodigioso, pero aún más prodigioso es que los contemporáneos no se dieran cuenta.

También, a distancia, parece como que los partidarios de la inocencia andaban más afanados en que se reconociese que Dreyfus no era el autor del crimen que en descubrir su verdadero autor. El propio Demange se contentó con manifestar su duda. Es imposible comprender cómo fué necesario disculpar a Dreyfus y combatir las alegaciones presentadas contra él, si era indiscutible que Esterhazy probaba la inocencia de Dreyfus. Pero el condenado de 1894, aunque presente en carne y hueso, seguía siendo «un símbolo». Los dos bandos se enfrentaron en Rennes, adonde habían afluído dreyfusistas y antidreyfusistas, oponiendo todavía sus ideas generales y sus tesis por encima de las cuestiones de hecho en que los testigos de cargo situaban a los jueces, demostrando, como en 1894, que el traidor no podía ser sino un artillero, oficial en comisión en el Estado Mayor. Por cinco votos contra dos, el Consejo de guerra condenó de nuevo a Dreyfus.

Aun condenándolo, los jueces militares se sintieron pacificadores y acordaron ciertas circunstan-

cias atenuantes que reducían la pena. Waldeck-Rousseau, que esperaba una absolución, sintió una sorda irritación contra el veredicto, y respondió concediendo el indulto. El Presidente Loubet se apresuró a firmar y Dreyfus lo aceptó desistiendo del recurso. Se creyó que todo estaba concluso. Gallifet lo dijo en la orden del día del Ejército: «El incidente está terminado».

No era un incidente. Hacía tiempo que el asunto Dreyfus había desbordado la persona de Dreyfus, y por eso continuó cuando ya había cesado de interesar al público, y el propio Dreyfus de interesar a sus amigos. Ya no terminaría nunca. El partido del condenado no se desarmaba. El «affaire» que le había encaramado al Poder le permitía también guardarlo y ejercer represalias. Para mantener la agitación revolucionaria, que tan provechosa había sido a los partidos avanzados, Jaurés entabló el proceso de rehabilitación con la misma tenacidad que había producido la revisión. Siete años después del juicio de Rennes, obtuvo una sentencia de casación que declaraba a Dreyfus inocente, si bien reconociendo todavía que en 1894 se había cometido un «gran crimen», sin que pudiera probarse legalmente que fuera Esterhazy el culpable. A costa de alterar la ley y de renunciar a su propia jurisprudencia, el Tribunal dispensó que el condenado de Rennes compareciese ante un tercer Consejo de guerra. Si los enemigos de Dreyfus protestaron, los partidarios sinceros gimieron: ellos querían que la víctima fuera rehabilitada con todos los honores por los mismos tribunales que le habían condenado dos veces; y el «tan

grande crimen» que había hecho arder la Francia entera iba perdiéndose en considerandos y resultandos que lo reavivaban. Se estaba ya muy lejos del drama judicial. Muchos de los que habían intervenido habían mudado ya de campo. En nuestros días siguen las disputas. La revelación decisiva que se esperaba de Berlín llegó. Los «carnets» de Schwartzkoppen han sido publicados. Y siguen sacándose conclusiones opuestas.

Lo que sí es incuestionable son las consecuencias del asunto. Para comprender una época no hay que recurrir a los actos ni a los discursos públicos ni a las palabras de los ministros: solamente los escritores destacan y fijan la idea general de los acontecimientos. En 1904, conmemorando la muerte de Zola, Anatole France, que había combatido en las filas dreyfusianas y que por dicho «affaire» había pasado al socialismo, decía en plan de apologista: «El asunto Dreyfus rindió a nuestro país el inestimable servicio de presentar y descubrir, poco a poco, las fuerzas del pasado y las fuerzas del porvenir; de un lado, el autoritarismo burgués y la teocracia católica; del otro, el socialismo y el libre pensamiento». En estilo menos tribunicio, lo cierto es que había arruinado el Gobierno de los moderados y la República conservadora, el «espíritu nuevo» y la ley militar de Freycinet. Asimismo había producido el advenimiento de ese «radicalismo» que los republicanos más prudentes habían temido y contenido; y en el seno de la República había levantado una revolución que amenazaba con disolverlo todo. Y así se llegó a la guerra en un estado de descomposición completa,

exponiendo al propio régimen al peor de los accidentes, el que, en el curso de la historia, ha entregado a otras democracias a los ataques del extranjero; por fortuna, el tiempo permitió que algunos hombres, apoyados en lo que todavía estaba firme, remendaran el dique roto. Había que comenzar de nuevo lo que habían hecho los viejos tutores del régimen; aquel diseño por ellos logrado habría que volverlo a trazar un día en condiciones infinitamente más difíciles, que esta vez harían dudoso el éxito.

X

Waldeck, Combes, Delcassé

Con Waldeck-Rousseau vióse lo que era un presidente del Consejo dotado de prestigio, un primer ministro de verdad, árbitro hasta el punto de designar él mismo su sucesor. Pues bien; él vino a dejar las cosas más hundidas que las hubieran dejado diez gobiernos débiles.

Este hombre glacial, que imponía por su afectación desdeñosa y silenciosa, producía la impresión de un hombre de Estado, porque de tal tenía las maneras. El hecho de que luego se extrañara él mismo de las consecuencias de su política, ha dado motivos graves para dudar de su talento. Abrió las puertas al sindicalismo y al socialismo, y es lo cierto que ni él lo quería ni lo había previsto.

Para extender su mayoría hasta la extrema izquierda, afirmaba «la República en peligro». ¿Ese peligro existía? El Alto Tribunal ante el cual entregó a realistas y nacionalistas no logró comprobar la existencia de un complot con los jefes militares. Es más: ese proceso vino a demostrar cuán honda era la división entre los adversarios del régimen,

hasta el punto de que, condenados ambos al destierro, batiéronse en duelo Pablo Déroulède y Andrés Buffet. Para resistir a una orden de arresto, el antisemita Guérin estuvo atrincherado durante algún tiempo en una casa de la calle de Chabrol. Los parisienses, por curiosidad, iban a ver su *fuerte*, y él acabó por rendirse en connivencia con la policía. Tal era la agitación que Waldeck-Rousseau temía e invocaba para justificar la formación del «bloque republicano».

Le acechaba ya entonces la muerte y el mal exacerbaba sus temores. Tampoco cabe olvidar que, a pesar de sus éxitos de gran abogado, de su vida parisién y de sus relaciones con el gran mundo, conservaba sus prejuicios de provincia. La oposición de París fué lo que más le contrarió. Hasta en sus barrios comerciantes y burgueses, París había sido radical durante mucho tiempo, y en el Ayuntamiento dominaba el radicalismo. El caso Dreyfus se encargó de rematar lo que el «bulangismo» había comenzado. Cuando, en 1900, la mayoría del Consejo municipal pasó a los conservadores y nacionalistas, Waldeck-Rousseau se indignó como un «bleu» de Nantes, su villa natal, el día del ataque de los *chuanes*.

Fiel a la antigua observancia y a la vieja moda, permanecía en muchas cosas retrasado de su siglo. Era, al cabo, un liberal de la Restauración, un burgués volteriano de Luis Felipe; aquellos tiempos en que se podía atacar sin peligro a los *hombres negros*, aplastar «la infame» y hacer que las armas cedieran a la toga. Pero lo que con el sufragio censitario resultaba inofensivo, dejó de serlo con el sufragio universal, muy modificado éste, a su vez, desde el

16 de mayo. Las ideas republicanas no habían herido sólo a las antiguas masas conservadoras. La generación que ahora llegaba a la edad viril estaba formada en las escuelas de Julio Ferry, y el socialismo había ganado mucho terreno. El panorama electoral ya no era aquel de 1877, y resultaba arriesgado el proclamar el consabido lema de «a la izquierda no hay enemigos»; por lo menos, sin una necesidad absoluta e incontestable, no debían recurrir a él los republicanos prudentes. Waldeck-Rousseau no se dió cuenta de las nuevas circunstancias, y este fué su error. Quiso excusarse de haber llegado hasta la extrema izquierda por la defección del centro derecha. Pero los hombres del centro habían roto con él, porque sus verdaderas alianzas habíalas previamente determinado el fantasma del clericalismo y del militarismo, que él creía unidos en tenebrosa conjuración. Y tampoco era posible perseguir a los generales ni mantener en sospecha al cuerpo de oficiales sin debilitar la disciplina del Ejército. Ni atacar a las Congregaciones sin hacer la guerra a la Iglesia y arruinar al Concordato.

Quizá Waldeck desconfiaba más de los militares que de los frailes. Un día que en la Cámara pronunció la palabra «felonía» refiriéndose a un oficial cuyo testimonio no le era grato, Gallifet envió su dimisión. Waldeck se apresuró a reemplazarlo por el general André, quien, al poco tiempo, pasaba como el único republicano del Alto mando. Esta designación indicaba más humor que clarividencia, dado que el general André había de ser uno de los que irían más allá de lo que deseara el jefe del Gobierno.

Dos cosas solamente seguían su buena marcha. La política internacional continuaba en manos de Delcassé, quien seguía en silencio, y, aparte su idea, como ignorante de cuanto ocurría a su alrededor. Las finanzas estaban confiadas al hijo de uno de los ministros del 16 demayo, educado en las tradiciones conservadoras y prestigioso en los medios bancarios; con José Caillaux persistía el tono de los Consejos de administración, el espíritu de las Banca de Francia. La República permanecía en la línea de la gran burguesía, con cierto matiz de desenvoltura mundana y de modernidad.

Al ver que no tocaban su dinero, fueron tranquilizándose las clases medias. Cierto que hubo sus incidentes desagradables: por ejemplo, aquella fiesta del triunfo de la República en que fué enarbolada la bandera roja. Pero el Presidente Loubet abandonó su tribuna al llegar aquello del «andrajo de guerra civil», y esta protesta muda bastó a calmar las inquietudes. Decíase que el Ministerio había aceptado los votos de la extrema izquierda para sostenerse, y que la sociedad no se había tambaleado por tan poca cosa. Millerand emprendía reformas de carácter socialista, que aparecían como concesiones generosas para apaciguar a los obreros y debilitar, dividiéndolo, el socialismo, dado que sus elementos más revolucionarios obstinábase en negarle todo apoyo a un Gobierno burgués llamado de «defensa republicana», y le lanzaban la «maldición del proletariado».

Un reformismo conservador: ésta era, en el fondo, la ilusión de Waldeck-Rousseau. De acuerdo con él, Millerand favorecía la difusión de sindicatos obreros y las Bolsas de Trabajo, destinadas a ser los centros de educación de la «democracia laboriosa». Ingenua visión de los obreros buenos y prudentes, pasando en aquellas Casas del Pueblo «su aprendizaje de miembros de una corporación y ciudadanos»! Ese cuento de hadas no preveía el desenvolvimiento de la Confederación General del Trabajo, el sindicalismo extendido a los funcionarios y desafiando al Poder público, todo aquello que, contenido en tal germen, tenía que crecer, y, a la larga, estaba destinado a debilitar el Estado y exponer a la misma República a peligros desconocidos.

El gran pensamiento de Waldeck-Rousseau era el de dotar al régimen republicano de una ley de Asociaciones; pensamiento éste que le hacía considerarse todavía como un reformador prudente y comprensivo. Dicha ley permitiría a los franceses asociarse para el bien, no para el mal; claro que el árbitro del bien y del mal sería el Gobierno. Constituiríanse excelentes asociaciones laicas que, dotadas del derecho de propiedad, prestarían a sus miembros los beneficios de ésta y los encajarían dentro del orden social. Y habría también buenas asociaciones religiosas, las que el Gobierno autorizara previamente, en tanto que las otras, declaradas malas, serían prohibidas. Eran, pues, las de Waldeck las ideas de un liberal de la Restauración, que pretendía ejercer sus regalías, hacer que el clero regular pasara a igual condición que el secular, sujetar uno y otro y, de paso, suprimir aquellas Ordenes religiosas cuya actividad podía hacerle sombra al Estado. Tal el caso de los jesuítas en tiempos de la Monarquía; precedente que

Waldeck, siguiendo el ejemplo de Julio Ferry, no dejaba de invocar. Profesaba también particular enemiga a los Asuncionistas y estaba firmemente resuelto a prohibirlos también. No quería ya más: solamente quería acabar con los «frailes intrigantes» y «los frailes conspiradores», que eran los que constituían su obsesión; los otros serían fiscalizados y vigilados. Por lo quc respecta al Concordato, no pensaba, ni mucho menos, en denunciarlo; antes bien, su propósito era extenderlo a aquellas Congregaciones que dependían directamente del Papa. Este nombre de «Congregaciones» cuidaba él de no pronunciarlo: su preocupación era legislar en general.

En cuanto el proyecto se presentó en las Cámaras, echóse de ver lo endeble de aquel talento político. Waldeck-Rousseau fué incapaz de contener la corriente que él había creado. Las enmiendas aportadas a su ley mudaron la naturaleza de éstas, y tuvo que soportarlas. Sometido a sus aliados de extrema izquierda, borró aquello que restringía el derecho de asociación para los revolucionarios y lo habría para los católicos. En sus discursos había denunciado reiteradamente el conflicto de las dos juventudes, que recibían educaciones diferentes, y hubo de suprimir la libertad de enseñanza. Había sembrado vientos de radicalismo y ahora se extrañaba de recoger tempestades.

Hizo más. En 1902 celebrábanse las elecciones generales, y Waldeck, presidente del Consejo y ministro del Interior, puso el prestigio de la Administración al servicio del bloque republicano. Siguió sin ver

enemigos a la izquierda, y pudo complacerse en su victoria; pero, ¡qué efímero su triunfo!

Antes del escrutinio, que fué una explicación en regla, un jesuíta, predicando en Lourdes, había amenazado con la «espada electoral» a los enemigos de la religión, al grito de «¡A la batalla, bajo el lábaro del Sagrado Corazón!». El historiador protestante Seignobos se indigna contra este grito de guerra que a nosotros nos parece sencillamente ingenuo. El propio León XIII, a quien el fracaso del *ralliement* tenía contristado, creyó en la salvación por la papeleta electoral; mucho más hubiera comprometido a Waldeck si ordena a los católicos la abstención renovando para Francia la norma *non expedit,* que aplicara a Italia. Libróse a fondo la batalla, y sin duda que el uno y el otro bando apretaron las clavijas. En el conjunto del país, las izquierdas reunían tan sólo 200.000 votos más que las derechas y los moderados. El escrutinio por distrito hizo que esta mayoría, débil en el país, se alzara en la Cámara compacta, fuerte y enardecida. Era ya un hecho lo que durante tanto tiempo había podido evitarse: la llegada del radicalismo al Poder, y la llegada como vencedor, con todo su programa, con todas sus exigencias, aliado con los socialistas y soportando su aguijón. ¿Qué había sido menester para dar ese paso? Nada menos que un tipo de republicano conservador como Waldeck-Rousseau.

Todavía guardaba él un reflejo de su moderación antigua. Ya no le quedaba por hacer en este camino del mal sino una cosa, y la hizo. Fatigado, quizá despechado en el fondo, se había retirado del Poder sin aguardar a la reunión de la nueva Cámara. Su pres-

tigio sobre el bloque republicano era tal que le pidieron que designara sucesor. Y fué entonces cuando, habiendo rehusado León Bourgeois y Brisson, designó a Emilio Combes. La obra empeñada de Waldeck era la ley de Asociaciones; Emilio Combes la había defendido en el Senado, y le pareció el hombre más digno del Poder. Lo adoptó, y la adopción vino a dar uno de aquellos resultados inesperados que alguna vez producía en tiempos de los Césares.

Entre cuarenta millones de franceses caben infinita variedad de tipos humanos. Salido del Seminario, muy instruído en Teología, Emilio Combes era uno de esos ejemplares que sólo la provincia puede alimentar. Waldeck-Rousseau sabía muy bien que cedía el Gobierno a un monomaníaco. Combes conocía a fondo el Derecho canónico y la Historia de la Iglesia, y aquel clérigo frustrado sólo pensaba en la lucha contra el partido clerical, cuando he ahí que el Poder vino a brindarle ocasión de un conflicto histórico con el Pontificado, en el que se vanagloriaba él de haber lucido toda su ciencia. En su juventud de seminarista, tan pronto debió de soñar con ser un Padre de la Iglesia como en promover una segunda querella de las Investiduras, en ser un San Bernardo o un Juan Huss, un Bossuet o un Lutero. La República caía en manos de un teólogo heresiarca que a menudo asombraría a la Cámara con sus protestas de fe espiritualista.

Su obsesión, que le tornaba indiferente a cuanto no fuese asunto religioso, produjo efectos peregrinos. Cada uno de los ministros, dueño de su departa-

mento, entregóse a sus ideas favoritas. El general André, tan pronto como hubo disuelto el antiguo Estado Mayor, dióse a la tarea de republicanizar el Ejército y tomar nota de los oficiales que asistían a misa. Un bohemio fantástico, Camilo Pelleten, encargado del de Marina, volvióla de arriba abajo y puso a los buques de guerra nombres de pensadores. Delcassé, aislado también en su Ministerio, planeaba una coalición defensiva contra Alemania. Rouvier, llamado al de Hacienda, la dirigía de suerte que ni daba motivos de queja a la alta Banca, ni de inquietud a los rentistas. Combes, en sus conversaciones íntimas, solía decir a los moderados que le eran hostiles: «¿Por qué me odiáis? ¿Acaso ataco yo vuestros intereses? ¿Es que nosotros tocamos vuestro dinero?».

El verdadero Gobierno era la delegación de izquierdas, formada por grupos radicales unidos a los socialistas, y cuya alma era Jaurés. Hubo así una mayoría estable y un Gabinete duradero, y pudo verse, además, que no era precisamente esta condición la que traería el bien.

Poseído de una especie de furia, excitado por el aplauso de los fanáticos, Combes parecía soñar en la destrucción del catolicismo en Francia. Se había encontrado con una ley de Asociaciones dispuesta, y no tenía más que aplicarla. Dicha ley contenía ciertas garantías y ciertas promesas para las órdenes religiosas. Las demandas de autorización debían ser examinadas una a una. Pues bien; salvo un reducido número de Congregaciones que exceptuó en razón de su utilidad, Combes decidió que se rechazasen en masa todas las demandas. La idea primitiva de la ley

quedaba muy atrás, y violado su espíritu. Habíase afirmado reiteradamente el mero propósito de defender la República y la sociedad civil, y con ellas la libertad; a los frailes se les limitaba el derecho común, pero no se les sustraía. En efecto, Emilio Combes les dejó sin ninguno, faltando cínicamente a las promesas hechas. La protesta dejóse oir con toda amplitud. Muy próximo a la muerte, Waldeck-Rousseau subió a la Tribuna del Senado para declarar que aquello no era lo que él había pretendido. Renegó de su sucesor. Le conminó a respetar la palabra empeñada. Sintió el miedo de su propia obra y de cuanto veía venir. Pero apenas consiguió moderar la virulencia de los perseguidores.

Sus postreros esfuerzos los dedicó a librar al Senado de la delegación de izquierdas y a salvar la autonomía de esta Cámara, en la que él cifraba sus últimas esperanzas de conservación. Como él, otros había que se espantaban demasiado tarde y presenciaban, consternados, tantas demoliciones y desórdenes. Fueron muchos entonces los arrepentidos, y maduró más de una conversación.

En su interior, no era el Presidente el menos alarmado. Elegido sin gloria, Loubet carecía de autoridad para elevar la voz; pero él tenía sus ideas, su juicio sobre los hombres y sobre las cosas, y era el fiel heredero de los viejos oportunistas, y, en lo poco que le era dado, trataba de ejercer su acción moderadora. Lanzado de nuevo por el sufragio universal, Clemenceau volvía al Parlamento; el caso Dreyfus le proporcionaba un puesto de senador, y, al mismo tiempo, el «máximum de República». Su nombre

continuaba siendo sinónimo de violencia y de exceso, y Loubet confiaba en su grupo: «Mientras esté yo en el Elíseo, Clemenceau no será ministro.» Cerníase, sobre todo, un peligro que Loubet hubiera querido prevenir: el conflicto con el Pontificado, que Emilio Combes iba buscando bien a las claras. Quizá dudaba aún éste en denunciar el Concordato y devolver la libertad a la Iglesia; pero, aunque los republicanos la habían eludido siempre, en el programa radical manteníase la separación. Durante todo el largo reinado de León XIII, la República había tenido que guardarle ciertas consideraciones por los tratos habidos con él. Pero al morir este Papa, con el nuevo holgaban ya toda clase de escrúpulos, y Combes meditó una querella brillante. Preparada muy de antemano, la ruptura de la Santa Sede surgió en ocasión de una visita oficial al Rey de Italia. Bastaba con afectar desconocimiento respecto de la Santa Sede para provocar la protesta del Papa Pío X, que persistía, como su predecesor, en la reivindicación del poder temporal. La trama aparecía perfectamente urdida. El propio Delcassé invocaba una razón de interés nacional. La continuación del Concordato, decía, ofrecía menos valor que la amistad con Italia. Se imponía elegir entre ofender al papado u ofender al Gobierno italiano, y para suerte de Francia la opción estaba hecha. En vano Loubet, ante las exhortaciones de su piadosa mujer intentaba deshacer el viaje. En conversaciones particulares manifestaba que le horrorizaba la política religiosa de Combes. Tuvo que resignarse a lo que exigían de él.

Muy bien sabía Combes que ni Pío X ni nin-

gún otro Papa podía renunciar a la cuestión de principio en el asunto del poder temporal. La protesta de la Santa Sede era obligada. Pío X la dirigió confidencialmente a los Gobiernos católicos, y su carta fué comunicada al periódico de Jaurés por el príncipe de Mónaco, el cual, por caprichos de los tiempos, era izquierdista y partidario de Dreyfus. También en esto el «asunto» hizo acto de presencia. Merced a este incidente, Emilio Combes encontró el pretexto para la ruptura con la Iglesia.

Sin embargo, en el momento mismo de romper el Concordato había quienes se preguntaban si era prudente privarse de un instrumento tan cómodo, de empeñar combate con el clero y los fieles al mismo tiempo que se suprimía el principal elemento de ese anticlericalismo de Estado, cuya virtud electoral era manifiesta. Vacilábase entre el deseo de aplastar al viejo «enemigo», el de conservar aquel argumento del peligro clerical, y un cierto temor de provocar la guerra de religión; la expulsión de las Ordenes religiosas había dado ya lugar a resistencias aún más fuertes que las habidas en tiempos de Ferry. Recordábase también la opinión de los antiguos republicanos, Grévy entre otros, para quien la separación era una «locura». Toda una serie de hábitos y de recuerdos disuadían de forzar las cosas. En este respecto halló Combes todavía un placer: el caso de dos obispos brindóle al apasionado canonista ocasión de una controversia sobre el *nobis nominavit* con un cierto sabor de Edad Media. El Concordato ya no pudo resistir, y muy luego consumóse la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Pontífice.

Finalizaba el año 1904. Muchos republicanos estaban asustados de tanta ruina. Dos ministerios largos con sus mayorías estables habían causado más profundos desórdenes que una serie de gobiernos efímeros. La separación de la Iglesia y del Estado era inminente. La ley militar de 1899 estaba amenazada y no iba a durar mucho más que el Concordato. El socialismo se infiltraba en las leyes y organizábase el sindicalismo revolucionario. ¿Cómo remontar aquella pendiente? El partido radical socialista se había aferrado al Poder, consagrando para su provecho aquella sencilla máxima de que los puestos y los favores sólo debían otorgarse a los amigos, medida de gobierno ésta que había constituído ya la fuerza del segundo Imperio. Entretanto, los comités radicales controlaban las prefecturas. Los electos en las circunscripciones refractarias eran sustituídos por «delegados» o «comisiones gestoras». Se había tendido una red muy espesa, y los oportunistas, los moderados seguidores de Waldeck-Rousseau, se despertaban demasiado tarde; veíanse excluídos de la República, como ellos habían excluído antes a los conservadores, y entonces diéronse a hablar, a su vez, como los hombres del *orden moral*. Labori, uno de los abogados de Dreyfus, se arrepentía, y ante los escándalos financieros que resucitaban y ante los «mil millones» de las Congregaciones objeto del pillaje, exclamaban: «Hemos visto cómo los acontecimientos han engendrado la anarquía moral más completa que ha conocido este país desde hace medio siglo tal vez». El propio Waldeck se comparaba al filósofo que se cubre los ojos con el manto para morir.

Lamentos estériles. Lo destruído, bien destruído estaba, y el *combismo* tenía que dejar huellas indelebles.

No pereció por los destrozos que había causado; quizá hubiera durado aún más tiempo de no haber chocado con el honor, porque llegó a esa cosa indigna de fomentar la delación, y fomentarla en el Ejército. Cierto que era Waldeck quien había llamado al general André, cuyas *fichas* excitaron el desagrado. André continuaba en su depuración metódica del cuerpo de oficiales afectados por la cólera de Waldeck. Los republicanos viejos ya no podían reconocer la República en un sistema en que «el espionaje anónimo y oficial» se extendía por doquier. Los radicales gritaban que aquello era deshonrar el radicalismo: «¿En qué caverna nos encontramos?», exclamó Pablo Dumer el día en que André se gloriaba de haber aceptado el concurso de la masonería para calificar a los militares. Hombres que hasta entonces todo lo habían aprobado, sintieron ya la indignación, y Millerand abochornó a muchos al hablar de aquella «dominación abyecta». Pero no bastaron las palabras duras, y una acción lo fué todo: en su banco, en la Cámara, André fué abofeteado por el diputado nacionalista Syveton. Algunos días después presentaba la dimisión; pero Syveton murió en circunstancias misteriosas la víspera de su comparecencia ante la Sala de la Audiencia. El Ministerio Combes sobrevivió aún dos meses, hasta que, afectado por la defección de Brisson y la elección de Pablo Doumer para la presidencia de la Cámara, cayó el 19 de enero de 1905. Fué aquello un 9 de Thermidor más bajo, cuyo Barras se llamaba Rouvier.

Caído Robespierre, había continuado la Revolución. Caído Combes, continuó el radicalismo. Desde los tiempos, ya remotos, en que había entrado en la política, Rouvier, brutal en su materialismo, seguía pensando que todo podía hacerse con tal de que el dinero no padeciera. De cuanto acababa de ocurrir, todavía sacaba la conclusión de que, ciertamente, las delaciones habían indignado a las conciencias delicadas, e incluso en la Cámara se había formado una opinión en contra de estos repugnantes medios de gobierno; pero la masa de electores permanecía insensible. Tal vez se había halagado los instintos groseros; pero, en general, estaban satisfechos todos. El idealismo que forja al clérigo y al militar es lo más extraño que puede concebirse en el rústico y en el filisteo, y el horizonte de la política resultaba estrechamente aldeano. Para Rouvier, hombre de negocios y de Bolsa, que se gloriaba de haberle dado el carpetazo al haber vuelto a encerrar en su cartera el impuesto sobre la renta, sólo tenían importancia los intereses. Estaba acordado en todo a lo vulgar. Y he ahí que recibía en herencia la separación de la Iglesia y del Estado, y que la tradición del anticlerismo concebido como un medio de gobernar, le acomodaba perfectamente. Recogió una ley militar que destruía la de 1889 y el aligeramiento del plazo del servicio; restableciendo los dos años era una de esas comodidades presentes y palpables que la gente debía apreciar. El voto de ambas Cámaras fué casi unánime. Freycinet destruyó la obra de Freycinet.

La ley de los dos años fué votada en el mes de febrero de 1905, y la discusión de la ley de separación comenzó en el mes de marzo. Mientras se hacían estas cosas, fraguábase una tempestad.

Filisteo y rústico es también el ignorar el mundo exterior, y Combes se empeñaba en no conocerlo sino bajo un solo aspecto: el ultramontano. Rouvier, por su parte, lo veía exclusivamente por el bancario. Ni el uno ni el otro se ocupaban de la política extranjera, que la habían abandonado en manos de Delcassé. Muy conformista en lo concerniente a Dreyfus y al Papa, sin mayor curiosidad por lo que hacían sus colegas que la de ellos por lo que hacía él, aislado en su despacho del Quay d'Orsay, Teófilo Delcassé trabajaba por una Francia eterna. Su idea era simplista y, por lo tanto, fuerte. Convencido de que Alemania preparaba la guerra, no buscaba sino aliados, muchos aliados, todos los aliados posibles. Como resultado de esa guerra inminente, la Alsacia-Lorena volvería a Francia. Tan reservado como obstinado, Delcassé era un radical de aquella generación que no había renunciado a las provincias perdidas. Por eso se ha dicho de los ministerios de Waldeck y de Combes que su política era la de Dreyfus en el interior, y la de Déroulède en el exterior. Un día le preguntaron a Delcassé cómo había podido conciliar estos contrarios, y le oímos nosotros responder: «Yo permanecía para que la política internacional no siguiera un rumbo análogo al que André imprimía a sus asuntos de Guerra, y Pelletan a los de Marina».

Calcúlanse en Francia treinta mil familias militares que seguían dando sus oficiales al Ejército. Una

larga tradición de funcionarios del Estado mantenía en la Administración un personal selecto. Por ese lado no sólo eran contenidas las incursiones de la democracia, sino que todo cuanto tendía a hacer obra nacional encontraba vocaciones, caracteres e inteligencias. Así hubo una escuela de grandes embajadores: Pablo y Julio Cambon, Camilo Barrère, Pablo Revoil y otros todavía, que sirvieron a las ideas de Delcassé y prestaron su colaboración a este hombre tenaz. Y así fué que en los años de envilecimiento ignominioso en el interior, adquirió Francia sus alianzas y su Imperio. Italia, desligada de la Triple Alianza, ciento cincuenta años de rivalidad colonial con Inglaterra borrados, la conquista inmediata del pensamiento de Eduardo VII, la *Entente* forjada sobre el peligro alemán, el Protectorado de Marruecos perfilando el contorno del Africa francesa: tales fueron los resultados imprevistos de la independencia que Waldeck-Rousseau y Combes habían concedido a Teófilo Delcassé.

Estas consecuencias beneficiaron también a la República. La conquista de Marruecos le trajo aún mayores ventajas que la anterior expansión colonial; rehabilitó al régimen, excusó muchas cosas que sin ella hubieron sido insoportables, amainó la oposición cerrada de los elementos nobles y activos de la nación, dió a hombres de primer rango un empleo digno de ellos, y les permitió probar sus dotes de conquistadores y administradores. Lo mismo que Galliéni había creado Madagascar, Lyautey iba a crear Marruecos. No había sido abolida toda grandeza, y la más mezquina de las políticas hallábase asociada

a una obra de cuño superior. De esta suerte, según Renán, viene la beocia más espesa a mantener, mediante el impuesto, las letras, las ciencias y el arte, cuya necesidad ellos no sienten en absoluto.

Las alianzas dispuestas por Delcassé producían asimismo el efecto de dar altas satisfacciones al patriotismo, y estaban destinadas a ser para la República un motivo de orgullo antes de que fueran un instrumento de salvación. Lo cual no ocurrió tampoco sin un drama en el que, juntamente con el propio Delcassé esas alianzas estuvieron a punto de hundirse.

El año 1905 era crítico. Rusia, en guerra con el Japón, sufría defecciones que no solamente atentaban a su prestigio de coloso, sino que revelaban su debilidad. A consecuencia de estos desastres, la revolución amenazaba el régimen imperial. El valor político y militar de esta alianza resultaba, pues, muy menguado. Antes de que Rusia restableciera sus fuerzas, Alemania había intentado acabar y romper el círculo que formaba la *entente* de Francia con Inglaterra e Italia. Por otra parte, disponiendo de Marruecos, de mutuo acuerdo, el Gobierno francés y el Gobierno británico habían inferido un perjuicio a la política alemana. El 31 de marzo de 1905, Guillermo II, por instigación de su canciller, desembarcaba en Tánger y reivindicaba los derechos de Alemania. La guerra amenazaba en un momento en que el enemigo tenía sus razones para creer desmoralizada a Francia y maduro el fruto.

Tenaz, intrépido, confiado en la palabra de Eduardo VII, Delcassé permanecía firme, en tanto que sus colegas se alarmaban y se aprestaban a sacrificarlo. Emisarios alemanes llegaban hasta París y afirmaban que el continuar allí Delcassé era un peligro para la paz. En la Cámara, en el Senado, acogían con hostilidad al ministro, que pasaba ahora por un fautor de la guerra. Abandonado, traicionado por el mismo Rouvier, varias veces en trance de dimitir, él se aferraba a su puesto. El 6 de junio, tras una tentativa conminatoria del embajador alemán, Rouvier, en un Consejo patético, acusó con violencia al autor de la alianza con Inglaterra, que era, decía él, para Alemania una provocación y un desafío. Y, además, le lanzó el singular reproche de haber «seducido a Italia». El plan seguido por Delcassé en sus soledades era condenado, y sus alianzas rechazadas. Ninguno de los ministros tomó la palabra, y el Presidente Loubet permaneció silencioso; no hubo quien se alzase a defender al solitario campeón de la patria, sin pasado, sin tradiciones, venido de la lejana Ariège y llegado a la Diputación y al Poder a través de oscuros trabajos en los diarios radicales. En él se encarnaba el sentido nacional y él era quien había hecho política grande en tiempos mezquinos. Fué despedido con injurias. Un ministro francés recibió las gracias de parte de una Potencia extranjera; un joven periodista, Andrés Tardieu, calificó aquéllo de «humillación sin precedente». La frase tuvo su eco. Sintieron vergüenza. El sacrificio de Delcassé comenzaba a crear un sentimiento, y ya no era estéril. Quizá la República había de descender más todavía, pero nunca había bajado hasta donde entonces.

Cuatro días más tarde, esta escena tenía su réplica. Rouvier, en el ínterin, se había hecho cargo del

Ministerio de Negocios extranjeros, y recibía de nuevo la visita del embajador alemán, que le conminaba a someter a una conferencia general los derechos de Francia sobre Marruecos. La desautorización de Delcassé y la negativa a recurrir a la alianza de Inglaterra no servían sino para que Alemania se mostrase más exigente. Según testimonio de Paléologue, entonces director del Quay d'Orsay, esta revelación dejó «anonadado» a Rouvier.

La situación, en efecto, era dramática. Veíanse obligados a volver a la política exterior de Delcassé. Para hacerse fuertes contra Alemania y no quedar con ella en un mortal frente a frente, no cabía seguir otro camino que el de las alianzas. Entretanto, la política interior continuaba en la línea trazada por Waldeck y Combes, sin que se viera medio de rectificarla, y por ella se iba a todos los abandonos y al menor esfuerzo. Al sentido realista de Rouvier no se le ocultaba que el día en que se resolviera esta contradicción sería un día terrible.

XI

Frenando ante la catástrofe

Finalizaba la sexta presidencia. Emilio Loubet se gloriaba de su septenio, como puede verse en el diario de Abel Combarieu, su secretario principal. Gloriábase de haber cumplido lo mejor posible su misión en medio de tan difíciles circunstancias; sobre todo, de haberse esforzado por servir a la política de alianzas y por mantener buenas relaciones con el Emperador Nicolás y el Rey Eduardo, bien que luego tuvo buen cuidado de no asumir la defensa de Delcassé. Cierto que la política del bloque republicano le había ocasionado sus inquietudes, pero consiguió matarlas, y supo anularse detrás de Waldeck y Combes. Estos ministros autoritarios habían debilitado aún más la autoridad del Presidente.

Después de votar la ley del servicio por dos años, un senador, el general Billot, invocó el precepto constitucional que concedía al Jefe del Estado el derecho a exigir una segunda deliberación; pero el presidente del Senado le interrumpió con viveza: «No hay por qué hacer intervenir en esta discusión al Jefe del Estado, ni mucho menos apelar a él contra la voluntad

de las Cámaras». Esta doctrina negaba un derecho y un deber de la presidencia, pero estaba acorde con cuanto venía haciéndose desde varios años para no dejarle al primer magistrado sino un papel de figurón, a lo más una cierta influencia en el Consejo, si es que él era capaz de ejercerla. Aquel personaje senatorial, que tan a las claras sometía el Poder ejecutivo al legislativo, se llamaba Armando Fallières. Y él mismo se designaba para sucesor de Emilio Loubet.

Tratábase de un oportunista de opiniones moderadas, bien hallado con sus propiedades, un Julio Grévy de segunda categoría. Su contrincante fué un radical, mimado del pueblo e hijo de sus obras, que veía claros los peligros que corría Francia. Cuando Pablo Doumer invocaba la salud pública, producía el efecto de un aspirante al consulado. Las izquierdas se unieron contra él a la voz de Clemenceau, que ya había dado la investidura a Loubet y se la daba ahora a Fallières. Si lo que se pedía era una presidencia inactiva y sin relieve, pero que no ofreciera peligro alguno para el régimen, nada mejor que aquel republicano de viejo estilo que marcaba un retorno hacia los términos medios. No falló en Fallières la tradición de sus predecesores; como ellos, prometió «la protección de todos los derechos y la garantía de todas las libertades».

En este pensamiento vino a inspirarse el primer Ministerio que él nombró. Rouvier había caído en medio del tumulto. Aplicar la ley de Separación no era ya tan fácil como votarla, y la resistencia de los católicos comenzó a demostrar que se había querido ir demasiado lejos. Se había roto un Concordato sin

buscar transacciones con el Pontífice, pero el clero y los fieles subsistían, y era preciso hallar un medio de convivencia. Vino entonces el extrañarse de la *intransigencia* del Papa. Bajo el nombre de Asociaciones para el culto parecía ocultarse una nueva Constitución civil del clero, que se estrellaba contra la negativa de Pío X, que sacrificó la restitución de los bienes eclesiásticos a la unidad y pureza de la Iglesia. Por su parte, el ponente de la ley, convertido en su autor principal, no era de la casta de los Combes; él ignoraba en absoluto la Historia eclesiástica, el Derecho canónico y todas las cosas religiosas. Llamábase Arístides Briand, procedía del socialismo revolucionario, y, presto a aprovechar las circunstancias, ambicioso de una gran carrera, estaba libre de todo fanatismo. Puso todo su arte en contentar a los clericales y hacer aceptable la ley a los católicos. Probablemente él fué el primer sorprendido cuando un acto de procedimiento, destinado a impedir la sustracción fraudulenta del mobiliario de las iglesias y de los objetos del culto, pareció a los fieles una profanación; no se había respetado el sentimiento de las cosas sagradas y aparecía ya el signo material de la violación de las conciencias. Los creyentes se unieron para defender los tabernáculos, y corrió la sangre. Para llegar hasta el fin había que declarar una guerra de religión. La agitación cundió hasta el punto que acabaron por renunciar a tales inventarios. Batióse en retirada la incredulidad, y Clemenceau se excusó con esta salida de pie de banco: que el recuento de los cálices y candeleros no valía el sacrificio de una sola vida humana.

Allá en el fondo sentíase que todo iba a desmoronarse. El advenimiento de una democracia de verdad producía los efectos tanto tiempo temidos. Por todas partes el desorden hacía acto de presencia, socavando al Estado desconfiado incluso de sus mismos servidores. Todavía estaba de moda denunciar las andanzas de la reacción cuando ya la autoridad pública estaba abiertamente combatida por el sindicalismo revolucionario. El antimilitarismo minaba al Ejército. La Hacienda pública misma comenzaba a presentar signos de debilidad. La necesidad de proveer a las más elementales necesidades de la sociedad era manifiesta, y no era posible combatir de frente a una mayoría de izquierda que permanecía exigente y suspicaz. No quedaba más recurso que intentar rectificaciones parciales y confiar en el instinto de conservación para resistir a las fuerzas disolventes.

El presidente Fallières tuvo la agudeza de presentir que un primer ministro brillante no convenía al momento. Llamó a un hombre oscuro, Sarrieu, cuyo nombre se prestaba a un fácil juego de palabras y que debía gobernar con un equipo tan heterogéneo que el bloque no se reconocería en él. Poincaré entraba como ministro de Hacienda, ya señalado para restablecer situaciones vacilantes.

En cambio, Armando Fallières levantaba el veto que Loubet hiciera pesar sobre Clemenceau, y lo nombraba ministro del Interior. Nombramiento audaz, cuyos efectos hubieran escapado al calculador más profundo; con Clemenceau, el espíritu de contradicción llegaba al Poder en el preciso instante en que se había logrado aquel «máximum de República» que él había reclamado durante tanto tiempo, y comenzaba a desbordarse muy más allá de lo que podían desear los radicales más extremistas.

Ya en el Gobierno, Clemenceau dió el espectáculo de un hombre en guerra consigo mismo. ¿Acaso no era él la personificación de la República, que, nacida de la Revolución, tenía que disciplinarse para vivir? Se le tachó de incoherente, porque luchaba contra sus propios impulsos anárquicos. Sus cambios eran, al cabo, los de un régimen que giraba sin tregua para no perder el equilibrio. Había que compensar el «máximum de República» con el mínimum de orden. La línea tornadiza de Clemenceau respondía a esta necesidad.

El presidió las elecciones de 1906, elecciones que dieron tal mayoría a los radicales, que éstos pudieron, por fin, desentenderse del apoyo de los socialistas. Jefe del Ministerio a la dimisión de Sarrien, Clemenceau realizó la experiencia original de un Gobierno donde él lo era todo; rodeóse tan sólo de hombres adictos, y, en recuerdo del asunto Dreyfus, llamó al Ministerio de la Guerra al coronel Picquart. Creó también aquel Ministerio del Trabajo que, en 1848, pedía ya Luis Blanc; pero hizo detener a los secretarios de la Confederación de sindicatos que habían anunciado para el primero de mayo una manifestación. Reprimió las huelgas con ayuda de la fuerza armada, hizo que los funcionarios se reintegrasen al cumplimiento de sus deberes, y mantuvo contra ellos el principio del Estado soberano.

Por instinto, más que por método, iba bosquejando un Gobierno autoritario, de perfil jacobino,

bastante nacional, que daba de lado al pacifismo y demás utopías y hasta el anticlericalismo lo presentaba con un carácter galicano de lucha contra un Poder extranjero. La ley de Separación se ejecutaba sin que el culto fuera interrumpido, aunque alguna vez fué turbado; y mientras, se hacían registros en la antigua Nunciatura y se recogían papeles para probar la existencia de un complot «romano» contra la República. No es posible saber si Clemenceau creía en tales conjuraciones con aquella fe de Waldeck-Rousseau, o si continuaba bajo la influencia de sus lecturas de estudiante y de su idolatría por la Revolución francesa, o si, sencillamente, se limitaba a dar a los radicales esta satisfacción inofensiva en el momento en que les hacía romper con los socialistas y deshacer el bloque.

Ahora se encontraba ya «del otro lado de la barricada», y tocábale proteger las bases materiales de la sociedad burguesa y las condiciones de existencia de la nación. En el fondo no era difícil la tarea: fuera de algunos doctrinarios, nadie se aferraba a destruir un estado de cosas que ofrecía tantas comodidades y bienestar. En su controversia con Jaurés, a quien, irónico, concedió un plazo de cuatro meses para aportar el plano de la ciudad futura, Clemenceau tuvo de su parte a la gente de humor y a un país de propietarios. Aquella renta pagada con exactitud había creado muy dulces hábitos. Era muy grato ser radical socialista, es decir, un poco socialista, pero sin llegar al despojo ni al reparto. El ambiente confortable, el acomodo, la pequeña felicidad burguesa, todo ello se cotizaba casi al peso. Al elevar

las dietas parlamentarias desde veinticinco francos diarios, cifra que no había variado, desde la frase legendaria de Baudin, a quince mil francos anuales, diríase que las Cámaras venían a ofrecer a todos un sueño modestito, la mitad de la renta de ese «feliz millón», suma ideal de la burguesía, señalado ya por la ironía de Proudhon. ¡Qué error el de creer que aquello iba a hacer la impopularidad del Parlamento! La masa reflexionó, y no le parecieron caros los servicios particulares que ese Parlamento proporcionaba por una especie de contrato entre los electores y elegidos.

Era una tendencia ya invencible. Bien poco tiempo fué menester para que aquella República radical tornase a la concepción del bienestar terreno; de ello se encargó la misma papeleta electoral que otrora fortaleció la República oportunista. La pequeña propiedad, sostén de la mediana y de la grande, permanecía sagrada, y, mediante algunas subvenciones repartidas bajo varios pretextos, las gentes del campo iban dándose de grado al estatismo. Habría menos latinistas que en otros tiempos para leer a Horacio; pero el *modus agri non ita magnus* resonaba en los deseos de los más, y era una satisfacción ver al jefe del Estado bebiendo en su finca de Loupillon el vino de la propia viña. Sólo un reproche se le hacía: el de indultar por sistema a los condenados a muerte. La democracia no acusaba ya aquellos fervores de 1848. El socialismo progresaba según iba desembarazándose del lastre doctrinal, y se insinuaba en leyes que, al parecer, ninguna mudanza traían a las antiguas costumbres.

Las temidas convulsiones no se producían. Pero todo se debilitaba de una manera insensible. El propio Clemenceau era demasiado brusco para avenirse a este relajamiento general. Y he ahí que vino a caer por culpa de una de aquellas frases suyas mordaces que ese día dió en falso, porque acusó a Delcassé nada menos que de haber «humillado a Francia». Era una de esas salidas que él lanzaba sin otra razón que su desprecio hacia los hombres que osaban pagarle con la misma moneda. A la verdad, la caída no fué inesperada; sentíase la fatiga de su reinado, y aquellas maneras humoristas de bulevar y sombrero ladeado, chocaban con las provincias, y a menudo con el sentido común. Como la designación de Picquart para el Ministerio de la Guerra, el traslado de los restos de Emilio Zola al panteón había sido una especie de bravata. Reducir los períodos de instrucción de los reservistas después de haber reducido el plazo de servicio activo, ya era el antimilitarismo en acción más grave que los otros desafíos. Sin embargo, Clemenceau había detenido el desastre del Estado, y su acertada lengua no perdonó a quienes negaban la idea de la patria. Imitando a los oportunistas, cubiertos en otros tiempos por sus sarcasmos, él, a su vez, y como ellos, había retardado el curso de la democracia. Sino que, al encontrar el mal más enconado, debió combatir esa anarquía, que pugnaba en sí mismo, y cuyo nombre no se hurtaba él de pronunciar.

Bajo otras maneras, su sucesor vino a continuar la obra. Un murmullo halagador acogió la llegada de Arístides Briand. Este antiguo revolucionario, que

había hecho la ley de separación con cierta suavidad, no tenía prejuicios ni planes. Fué un simple golpe de instinto el que, en un discurso pronunciado en Périgueux, el mes de octubre de 1908, le hizo resucitar el tema del «nuevo espíritu» y prometer el término de las viejas luchas y la pacificación, mediante un tímido retorno a la República conservadora y a Spuller. Por de pronto, y ésta sí que era una novedad evidente, se asociaba a los reformistas.

Ya no se hablaba de revisar la Constitución; el radicalismo se había instalado en su seno y la encontraba confortable. Comenzaba a sentirse el vicio secreto del régimen, pero precisamente entonces ya no lo discutían las Cámaras. Y el régimen fué siguiendo la pendiente natural de las democracias, sin duda con mayor lentitud que la esperada, sino que esta tendencia del régimen a su verdad genuina parecióles a los republicanos, guardianes del sentido del interés público, una degeneración. El mandato se convierte en una profesión, decía Raimundo Poincaré, viendo cómo el Parlamento caía en manos de «políticos de carrera». Y en vez de acusar al sistema electivo, los buenos teorizantes soñaban en organizarlo y corregir sus abusos. El escrutinio por distritos, al enrarecer el ambiente político, parecía ser la causa del mal. La imagen de las «lagunas estancadas» empleada por Arístides Briand, evocaba los *burgos podridos* del antiguo parlamentarismo inglés. Cundió la idea de una reforma electoral con escrutinio de lista y representación proporcional, y renacieron las esperanzas: allí, los que soñando con una República mejor, querían de veras corregirla, y a su lado, los socialistas que

contaban con aumentar el número de sus diputados, merced a un escrutinio que favorecería a las minorías. No fué inútil aquella campaña en común a través de Francia; un jefe de Gobierno sutil y, según frase en boga, con antenas, les hacía eco.

El resultado de las elecciones de 1910 ofreció vestigios de ese movimiento de ideas. No hubo cambios notables en la fuerza numérica de los partidos, pero la Cámara se rejuvenecía con doscientos diputados nuevos. Los cuadros del partido radical presentaban una mayor holgura de movimientos. Sin duda, los caciques, es decir, los políticos profesionales denunciados por Raimundo Poincaré, fueron bastante poderosos para hacer abortar la reforma electoral, merced al Senado, que se había vuelto radical y guardián del radicalismo. Con todo, y esto era lo importante, esta legislatura permitió registrar un compás de espera, volver a una cierta templanza, tomar algunas medidas de interés nacional, sin las cuales cualquier peligro exterior hubiera encontrado a la República completamente desprevenida.

La amenaza de guerra crecía a cada instante. Desde 1905 no había pasado año sin el consabido alerta. Para amansar a Alemania, Francia había consentido en someter la cuestión de Marruecos a una Conferencia internacional. Ante los delegados de trece Estados, reunidos en Algeciras, los alemanes fueron rechazados en su demanda, y en minoría tal que solamente Austria votó con ellos. Fué entonces cuando Guillermo II juró no someter ya nunca a un Tribunal de potencias una cuestión en la que jugaran los intereses del Imperio. En 1908, un incidente fútil

en Casablanca, el cónsul de Alemania dando asilo a los desertores de la legión extranjera, estuvo a pique de promover el conflicto. Clemenceau se mantuvo firme, y por esta vez se alejó la tempestad. Pero, bajo una u otra forma, allí estaba el peligro presto a renacer. Para tranquilizarse procuraban pensar en el haz de alianzas y de amistades formado por Delcassé y sus colaboradores diplomáticos, o escuchaban a Jaurés, para quien la guerra era imposible, porque los socialistas alemanes se encargarían de impedirla.

Al decir de sus confidentes, Arístides Briand profesaba entonces esa doctrina esotérica de que la situación peligrosa de Francia tenía un lado bueno: que el miedo a Alemania obligaba a la República a moderarse y la impedía caer en la anarquía. Pero la razón y el patriotismo no se imponían por sí solos: era preciso ayudarles desde el Gobierno. En octubre de 1910 estalla una huelga ferroviaria que se califica de atentado a la defensa nacional, y, para cortarla, el presidente del Consejo toma una medida enérgica, movilizando el personal de las redes todas. Al dar cuenta de su éxito en la Cámara, Briand tuvo la audacia o la imprudencia de añadir que era un deber del Gobierno, en pro de la salud pública, el suplir las deficiencias de la ley. Esta apología de la ilegalidad hizo que la extrema izquierda le acusara de dictador, y, aunque conservó su mayoría, fué ya por poco tiempo. Aun para aquella Cámara, sus palabras habían sido demasiado fuertes.

Volvióse a los gobiernos radicales, que los socialistas tomaban bajo su patronato. El de un tal Monis, oscuro y sin autoridad, fué también la vuelta

a las debilidades ante el desorden. Un accidente de aviación que costó la vida al Ministro de la Guerra, Berteaux, abrevió este período de recaída. Sucedióles José Caillaux; pasado al partido radical socialista, se propuso, sin embargo, mantener la tradición jacobina del Estado autoritario, y en el exterior repetir la experiencia de Rouvier.

Ya Thiers pensaba que la Francia vencida no tenía otro camino que el del acuerdo con Alemania. Esta idea había tentado también, entre otros, a Gambetta y a Julio Ferry, aunque nadie lo confesaba con franqueza. La prueba de 1905 no había desanimado a José Caillaux. Creía él que Rouvier se había quedado a la mitad del camino, y que para conjurar la guerra bastaba con que Francia quisiese la paz. Su sistema tendía, en suma, a deshacer las alianzas. Pronto tuvo ocasión de aplicarlo.

En julio de 1911, para significar que mantenía sus pretensiones respecto de Marruecos, Alemania enviaba un cañonero frente a Agadir. Aquello era la repetición del caso de Tánger, provocación o sondeo, quizá una indicación para que Francia tuviera motivo para romper con Inglaterra. Claro que el Gobierno alemán dejaba ver una solución: renunciaba a disputarle a Francia el Protectorado de Marruecos, pero pedía una compensación colonial y sugirió la cesión a favor suyo de una parte del Congo. Una negativa podía desencadenar la guerra. Afrontando la protesta de Inglaterra contra un reparto de territorios africanos sin su consentimiento, José Caillaux se avino a tratar. Llevadas con habilidad por el embajador, Julio Cambon, las negociaciones, acabaron en una

concesión mínima, que a los nacionialistas alemanes les pareció irrisoria: «Francia —gritaba uno de sus jefes— nos concede diez mil millones de moscas tsétsé». Verdad es que una parte mucho mayor tampoco hubiera contentado a Alemania; necesitaba mucho más, y guardó de aquello la impresión no de un asunto resuelto, sino de un asunto fallido. La opinión francesa, instintivamente, lo advertía.

Y no es que, en sí, fuera humillante aquella transacción; con otro pueblo que el alemán hubiera sido una transacción razonable. En 1904, ¿no había abandonado Francia a favor de Inglaterra sus derechos en Egipto y en Terranova? El Congo, aunque allí se había distinguido Savorgnan de Brazza, valía, indudablemente, menos que la tierra de los faraones, donde Bonaparte había puesto la impronta de Francia. Muy pocos franceses había capaces de encontrar ni sobre el mapa mundi la situación del Congo. Pero la renuncia a un territorio, fuese el que fuese, reavivaba la idea de las provincias perdidas y hacía temer nuevas exigencias. El don funesto de la impopularidad se le venía a José Caillaux como en otros tiempos a Ferry. Clemenceau había derribado a Ferry por una política colonial que, a trueque de adquirir un dominio en Asia, parecía comprometer los grandes intereses de Francia en Europa; y también derribó luego a Caillaux, porque enajenaba pedazos de otro dominio en Africa, y, sobre todo, porque enredaba a Francia en un sistema de concesiones respecto de Alemania. Sobre las cuestiones que Clemenceau planteó en el Senado, el ministro de Negocios extranjeros de Selves dejó entender que el presidente del Con-

sejo había tratado en secreto con el Gobierno alemán, y, a consecuencia de esta declaración, dimitió. No fué más lenta la caída de José Caillaux.

El sucesor fué designado por Clemenceau, siempre en contradicción consigo mismo. Si alguien había que le desagradara, después del que acababa de hundir, era Raimundo Poincaré. Sin embargo, le designó como el único que debía asumir el Poder, y el Presidente Fallières siguió esta indicación. Ya entonces el nombre de Poincaré representaba valores que no aportaban los demás.

Pero el signo demoníaco seguía manifestándose. En otros tiempos, hubiérase dicho que el genio de la República estaba siempre a punto para suscitar al hombre capaz de restablecer las situaciones comprometidas. Los griegos se hubieran preguntado si no era esta designación una inspiración de la divinidad. En todo caso, sí era un sentimiento certero de lo oportuno. «Los políticos —escribe Seignobos— juzgaron necesario dar al extranjero la impresión de una Francia unida en un Gobierno firme y respetado». Este mismo autor observa, no sin intención de censura, que el nuevo presidente del Consejo ya no hablaba de la «defensa laica» ni de «reformas fiscales sociales y democráticas» reclamadas algunos meses antes por el Congreso radical. Lo que él se proponía era simplemente «no dejar a Francia al descubierto frente al extranjero». En otros términos, el instinto de conservación aconsejaba frenar las experiencias peligrosas, la desmoralización y la caída, y poner al país en condiciones de resistir a las fuerzas hostiles de fuera.

Los acontecimientos del año 1912 exigían esta rectificación. Europa entraba en efervescencia y se producían novedades extrañas. La guerra de los Balcanes, la derrota inesperada de Turquía, la victoria de los pueblos eslavos quebrantaban la posición de Austria y alarmaban a Alemania. Como tantas veces en la historia, las cuestiones de Oriente y las de la Europa Central venían en sus vibraciones a repercutir en Francia. Si entonces Francia no hubiera contado con un Gobierno «firme y respetado», si no hubiera hecho un alto en su delicuescencia, seguramente los peligros cercanos hubieran sido más graves todavía. Marcóse el compás de espera. Un largo debate sobre la reforma electoral, votado por la Cámara y rechazado por el Senado, sirvió para desviar la atención de otras reformas que sólo eran útiles para debilitar más la Hacienda. Durante este tiempo, Poincaré, que se había encargado de la cartera de Negocios extranjeros, vigilaba la marcha e intervenía útilmente a fin de lograr lo que los diplomáticos llaman «localizar el conflicto». Por lo menos, lo aplazaba. Las iniciativas del Gobierno francés, sus esfuerzos de mediación en armonía con Inglaterra y con Rusia, habían descartado la guerra general. Lo que no podía era abolir las causas que, dos años más tarde, determinarían el ataque alemán a sus vecinos. Se había ganado tiempo, y esto ya era mucho; sólo quedaba el emplear bien ese plazo de gracia.

En los comienzos del año 1913, Armando Fallières terminaba su septenio. Bajo una espesa envoltura, ocultaba él cierto tino y moderación en el fondo. Su exagerado temor a las responsabilidades no le

aconsejaba siempre mal; y así, manejando con prudencia su balancín, había llegado hasta este Ministerio Poincaré, que ni imaginarse hubiera podido en los tiempos de Waldeck y Combes. Sería exagerado decir que esta presidencia, de tipo demasiado simple, fuera reparadora; pero probablemente sacó todo el partido posible de una Cámara que, inmediata a la del bloque de izquierdas, era también la menos mala que podía obtenerse.

Tampoco cabía pretender que esa presidencia hubiera pecado por demasiado ruido. Sentíase de tiempo la necesidad de darle un poco de tono y de acento a Francia; y Armando Fallières, al encargar del Gobierno a Poincaré, demostraba haber pulsado la opinión, que expresaban la prensa y el público, y que había franqueado los muros del Elíseo y los del Parlamento. El país continuaba pidiendo vigilancia y firmeza en la gestión de los asuntos extranjeros, y era sabido que un lorenés, un hombre de frontera, poseía, más claro que cualquier otro, el sentido del peligro. La actitud de Raimundo Poincaré en el Poder había respondido a las esperanzas en él puestas, y, por ello, se formó una corriente de opinión que le designaba como sucesor de Fallières, y era una corriente de fuera. Esto último hizo que fuera combatida en las Cámaras por quienes guardaban cierta prevención contra las candidaturas brillantes, y en un Presidente tan popular temían una dictadura. Desdiciéndose de la investidura que algunos meses antes le había otorgado a Poincaré, Clemenceau le opuso un rival. Pero esta vez, el facedor de reyes no fué escuchado y subió un Presidente elegido, no por la decisión de los grupos parlamentarios, sino por el clamor de la prensa y del público.

Respetuoso hasta el escrúpulo con la Constitución y con los modos constitucionales, nadie menos tentado que Poincaré a abusar de su función. Ni siquiera intentó resucitar los derechos que la Presidencia había perdido: los consideraba ya como prescritos. Lo que hizo fué actuar con su influencia, su persuasión y su consejo. Una cosa había que hacer sin demora, y el estado de opinión y la disposición de las Cámaras la hacían posible. Públicas o secretas, todas las noticias demostraban que Alemania se preparaba a la guerra; importaba poner a Francia en condiciones de resistir a la invasión y de hacer frente a la superioridad numérica del enemigo. En 1905 se había dicho que la ley militar estableciendo el servicio militar durante dos años constituiría «la nación armada» por el número y por el valor de las reservas. Pero muy pronto se había debilitado el propósito, y los períodos de instrucción de los reservistas habían sido reducidos. Lo cierto era que solamente el retorno a la ley de los tres años permitía cubrir la frontera. Arístides Briand, llamado al Gobierno, fué derribado a causa de la reforma electoral, a la que seguía refractario el Senado, antes de haber restablecido en sus líneas fundamentales el sistema militar de 1889. Sucedióle Luis Barthou, el cual se propuso como tarea el robustecimiento del Ejército, y, no sin resistencias y luchas, obtuvo el voto del Parlamento en julio de 1913. Aún era tiempo.

Luis Barthou había entrado en la política en las jornadas siguientes a lo del Panamá. Como el propio

Raimundo Poincaré, había sido uno de esos hombres jóvenes que venían a renovar un personal desacreditado. Procedente de las filas de los moderados, ministro de Méline, ministro de Clemenceau, era una especie de independiente que escapaba al cuadro de los partidos, lo mismo que Arístides Briand, salido del socialismo. Ya la elección de Poincaré y el crédito de la representación proporcional indicaban una tendencia a romper esos cuadros. El partido radical sintióse amenazado por esta especie de liberación de una fracción del mundo político; él podía en todo tiempo rehacerse de una derrota electoral, con tal de que la disciplina de izquierda no sufriese mengua. Pero ahora estaba quebrantada. Para ser un verdadero republicano requeríase ya algo más que dar pasto al laicismo, y quizá pareció mayor crimen emanciparse que moderarse. He aquí por qué surgió entre los hombres una lucha más encarnizada que entre clanes o grupos.

Agotado su crédito con haber hecho votar la ley de los tres años, Luis Barthou fué derribado por la cuestión de la inmunidad de la renta. En realidad era otra la cuestión. El radicalismo sentía la comezón, la urgencia de volver al Poder antes de las elecciones. e impuso uno de sus hombres de confianza a Poincaré como una especie de vigilante. Este delegado de la izquierda pura se llamaba Gaston Doumergue. Parecía llegado para ejercer la tutela del Presidente elegido contra la voluntad del bloque, y se apresuró a elegir colaboradores tales como José Caillaux y Renato Renoult. Los ciudadanos pacíficos se echaron a temblar. París ridiculizaba al militante de Gard, que,

con su acento de sinceridad, rechazaba con horror las voces de la derecha. No había sino aguardar un poco para ver la metamorfosis.

Los amenazados entonces de ostracismo por el partido radical, se defendieron: ni Briand ni Barthou se avenían a ser lanzados de la República como Millerand, y como el propio Doumergue había de serlo un día. El punto débil del partido radical era la impopularidad de José Caillaux, y atacaron en la tribuna e hicieron atacar en la prensa al que Briand llamaba el «plutócrata demagogo». Se acercaba el drama. La tarde del 16 de marzo de 1914 corrió por París la noticia de que, para vengar a su marido y detener la publicación de unas cartas comprometedoras, la esposa del ministro de Hacienda había matado al director del *Fígaro*, Gaston Calmette.

Aquella sangre vertida pareció un presagio, como el asesinato de Víctor Noir por Pedro Bonaparte algunos meses antes de la otra guerra. Como entonces, tampoco la indignación franqueó los límites del mundo parisién. El 10 de enero de 1870, un Príncipe de la familia reinante había disparado y muerto a un periodista, y el 8 de mayo un plebiscito daba todavía más de siete millones de votos al Imperio. No pesó ahora más en la balanza electoral este asesinato de Gaston Calmette. El mes de mayo de 1914 fué tan triunfal para el radicalismo avanzado como el mes de mayo de 1870 lo había sido para el Imperio.

El bloque de izquierdas había rectificado, yendo a las elecciones con esta consigna, cuya virtud ofrecía ya cuarenta años de prueba: la paz. Al elector

crédulo se le hizo ver que la guerra era imposible, que los camaradas de la «social-democracia» alemana la impedirían, después de su juramento de oponerse a ella. Añadíase que el armarse Francia era una locura que serviría tan sólo para provocar a Guillermo II y enriquecer a los fabricantes de cañones, y que el servicio por tres años era un sacrificio inútil que se exigía al pueblo. Con este programa fueron elegidos más de cien socialistas. El de los radicales, vueltos en masa, no era muy diferente del otro. Jamás la República había llegado tan lejos en su demagogia.

Esta Cámara no tuvo tiempo a dar su tónica. La guerra se lo impidió; es indudable que si Alemania retrasa dos o tres años el ataque, la defensa nacional se hubiera encontrado gravemente debilitada. Preocupado con salvarla y salvar la obra militar debida a la Cámara anterior, Raimundo Poincaré intentó, al menos, designando a Ribot para el Ministerio, formar un Gobierno sin color político con la misión de consagrarse a los grandes intereses de Francia. Ribot fué derribado el mismo día que se presentó, y sus alusiones al peligro exterior fueron acogidas con bromas. Había que buscar, pues, un hombre grato a las izquierdas y con espíritu bastante abierto para darse cuenta de la realidad del peligro. Poincaré, al fin, encontró a un socialista independiente, Viviani, que, habiendo leído los informes confidenciales de los agentes franceses en el extranjero, comprendió que la guerra estaba a las puertas. ¡Si hubiera sido posible comunicar aquellos despachos diplomáticos a seiscientos diputados y a diez millones de electores!

En resumen: cuando repasamos los acontecimientos que van sucediéndose desde Waldeck y Combes, vemos que en el momento supremo fué todavía posible contener la democracia. Desde 1902, esa democracia había sufrido sus interrupciones. Las alianzas concertadas por Delcassé subsistían. Ni el ejército estaba destruído ni el Estado disuelto, ni puede decirse que las fuerzas morales estuviesen descompuestas. Quedaban bastantes hombres de aquella generación que habían asistido a la derrota o que habían crecido con el recuerdo vivo de 1870. En el Poder o en la oposición, su palabra mantenía lo esencial y evitaba los grandes abandonos. En esos años de delicuescencia, se había producido, incluso, un despertar del sentimiento nacional. La crítica del régimen, hecha entre los intelectuales, entre los escritores, en el seno de las minorías selectas e independientes, había beneficiado a la República, que, triunfante por la elección y entregada a sí misma, exponíase a perecer por sus propios excesos. En fin, los republicanos y los que muchas veces parecen los menos dispuestos, se habían encontrado todavía para diferir la progresión del mal.

No cabía decir que el plazo habido antes de la catástrofe se hubiera empleado tan bien como era menester. Pero había actuado un freno, que no había sido inútil. Ese freno iba a permitir que la República resistiera a la prueba tan temida desde el principio por partidarios y adversarios.

XII

La prueba de la guerra

El partido socialista contaba, a la sazón, con un hombre de espíritu, un «enfant terrible» que encerraba a la República en un dilema: «Este régimen —decía— no es capaz de sostener una guerra, no es para la guerra para lo que fué creado; debe, pues, o evitarla a toda costa o ceder el puesto a otras instituciones». El libro de Marcelo Sembat conteníase en este título: «Haced un Rey o haced la paz».

Por su parte, muchos republicanos, cuya dialéctica no gustaba de ironías, experimentaban serias inquietudes; por lo menos, quedábales una duda. Gabriel Hanotaux, el historiador de los primeros años de la República, al pesar las cualidades y los defectos de la Constitución de 1875, había escrito: «Esta Constitución quizá no pueda adaptarse a las crisis en que peligre la suerte de la Patria. No prevé el peligro exterior». Y había llegado a formular esta pregunta: «¿Qué sucederá, en la paz o en la guerra, el día que, de pronto, hayan de tenderse en un esfuerzo supremo todos los resortes nacionales para cubrir la frontera o salvar el alma del país?». La respuesta quedaba en el aire.

Para el enemigo sí era clara. No creía capaz a una democracia de imponer la disciplina militar, y preveía una revolución en cuanto se ordenara en Francia una movilización general. El 31 de julio de 1914 consumábase lo irreparable: Alemania echaba sus «dados de hierro». La tarde de ese mismo día, un joven asesinaba en un restaurante a Juan Jaurés. Inmediatamente, las agencias alemanas difundían el rumor de que París estaba a sangre y fuego, y que en el Elíseo ondeaba la bandera roja.

Una ilusión. Muchos peligros se cernían en aquel momento, pero el más grave era de tal naturaleza que no podía adivinarse. Desde siempre, los republicanos habían temido el derrumbamiento del régimen en caso de derrota o la dictadura de un general en caso de victoria. Lo que no había imaginado nadie era una guerra que iba a durar más de cuatro años antes de producir un resultado u otro; nadie hubiera tenido por verosímil semejante hipótesis, y mucho menos la de que una prueba tan larga sería soportada sin un desfallecimiento de muerte en el interior.

La marcha hacia la frontera se hizo con orden y con entusiasmo patriótico. Cierto que las circunstancias no permitían otra cosa. Por mucho que se haya hecho después para oscurecer la cuestión de las responsabilidades, el 2 de agosto de 1914, día de la movilización, estaba muy clara: Alemania imponía la guerra y había que sufrirla. ¿Contra quién? ¿Contra qué revolverse? Un cierto «carnet B» contenía los nombres de los sindicalistas peligrosos, cuyo arresto estaba previsto en caso de guerra. No fué necesario utilizarlo. En cuanto a la Cámara, cuya mayoría

había sido elegida para protestar contra el servicio trienal y la «locura de los armamentos», ahora ya no le restaba otro camino que aceptar lo inevitable y emplear su celo en procurar a los combatientes las armas de que carecían.

No era aquella la hora de las cuentas, y la democracia no podía encararse sino consigo misma. En la temible colisión, todo surtía sus buenos o sus malos efectos. Se había conservado un ejército, unos jefes, unas alianzas, y por eso el primer choque no produjo el aniquilamiento que podía temerse; mucho se había destruído o descuidado, y el efecto fué una frontera abierta a la invasión. La victoria del Marne salvó al país de un cataclismo inminente. Después de esa victoria es cuando hizo falta lo indispensable para echar al enemigo del territorio, bien que, de haber contado con lo indispensable, quizá no hubiera llegado la invasión. En todo caso, cosechábase el bien sembrado, y se expiaba el mal hecho.

Algo sí era evidente desde la ruptura de las hostilidades: la tregua en las luchas políticas, que resultaban funestas y se borraron ante el peligro común, y aquella «unión sagrada», unión precaria ciertamente, en que se estrecharon los partidos. No era probable que esa buena voluntad de los primeros días se mantuviera mucho tiempo con el mismo ardor: fuera pedir demasiado a los hombres; pero la «monarquía de la guerra», en frase de Carlos Maurras, imponía la disciplina. La presencia del enemigo sobre el suelo nacional no permitía recaer en los malos hábitos. Un temor restaba: que la democracia sucumbiera a la laxitud de una lucha demasiado penosa

y demasiado larga, si bien concertábanse varias circunstancias para guardarla de sí misma. Desde el comienzo, el Gobierno de la República se había comprometido con sus aliados a no firmar por sí solo paz alguna, y era verosímil que Inglaterra prosiguiese hasta el resultado final la guerra en que había entrado. La mezcla sobre el suelo francés de sus soldados y los nuestros constituía un seguro contra cualquier debilidad suya o nuestra, y la causa de Bélgica acababa de hacer indisoluble el vínculo. Y lo que tal vez era aún más importante: hasta el término de las hostilidades, mejor dicho, de la desmovilización, no podían celebrarse elecciones. Un simple artículo de las leyes orgánicas, el que excluía del derecho electoral a todos los militares en filas, suprimía el riesgo de las consultas populares. El ejercicio de la democracia quedaba suspendido. La libertad de prensa sufría análoga suspensión por la censura. El régimen estaba defendido, pues, contra su frágil complexión.

Y, sin embargo, el impulso dado a la guerra todavía estaba muy subordinado al Gobierno y a los hombres que lo integraban. La voluntad podía ceder. La guerra, con sus inmensos sacrificios, duraba más allá de lo que parecía soportable, y no se veía aún el fin. El milagro del Marne no bastaba. El gran milagro hubiera sido que la energía no decayera, que las antiguas ideas y los antiguos hábitos no reapareciesen. El personal político no había cambiado, y era inconcebible otro más inepto para llevar una gran guerra. Los ministros iban gastándose uno tras uno y dando su nota común: ese espíritu de patriotismo

sincero al principio y luego más ficticio a medida que se alejaba la victoria. Briand sucedía a Viviani, y Ribot a Briand. Y los meses también se sucedían, y comenzábase a dudar del resultado de la lucha, y flaqueaba la moral, y todo comenzaba a ceder. Aparecían síntomas de desaliento, y si algo había que extrañar era su tardía aparición. En la Cámara, los comités secretos, cuyas referencias eran divulgadas demasiado a menudo, se dejaban llevar del pesimismo. Y así se llegó al año 1917, al que Raimundo Poincaré, en sus Memorias, llama «el año turbio».

Llegó la situación a tal extremo, que por doquiera asomaba el desastre. En el mes de marzo, la revolución rusa había producido su efecto desmoralizador. Alguien se esforzó por demostrar que, a semejanza de la francesa, aquella revolución reanimaría las energías bélicas; pero bien se advertía el fin de la alianza y la suprema decepción, la última de todas, que iba a causar el gran auxiliar del Este. Por otra parte, Alemania intentaba hacia todos lados la iniciación de la paz; sus socialistas procuraban ganarse a los de los otros países, invitados todos en Estocolmo para examinar los medios de acabar con la guerra. Al mismo tiempo, sirviéndose de toda clase de intermediarios, las intrigas diplomáticas seguían su urdimbre en los países neutrales. Arístides Briand, deseoso de volver al Poder y de presidir la paz, dejóse llevar de una de ellas con el alemán Lancken. Ribot, entonces presidente del Consejo, acusaba su embarazo y vacilación, y con intenciones indecisas de severidad, dejaba hacer: «Hay que estar conforme con la Cámara», pensaba. Esta necesidad, que, al fin,

sólo era una, contribuía a la debilidad del Gobierno. Lo que era forzoso temer estaba a punto de producirse.

La situación se agravó por momentos. La paz ya era pedida a voces. Los soldados, extenuados por el esfuerzo y el sufrimiento, y bajo los efectos de la propaganda socialista, comenzaban a dar oídos a los agitadores. Estallaron revueltas en el Ejército, y hubo que atajarlas con escarmientos ejemplares. Por un instante, se estuvo al borde de la catástrofe, mientras cundía la confusión. Sin declaración abierta, formábase un partido pacifista con muchos de aquellos que veían desmentidas por los hechos sus previsiones: los que habían dicho que la guerra era imposible, los que habían aconsejado ceder siempre a las exigencias de Alemania. Las ideas de José Caillaux hallaban de nuevo acogida y contaban con periódicos a su servicio y con subvenciones y apoyos para tales periódicos. Y así surgió el caso del *Bonnet rouge*, que reveló toda una red de complicidades. Entretanto, multiplicábanse los casos de traición, de espionaje, de excitación de los militares a la revuelta, y o no eran reprimidos o era muy débil la represión. Un tercio de la Cámara, al decir de todos, deseaba la paz inmediata. Entre los políticos, más de uno cerraba los ojos ante los actos de quienes hoy eran los sediciosos y mañana podían ser los dueños de la situación. Fueron unos meses, en los que nos preguntábamos con el historiador: ¿servía aquella Constitución para conjurar las crisis en que se jugara la suerte de la patria?

Desde su puesto, Raimundo Poincaré veía, alarmado, los progresos de esta descomposición. El parlamentarismo, que se había impuesto incluso a la salud pública, todavía le obligó a dar a Ribot un sucesor más débil aún que el propio Ribot. Corroído de incertidumbres y dudas, impulsivo, accesible a todas las influencias, Pablo Painlevé tenía más inspiraciones desdichadas que felices. Con él la marcha de la guerra tendía a reproducir aquel otro momento de la guerra de 1870, con los improvisadores del Gobierno de defensa nacional. En medio de aquel desorden trágico cayóse en el ridículo de fingir la creencia en un complot monárquico, el llamado «complot de las panoplias». Se iba cayendo cada vez más bajo en la confusión.

Ni por un instante pensó Raimundo Poincaré en salirse de su marco constitucional ni servirse de las circunstancias y del prestigio que la habían traído a la Presidencia para formar un Gobierno de excepción. Tratábase de encontrar por los medios normales y parlamentarios al hombre capaz de restablecer el orden y salvar una situación comprometida. La voz pública señalaba uno; pero, ¡qué de objeciones se presentaban contra él!, ¡qué de razones para la desconfianza había dado él mismo!, ¡qué aventurado resultaba el llamamiento a Clemenceau! Nadie, quizá, dentro de la «unión sagrada», había dado pruebas de peor disciplina. Su patriotismo no había podido sobreponerse a sus prejuicios libertarios contra los generales. Habíase creído en el derecho a decirlo todo, a no guardar consideraciones a nada, a censurar actos y ridiculizar hombres, a predicar la guerra a ultranza y declarar que todo estaba perdi-

do, a conminar a los soldados a defender la patria y hacer objeto de mofa a los jefes. La censura había prohibido su periódico *El hombre libre,* y el periódico reapareció bajo este título provocativo: *El hombre encadenado.* Recordando a aquel otro cuyas agrias murmuraciones habían derrotado delante de Troya el ejército griego, un día, de muy alto, se le daba el mote de Thersite.

Solo, en su hervor de anarquía, Clemenceau tenía, sin embargo, el suficiente genio para reanimar todos aquellos desalientos, la suficiente autoridad para que la Cámara volviera a su deber, el suficiente vigor para mantener tenso el arco. Aquella hora pedía un hombre extremado, y él lo era. Raimundo Poincaré lo comprendió así, y fué lo bastante generoso para olvidar las injurias recibidas. Con la designación de Clemenceau, el genio de la República demostraba que aún velaba por ella. Cierto que aquel hombre tenía defectos de fondo que lo hacían peligroso, cierto que la experiencia era arriesgada, pero era la última que podía intentarse. De no recurrir a ella, el régimen, dándole la razón a Marcelo Sembat, debía confesar su impotencia para sostener la guerra y salvar el país.

Como en 1871, cuando la aparición de Thiers, el país entregaba su suerte y los franceses ponían su confianza en un viejo; como si esa vejez y vecindad de la muerte vinieran a ofrecer las garantías de desinterés y de consagración al bien público, que en otros fallaban. Bien que el llamamiento de Clemenceau al Poder significaba que la desmoralización todavía no había alcanzado a la cima suprema del Estado, que aún ardía una llama en el Elíseo. La Presidencia rindió entonces un servicio eminente que tal vez de ningún otro titular cupiera esperarlo con la misma certidumbre. Raimundo Poincaré era Presidente porque en las elecciones de 1913 se tuvo en cuenta la obra llevada a cabo en el Gobierno cuya puerta le abriera Clemenceau después de Agadir. Clemenceau, entonces, había pospuesto Caillaux a Poincaré. Poincaré, ahora, lo posponía a Clemenceau. Las cosas, pues, resultaban bastante simples.

Y simple era también la divisa de Clemenceau, que, de golpe, lo elevó al Olimpo. Por todo programa, se limitó casi a estas palabras: «Yo hago la guerra». Y la hizo.

Si en aquel año 1918, cuando los alemanes se lanzaron a sus últimos ataques, no llega a restablecerse la disciplina ni se aleja la intriga ni se reprime la traición, la derrota y la catástrofe eran inminentes. En aquel trance urgía tomar resoluciones a rajatabla, cortando toda intriga, toda vana crítica, toda desconfianza tardía. Pero ya Clemenceau había espantado y dispersado a los elementos díscolos y nocivos, decidiendo el proceso contra José Caillaux y Juan Luis Malvy, que fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas más morales que aflictivas, sobre todo el segundo, por haber faltado como ministro del Interior a los deberes de su cargo. Aquello era un recuerdo muy atenuado, una forma casi simbólica del Terror. El viejo admirador de la Convención estaba allí de nuevo; Clemenceau había aprendido del Comité de la Salud pública que la au-

toridad firme y las medidas de excepción en el interior eran la condición de la victoria.

Y la victoria llegó, por fin, el 11 de noviembre de 1918. Inútil decir a costa de qué dispendios, de qué sacrificios. Pero entre tantos acontecimientos como acababan de presenciarse, acontecimientos que, de haberlos anunciado algún profeta, hubieran parecido increíbles, el más asombroso y ya el último imaginable era que, después de tan formidables sacudidas, el régimen iba a seguir subsistiendo exactamente como funcionaba, y sin mudarle una jota a la Constitución... Y se había dichó, ¡cuántas veces!, que el general que reconquistase a la Alsacia y la Lorena sería el dueño de los destinos de Francia.

El mundo político apenas se había rejuvenecido. Los partidos volvían a acomodarse en sus cuadros de antaño. Un solo pormenor sabía a novedad: los deseos de un cierto cambio cristalizaron en la representación proporcional, que en las elecciones habidas un año después del armisticio contribuyó al éxito de una mayoría nacional. En resumen, que después de cincuenta años seguía bastando el desplazamiento de algunos cientos de miles de votos para modificar el carácter de las Cámaras. Muchos de los elegidos en el año 1914 sucumbieron; la gente se acordaba de aquello de «la locura de los armamentos». Pero esta Cámara del día siguiente a la guerra, Cámara nacional y «azul horizonte» (1), tenía buenos deseos y pocas ideas. Una Cámara tan tímida que, al terminar la magistratura de Raimundo Poincaré no fué capaz de llevar a la Presidencia a Clemenceau. Los unos le hicieron pagar con ello las decepciones de la paz, los otros no quisieron perdonarle su anticlericalismo inveterado, y aun los había que querían prevenirse contra aquellos «terribles defectos» y aquel «inmenso orgullo» que Clemenceau había mostrado en el curso de su romántica carrera. Derrotado por Pablo Deschanel, se atrincheró hasta su muerte en un desprecio altivo. Así terminaba, tras breve apoteosis, la asombrosa trayectoria descrita a través de medio siglo por el hombre que había reclamado el «máximum» de República para acabar detestando a la democracia.

(1) Calificativo dado a esta Cámara por León Daudet, miembro de la misma como diputado monárquico por París.—(N. del T.)

¿Qué hubiera traído la Presidencia de Clemenceau? Era ésta una experiencia que la República no quiso intentar. Se hubiera erizado de unas maneras tan originales como autoritarias. La República, empero, lo repudiaba después de haberlo utilizado en caso de apuro: lo que había hecho ya un día con Gambetta. Fué el miedo a un *individuo*, el miedo a una aventura. Su instinto seguía llevándole a los términos medios, como si su duración dependiese ineludiblemente de este evitar todo movimiento brusco.

XIII

El instinto de conservación

Todo parecía tal como antes, y el mundo de la guerra ya pasado. La República era como los hombres: para durar debía adaptarse a las nuevas condiciones de existencia que iban advirtiéndose poco a poco y que no permitían muchos yerros.

Eran días penosos los que se avecinaban, y creían las gentes que iba a abrirse una era de felicidad. Francia era la victoriosa. Había recuperado la Alsacia-Lorena, algo que la República jamás había prometido y que ya ni esperaba recuperar. Cierto que pesaban sobre ella muy graves cargas, pero el Tratado las había convertido en «reparaciones» a cargo del agresor castigado. Y, sobre todo, el período que se iniciaba parecía traer un alivio inmenso. Alemania estaba vencida, su militarismo destruído, destronado su Emperador. Por largos años, quizá ya por siempre, dejaba de ser la nación temible; por lo menos ésta era la ilusión. Francia ya no era el país amenazado por «un puñal a diez centímetros del corazón», y, aunque la política internacional ofrecía aún muchos problemas que resolver, ninguno encerraba un

peligro inmediato. En el fondo, lo único problemático era el porvenir; esto contribuía a un retorno al mínimo esfuerzo, y la virtud electoral de la palabra «paz» estaba bastante confirmada y asegurada para que recurriesen a ella los partidos de izquierda en su reconquista del Poder.

Para estropear a cualquier adversario político, lo infalible era acusarle de querer la guerra, por absurda que fuese la imputación. Arístides Briand supo comprenderlo esto muy bien. Las imprudentes entrevistas habidas en 1917 le habían dejado algún sinsabor de conciencia y le movían a justificarse buscando nuevas ocasiones de acercamiento a Alemania. Había vuelto al Ministerio de Negocios extranjeros un año después de la caída de Clemenceau, pues los elegidos del «bloque nacional», en su mayoría procedentes de los medios conservadores apartados durante tanto tiempo de la vida pública y como intimidados por este brusco retorno a la luz, habían dejado los puestos principales en manos de los políticos de siempre. En 1922, en la Conferencia de Cannes, bajo las sugerencias de Lloyd George, muy afines con sus propias tendencias, Arístides había dado de barato los derechos que Francia tenía por el Tratado de Versalles. Abucheado por la Cámara, llamado por telégrafo, desautorizado, humillado, la amargura le volvía al otro campo, donde el hombre adoptó la actitud del incomprendido y perseguido por los enemigos de la paz. Su nombre convirtióse para las izquierdas en un signo de unión y de propaganda.

Raimundo Poincaré, que vino a reemplazarlo para reafirmar la política francesa, decidió la ocupación

de la cuenca del Rhur como prenda de las reparaciones que Alemania debía y no pagaba. La operación se efectuó sin más preámbulos, e indudablemente señaló el apogeo del poderío francés. Al mismo tiempo, parecía que Alemania marchaba al caos y a la ruina, como si fuere su sino hundirse cada vez que Francia se encumbraba. Muy pronto, sin embargo, la suerte de ambos países iba a entrar en una fase nueva.

En Francia se aproximaban las elecciones. Los «nacionales», contenidos por el Senado, que aún era radical socialista, no habían sabido hacer nada con su mayoría en la Cámara, salvo aquel matiz de República conservadora que reflejaba con bastante fidelidad el que le diera la Asamblea de 1871. Y como aquella de 1871, dulce y buena Asamblea que había consagrado la Francia al Sagrado Corazón, esta Cámara, «azul horizonte», en que la mitad de los componentes decíase que comulgaban por Pascua Florida, no había arbitrado un medio, el que fuere, para asegurarse contra el riesgo de unas elecciones adversas. Tan sólo el Presidente, elegido para suceder a Pablo Deschanel, obligado éste a dimitir por su enfermedad, intentó hacer algo. Este Presidente se llamaba Alejandro Millerand. La experiencia y el patriotismo lo habían mudado. Aquel socialista que, veinte años antes, asustaba a la burguesía, habíase convertido en un hombre conservador que no se limitaba a serlo pasivamente. Dió vida a los derechos que le otorgaba la Constitución y no temió tomar partido a favor de la mayoría a la que debía su puesto.

¿Que es lo que había hecho Mac-Mahon cua-

renta años antes? Poner su nombre en la balanza a favor del orden moral. La historia se repetía con hombres viejos y circunstancias nuevas. La antigua Unión republicana se convertía en el «Cartel» agrupando a radicales, socialistas y revolucionarios, conforme a la consigna de «no hay enemigo a la izquierda», que ya había prevalecido con Waldeck-Rousseau y el 16 de mayo. Las armas también fueron las mismas: lanzar la acusación de belicismo contra el Bloque nacional, como en otro tiempo se había lanzado contra la derecha católica y luego contra los moderados; denunciar a Raimundo Poincaré como fautor de la guerra y enarbolar ahora como bandera de la izquierda aquella paz que no supieron guardar en 1914. Tampoco falló ahora el resultado: en mayo de 1924 se trocaba la mayoría. La representación proporcional había jugado esta vez a favor de los partidos más avanzados y amplificado la corriente.

Después de cinco años de exclusión del Poder, los cartelistas, victoriosos, subían ávidos de represalias, y comenzaron por hacer pagar a Alejandro Millerand el apoyo que había prestado a las derechas. El mariscal, después de su caída, había podido contar con el Senado; el Presidente, ni con el Senado pudo contar. Aislado ante la Cámara en que los radicales socialistas se negaron a responder a su llamamiento, y practicaron la huelga ministerial, vióse constreñido a ceder a las conminaciones de la extrema izquierda y presentar la dimisión. La ley del septenio quedaba violada. La institución presidencial recibía un golpe del que parecía imposible curarse,

y, mientras, la violencia y animosidad de los socialistas llevaban a una situación casi revolucionaria.

Todo era de temer si, a pesar del golpe que acababa de recibir, no hubiera continuado vigente una Constitución que todavía iba a servir para restablecer el equilibrio. Había que nombrar al sucesor de Alejandro Millerand, y el Cartel presentó a Pablo Painlevé. En contra, presentó su candidatura Gastón Doumergue, hasta hacía poco tiempo representante de la izquierda más suspicaz que lo había propuesto en 1913 para vigilar a Raimundo Poincaré. ¿Qué indicios había para reconocer que era él el candidato pedido por el interés general? ¿Qué garantías serias daba de su moderación? Era protestante y obtuvo los votos de los católicos; no decepcionaría las esperanzas puestas en él. La Presidencia, sobreviviendo a todas las agitaciones, no había terminado de llenar su papel bienhechor; por una especie de ley secreta, el titular había sido siempre un moderado.

A la nueva mayoría le fué fácil cumplir su promesa principal y evacuó la cuenca del Rhur, so pretexto de reconciliar a Francia y Alemania. Las consecuencias serían desdichadas, pero no iban a producirse sino más tarde; todavía habían de transcurrir siete u ocho años para darse cuenta de que lo que se había hecho era ayudar demasiado al resurgimiento de Alemania. En otro sector de cosas, las sanciones llegarían con mucha mayor rapidez.

Si ya, en los años que habían precedido a la guerra, el estado de la Hacienda llegó a constituir una preocupación y el orden aparecía quebrantado, y el déficit, patente, jamás la penuria del Tesoro ha-

bía sido tan grave como ahora ni la catástrofe tan absoluta. Hasta entonces una mala gestión podía prolongarse durante años enteros sin afectar a nada vital. Pero ya todo había cambiado con la aparición de un mal desconocido desde hacía un siglo; el curso forzoso, la inflación, el papel-moneda «asignado», monstruo engendrado por la Revolución bélica y convertido todavía en legado de la guerra, cataclismo invisible al principio, pero que no aguardaba sino la ocasión para estallar con toda su furia.

Ciento veinticinco años de una confianza en la solidez del franco tan segura como la de los hombres en la regularidad del sol, habían ocultado por mucho tiempo la degradación de la moneda. Poco a poco, el mal se había hecho sensible y comenzaban a comprenderse sus causas. Se había gastado sin contar. La gestión de la Hacienda pública resultaba comprometida, y la menor imprudencia podía ser fatal. El Cartel amenazaba al dinero y el dinero tuvo pánico. El socialismo asustaba al ahorro, y el ahorro huía. Mucho debió de hacerse para quebrantar la fe de los franceses en la firma del Banco de Francia. En dos años esta religión secular se desvanecía. Y en el mes de julio de 1926 ofrecióse el espectáculo extraordinario de un ministro de Hacienda que revelaba en la Tribuna cómo el Tesoro público no tenía ya con qué atender a los gastos del día siguiente, y que el único recurso que restaba era el artificioso de una nueva emisión de papel moneda. Aquel día, el franco no valía más que diez céntimos y amenazaba con caer todavía más bajo. El pánico fué general.

La revuelta acechaba. Todo se iba con las rentas, con las economías, con el pan de otros días, algo que el país del ahorro y de la propiedad había creído indestructible, hasta el punto de que no había creído peligroso el roce con el socialismo. Ahora, ante el abismo entreabierto, los ánimos se mudaban y renegaban del Cartel. Como en los días malos, mientras los ministros, desalentados, declaraban su alarma, una multitud irritada comenzaba a congregarse ante la Cámara. Oíanse ya los primeros rugidos.

¿Qué es lo que se necesitaba para que todo se viniera abajo y el régimen mismo peligrase? Que el Ministerio se obstinara y la mayoría no quisiese ceder. Habíase llegado a un trance en que ninguno de los hombres salido de aquellos bancos podía restablecer la confianza desaparecida. O el Cartel se hacía a un lado, o la República amenaza sufrir la suerte de los monarcas que, por no resignarse a tiempo a prescindir de ministros impopulares, luego se ven forzados a abdicar.

Silencioso, Gastón Doumergue consideraba los progresos del mal y esperaba el momento de intervenir. La hora de cumplir su misión tutelar era llegada. Un hombre había a quien la voz pública señalaba como el único capaz de restaurar la confianza y de retener la moneda al borde del abismo. Ese hombre era todavía Raimundo Poincaré. Por mucho que ello le costase al partido radical en su orgullo, no solamente le dejó libre el acceso al Poder, sino que le suplicó lo tomara. Eduardo Herriot se apartó, de acuerdo con la Presidencia, de acuerdo también con esa tradición que llevaba al régimen a salvarse a sí mismo, a no exponerse al descontento prolongado. La

República mostraba aún esa plasticidad y flexibilidad que tantas veces, al contener a la democracia, la había permitido doblar el cabo de las tormentas.

Muy cerca debió de estar la catástrofe y muy grande hubo de ser el destrozo, cuando el franco, reducido en su caída a diez céntimos, ya no se restablecería más que hasta veinte. Pero el desastre financiero, el desastre brutal en que el régimen estuvo a pique de hundirse, había sido conjurado. En interés mismo de la República, los republicanos más avanzados habían sacrificado su amor propio, sus pasiones, sus rencillas. Todos habían oído muy clara la voz del instinto de conservación.

¿Por qué, si no, desde aquel 4 de septiembre del año 1870, cuando un tumulto la proclamaba y sus primeros jefes sentíanse ahogados por un ansia secreta y asediados de dudas, había podido durar tanto tiempo la República? Porque en todas las circunstancias críticas que había atravesado, guardóse de cometer un yerro extremo, porque en cada una de ellas había sentido a tiempo cuál era la condición a costa de la cual podía salvarse, porque siempre había encontrado una mano que la sacase del abismo, aunque fuese a última hora, en el momento supremo.

Con todo, terminada la operación de salvamento, cumplida por Raimundo Poincaré y pasada la calma consiguiente, las dificultades de gobierno forzosamente habían de reaparecer, casi las mismas y quizá más graves. El problema estribaba en saber si volvería a encontrarse siempre la misma inteligencia, la misma previsión, la misma suerte y felicidad.

XIV

El declive

De esta suerte, salvando obstáculo tras obstáculo, el régimen, entrando en tiempos difíciles, lograba todavía conciliar los contrarios. Como aquel Julio Simon, que saludaba a derecha e izquierda, seguía siendo suficientemente conservador y no dejaba de ser republicano, y hasta ofrecía sus ribetes de socialista. Sin doctrina, sin historia y sin principios, su ambición suprema parecía cifrarse en conservar la vida.

En 1928, el país del ahorro, no repuesto aún de sus angustias, eligió una Cámara de opiniones moderadas. Aquello fué, ya según la costumbre, un alto y una pausa: no aceleró la destrucción, pero tampoco hizo nada por la cura. El centro derecha gobernaba con las ideas del centro izquierda, y sobre el centro izquierda actuaba el socialismo a la manera de un amante, y, en aquella inercia, ni la política exterior ni la interior experimentaban notable mudanza. El programa de los radicales era aplicado por los moderados, tan cuidadosos de complacer a los electores y de prometerles la paz sin esfuerzo y de ser con ellos espléndidos a costa del Estado, como

los otros lo habían sido de no asustar a las gentes apegadas a sus bienes y a sus costumbres, y de retardar el efecto de las medidas y leyes ruinosas.

En 1931 terminaba el septenio de Gastón Doumergue. Hurtándose a las peticiones, el Presidente rehusó una nueva candidatura y partió con la aureola del hombre de orden, del patriota que cinco años antes, cuando todavía vacilaba con el franco, había cooperado con su intervención a ese otro milagro, a esa segunda victoria del Marne que la recuperación de sesenta mil millones emigrados había inscrito en los fastos de la sociedad francesa, salvándose ella misma. Como tantos republicanos entrados en razón, Gastón Doumergue podía decir, a la vista de su pasado, que los tiempos habían cambiado, y él con los tiempos. Pasaba ya ese cuadro de reserva adonde, en las circunstancias graves, se iba a buscar la salvación. Ahora tratábase de asegurar su sucesión, y Arístides Briand era uno de los aspirantes. ¿Quién podía gloriarse de una mayor popularidad? A sí mismo se había él llamado el peregrino de la paz; solía decir que su sola presencia exorcizaba la guerra, y esto no sólo lo había hecho creer a las gentes, sino que había acabado por creerlo él también. Hasta los moderados lo guardaban en sus ministerios como una especie de fetiche. Parecía, pues, que no tenía sino presentarse para ser elegido, y, sin embargo, en escrutinio secreto, el Congreso lo descartó. Una vieja ley no escrita, ley de preservación y de prudencia, era aún aplicada. Aunque pesaba mucho el nombre de Arístides Briand, aunque nadie dudaba de su extremado pacifismo, su obra política inspiraba incertidumbre, dejaba ver deslices, y era combatida por los que se apercibían de que el *apóstol* había sido engañado por alemanes cínicos y hábiles. Con su elección era de temer una Presidencia agitada, protestas, tumultos, quizá aún peor. Prefirióse a Pablo Doumer, que muy pronto, como Carnot en otro tiempo, iba a caer a los golpes de un asesino. Estaba escrito que jamás el primer puesto del Estado sería confiado a un hombre que los partidos avanzados pudieran jactarse de tenerlo a su arbitrio. Por lo demás, Arístides Briand moriría antes de que el resurgimiento de la Alemania guerrera demostrase lo profundo de sus formidables errores.

Todo el arte de gobernar parecía reducirse a evitar los grandes descontentos, y esta línea de conducta aparecía tan bien trazada que apenas sufrió variación cuando, en 1932, la unión de las izquierdas, sin excluir a los comunistas, fué reformada y arrebató la mayoría a los republicanos nacionales, oportunamente acusados, conforme al uso ya establecido, de ser el partido de la guerra. El Cartel volvía al Poder, pero ninguno de sus jefes había olvidado la lección de 1926 y el pánico monetario. Eduardo Herriot, pues, estaba dispuesto a observar una actitud circunspecta. El jefe no tardó en ser desbordado por sus propias tropas y por los jóvenes radicales de acción, impacientes por encaramarse al Poder.

Lo que les urgía era, sin duda, la necesidad de mantener ocultos esos escándalos y esos *casos* de corrupción que rebrotaban de período en período, y ahora, por las facilidades del crédito y de la riqueza ficticia, por las necesidades de dinero y de lujo y

por la descomposición de las costumbres, surgían con doble frecuencia. Cómo surgió el más resonante de esos escándalos, qué esfuerzos se hicieron para ahogarlo, qué agitación y qué indignación dominaron al público, es lo que quedará, probablemente, ligado al nombre de Stavisky, más infamante que el de Panamá, porque la estafa pura y simple degradaba todo cuanto tenía allí algún contacto. Un ministro sospechoso de proteger a los políticos venales era derribado por los clamores de la calle. Su sucesor, que emprendió el mismo camino, concibió el proyecto temerario de resistir por la fuerza las exigencias de la honradez. Y así hasta que llegaron a una noche sangrienta.

Jamás, hasta entonces, había cometido la República una falta verdaderamente capital. Jamás se había obstinado en mantener un Gobierno que el pueblo detestaba. Jamás, sobre todo, se había encontrado en manos de dirigentes tan ineptos. Carlos X había sucumbido por conservar demasiado tiempo a Polignac; Luis Felipe por haber dimitido demasiado tarde a Guizot. El 6 de febrero de 1934, por culpa de una especie de Junta que se negaba a dejar el Poder, la República corrió un peligro que no había conocido hasta entonces. Era ella misma la que provocaba la insurrección haciendo disparar sobre la multitud, y la llamada histórica surgía de las piedras ensangrentadas: «¡A las armas, asesinan a nuestros hermanos!» Durante algunas horas pareció que se jugaba a todo evento la suerte del régimen. Al día siguiente, los amotinados exasperados y resueltos a proseguir la lucha quizá hubieran sido ametrallados,

bien que la situación estuvo incierta y más de un regimiento vacilante. Pero los jóvenes radicales que pretendían someter París hubieran hecho algo más que vencer: dar un golpe de Estado e instaurar su dictadura contra la legalidad.

Tres jornadas habían bastado para la revolución de 1830 y para la de 1848. El 7 de febrero, a las once de la mañana, cuando apenas había podido hacerse el recuento de los muertos y heridos en las descargas de la noche, todo se apaciguaba y se restituía al orden. La suerte del régimen era que volvía a encontrar su vieja Constitución, sus poderes todavía casi separados y el elemento arbitral y moderador en su puesto. La Presidencia servía aún para algo. El Jefe del Estado, el décimotercero en la serie de aquella «monarquía constitucional bajo otro nombre», arrojó en la balanza la amenaza de su dimisión y obligó a los aventureros jacobinos a retirarse. Entretanto, el Poder estaba vacante, y París agitado y bajo las armas. Había que encontar inmediatamente al hombre de bastante prestigio para asegurar una tregua, y no había ya mucho donde elegir. Se pensó en Gastón Doumergue, se le solicitó, y se le determinó a salir de su retiro. Su aparición produjo el mismo efecto que ocho años antes la de Raimundo Poincaré. En unas horas la situación crítica perdía su tensión; en unos días el peligro financiero, vuelto merced a los Gobiernos de esencia socialista, se alejaba de nuevo, y la Cámara, sintiendo la gravedad de las culpas cometidas, se resignaba a eclipsarse para no hundirse.

Gastón Doumergue se impuso por la necesidad

hasta el día en que quiso enmendar la Constitución. Persuadido de que nada podía esperarse si aquello continuaba por los mismos carriles, viendo que después de cada tregua se iba descendiendo un poco más, considerando precario todo resurgimiento si no se hacían algunas reformas, propuso ciertos medios que, a su entender, fortalecerían la autoridad del Gobierno y reafirmaría el Estado. En definitiva, él ya se había desengañado de que la democracia socializante pudiera ser contenida por los procedimientos ordinarios empleados por sus predecesores y por él mismo.

Por ilusión que tuviera en la virtud de sus reformas, se la había hecho aún mayor respecto de la acogida por parte de los políticos. Había sido recibido como un salvador. Pues bien; casi se le lanzó por atentado a la República. La Constitución era defendida como un texto sagrado por los herederos de quienes la habían recibido de manos de los conservadores sin reconocerle un carácter verdaderamente republicano.

Detenemos este relato a las puertas de un porvenir desconocido. El régimen continúa. Su aspecto externo permanece intacto. Su marcha aparece cada vez más irregular, puesto que con una frecuencia creciente se ve obligado a suspender los Gobiernos de mayoría y el juego de los partidos, es decir, la esencia del sistema parlamentario, y a recurrir a pequeños dictadores empíricos, según la expresión de Augusto Comte en tiempos más lejanos. Mientras, la necesidad de poner remedio a los abusos es

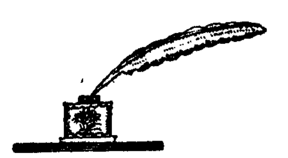
sentida en todas partes exactamente como lo era en vísperas del 1789. Como entonces también, cualesquiera reformas sugeridas tropiezan con una oposición, y no hay en toda la nación dos grupos unánimes en su deseo. Todo el mundo a exigir la suya, y nadie a aceptar ni una siquiera, porque ni una siquiera hay que no roce esta o aquella situación adquirida, y no hay situación adquirida que consienta en sacrificarse.

A la verdad, si las dificultades han crecido, si la guerra y postguerra han contribuído a engrosarlas, ellas han surgido con el desarrollo de la democracia, rechazada primero, contenida después, desbordada al fin, y que, justificando la máxima corneliana de que «el peor de los Estados es el popular», no puede ser atenuada sino por calmantes de un efecto provisional. Sin presumir, al término de esta narración, de la menor originalidad, transcribiremos, después de tantos otros, los pasajes eternos de la introducción de Tito Livio a su *Historia de la República Romana*:

«Bien sé que la mayoría de los lectores no gustarán de ver los orígenes, impacientes por llegar a estos últimos tiempos en que las fuerzas de un pueblo, tantos siglos soberano, se destruyen entre sí... Que cada cual por su parte se aplique atentamente a conocer cuáles fueron las costumbres, cuál la vida de Roma y por qué hombres y por qué medios, en la paz y en la guerra, ha sido fundado y extendido este Imperio. Entonces advertirá el movimiento insensible por el que, al relajarse la disciplina, las

costumbres comenzaron a decaer, y luego fueron degenerando cada día y se precipitaron, por fin, en su hundimiento hasta llegar a estos tiempos en que nosotros no podemos ya soportar ni nuestros vicios ni sus remedios.»

ÍNDICE



Este libro se acabó de imprimir en los talleres de Gráfica Universal, sitos en Evaristo San Miguel, 8, el día once de enero de mil novecientos cuarenta.

